LA INCIDENCIA DE LA REFORMA PROCESAL LABORAL EN LA REVISIÓN JUDICIAL DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Miquel Àngel FALGUERA BARÓ
Magistrado especialista
Sala de lo social del TSJ de Cataluña

Índice

1. [Los fines perseguidos por el legislador: ¿era necesario el cambio legislativo?](#)
 2. [Las singularidades específicas de las modificaciones de la LPL](#)
 - 2.1 [La NOJ y la jurisdicción social](#)
 - 2.2 [Las nuevas funciones del Secretario judicial](#)
 - 2.2.1 [Marco general: las nuevas competencias en aspectos claramente no jurisdiccionales](#)
 - 2.2.2 [El trámite de admisión de la demanda](#)
 - 2.2.3 [La terminación del proceso: especial referencia al trámite de conciliación ante el Secretario judicial](#)
 - 2.2.4 [La vista oral y el Secretario judicial](#)
 - 2.2.5 [Recursos y remedios procesales](#)
 - 2.2.6 [Las nuevas funciones del Secretario en relación a la ejecución](#)
 - 2.2.7 [Los nuevos instrumentos procesales](#)
 - 2.3 [El nuevo modelo de acumulaciones de acciones, procesos y recursos](#)
 - 2.4 [Adaptaciones “históricas” de la LPL](#)
 - 2.5 [La “readaptación a la LEC”](#)
 - 2.6 [Las nuevas competencias procesales de los graduados sociales](#)
 - 2.7 [Otros cambios normativos](#)
 3. [Entrada en vigor](#)
- [ANEXO: TEXTO COMPARADO DE LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LA LPL TRAS LA LEY 13/2009](#)

Ciertamente el bloque legislativo publicado en el BOE del pasado cuatro de noviembre (en concreto, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial y la Ley Orgánica 1/2009, de la misma fecha¹) poco tiene que ver, de entrada, con el objeto de estas jornadas, esto es el control judicial de la extinción del contrato de trabajo, más allá de algunos efectos indirectos que abordaremos a lo largo de estas páginas. Dicho cambio legislativo, como es perfectamente conocido, se centra en forma esencial en el funcionamiento de la oficina judicial, en lo que podríamos denominar como su “puesta al día”, y no está en la mente de los “padres de la patria” la afectación en forma alguna del discutido, hipócrita y descompensado sistema de extinción del contrato en España.

Sin embargo, mucho me temo que los organizadores de estas XXI Jornades Catalanes de Dret Social han pretendido no dejar a parte un análisis de esa novación legislativa, de indudables efectos sobre el procedimiento laboral en forma inmediata y para ello han introducido con acierto esta materia en el programa (otra cosa, es que hayan acertado con el ponente, cosa que dudo, aunque no por ello dejo de manifestar en público mi agradecimiento) Por eso, este tema ha de ser visto por los asistentes como una materia autónoma en el programa de las Jornadas, en tanto que el objetivo de estas páginas no va a ser tanto, en consonancia con la Ley, la perspectiva extintiva-contractual, sino las reflexiones iuslaboralistas sobre el mentado cambio legislativo-procesal. Ahora bien, en la medida de lo posible, voy a intentar vincular mis reflexiones con el objetivo de las Jornadas –aunque adelanto ya, desde ahora, que este nexo es muy tenue y, en general, claramente generalista-.

Mi intervención por tanto se va a centrar en la nueva regulación de la Oficina Judicial, esencialmente por lo que hace al procedimiento laboral. Y a efectos explicativos he dividido mi ponencia en dos grandes secciones. La primera, tiene un carácter meramente introductorio y general, en relación a los objetivos perseguidos por el legislador, a lo que añadiré unas reflexiones específicas respecto a si dicho cambio legislativo era necesario y sus limitaciones. Y en la segunda parte, obviamente de mucho mayor extensión, analizaré los cambios más significativos que va a experimentar el quehacer iuslaboralista en el foro.

¹ .- Téngase en cuenta que la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios ha venido también a observar determinadas modificaciones de la LEC que, en algún punto concreto y como se verá a lo largo de la ponencia, ha afectado a las funciones del secretario judicial.

1. Los fines perseguidos por el legislador: ¿era necesario el cambio legislativo?

No creo pecar de parcial si constato, de entrada, que durante decenios los poderes ejecutivo y legislativo han omitido cualquier intento serio de adaptación de la estructura material judicial a la nueva realidad. El poder judicial ha sido el gran olvidado desde la transición. Y no me estoy refiriendo ahora a las leyes procesales –que en general, salvo en el ámbito penal, han experimentado cambios novatorios significativos en los que el orden social, como prácticamente ocurre siempre, fue el pionero-, sino a la propia estructura, funcionamiento y organización de la oficina judicial. En otras palabras: el modelo hasta ahora imperante en ese terreno era prácticamente el mismo que el diseñado a finales del siglo diecinueve, que podríamos caracterizar, simplificando –y, por tanto, siendo inexactos-, en la forma siguiente: un juzgado, un juez prácticamente omnipotente en su ámbito de poder, un Secretario dedicado esencialmente a dar fe pública procesal y un grupo de funcionarios tramitando papeles. Todo ello cerrado en las cuatro paredes del juzgado, sin conexión, ni relación con los otros juzgados de la misma demarcación y jurisdicción. Unos auténticos Reinos de Taifas.

Por otra parte, es obvio que nuestro modelo se caracteriza por una planta judicial ciertamente limitada –al menos, en relación con la mayor parte de países de nuestro entorno, que acreditan mayores ratios ciudadanos/jueces- y por una conocida obsolescencia de medios materiales –significativamente, técnicos-². Aspectos que, en buena parte, explican que en términos generales la sensación ciudadana de que “la justicia es lenta” esté en la mayor parte de casos justificada. De esta manera, el aparato funcional de la justicia camina muchas leguas atrás del galope de la propia sociedad e, incluso, del trote de la Administración pública. Simplemente, el tercer poder no tiene medios, infraestructuras y personal suficiente para seguir ese ritmo. Y eso comporta un evidente déficit de constitucionalidad, máxime cuando los efectos de la crisis están ya comportando un notorio incremento de la litigiosidad, significativamente en algunas jurisdicciones.

² .- Véase MARTÍNEZ MOYA, J.; “*El despegue de una nueva percepción de la Justicia: e-Justicia*”; Diario La Ley, N° 7038

No quiero ocultar la desazón que ese panorama nos ocasiona a los propios componentes de la carrera judicial: nosotros somos por obvios motivos los primeros que constatamos esas lagunas en los derechos constitucionales de los ciudadanos; sin embargo, no tenemos competencias –más allá de los esfuerzos personales individuales en el trabajo diario o en la limitada gestión de la oficina judicial- para cambiar nada, pues no podemos contratar nuevos funcionarios, adecuar y coordinar programas informáticos y hardware, redistribuir papeles en la gestión substantiva o ampliar la planta. A lo que cabe añadir que, pese a la preocupación que nos produce ese panorama diario, somos –como es lógico y deseable- los principales objetivos del pim-pam-pum mediático, con razón o sin razón, cada vez que esas carencias hacen emerger casos incomprensibles para la ciudadanía. Todo ello –junto a determinadas maneras de negociación del anterior equipo ministerial – acabó desembocando en la conocida “huelga” de jueces del pasado mes de febrero de 2009 (sin que la posterior, de octubre sea equiparable a aquella otra, ni cuantitativamente ni por los motivos esenciales que la justifican)

Era hora de adecuar nuestro modelo de gestión de la oficina judicial a una mínima modernidad, que es, en definitiva, lo que pretende el referido cambio normativo. No deja de ser significativo que nos hallamos ante unas normas de muy larga evolución –que hunden sus raíces Libro Blanco de la Justicia, aprobado por el CGPJ en fecha 8 de septiembre de 1997, seguido por el Pacto por la Justicia de 28 de mayo de 2001 y la reforma de la LOPJ a través de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre - que, pese al referido conflicto reciente en la carrera judicial, llevaba gestándose ya muchos años. Y es de ver como los objetivos perseguidos por el cambio legal aquí analizado son diáfanos: la optimización de los recursos públicos invertidos en el funcionamiento de la justicia.

Substancialmente –y al margen de otros aspectos puntuales- esa optimización se basa en dos ejes centrales. El primero, la unificación de determinados aspectos de funcionamiento de lo que conoce en la jerga como NOJ o nueva oficina judicial (a través, esencialmente, de los llamados servicios comunes); el segundo –y el más significativo, en tanto que es el auténtico fin del cambio

legislativo³-, la dotación de mayores competencias a la figura del Secretario judicial⁴.

Debo destacar que si estuviéramos hablando de una empresa privada –que persiguiera, en definitiva, la mayor obtención de dividendos para sus accionistas- serían esas medidas que hace lustros se hubieran implementado. Por un lado, parece obvio que determinados aspectos funcionales no tienen porqué ser repetidos en cada juzgado –o, incluso, Tribunal-, pudiendo ser unificados, con positivos efectos sobre la inversión pública y la mayor celeridad y especialización, máxime cuando las nuevas tecnologías coadyuvan a ello. Por otro, es evidente que el anterior modelo de atribuciones del Secretario judicial comportaba tener un número elevado de funcionarios públicos licenciados en derecho y con una alta cualificación y especialización en derecho procesal dedicados, en gran medida –aunque no lógicamente en exclusiva- al otorgamiento de la fe pública procesal, en unos momentos en que esa fe pública puede ser –y pido disculpas por una interpretación tan simplista- acreditada también por medios informáticos.

Parece evidente, pues, que nos hallamos ante una modificación legislativa de simple sentido común que pretende la mentada optimización del gasto público en la justicia. Sin embargo, pese a esa valoración positiva inicial, no quiero dejar de constatar algunas reflexiones adicionales más críticas.

³ .- GARCÍA MURCIA, J.; *“La Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal y su impacto en el proceso laboral: una primera y muy general aproximación”*; Derecho de los Negocios núm. 231.

⁴ .- La Exposición de Motivos de la Ley 13/2009 justifica dicha medida desde una doble vertiente: la del propio trabajo del juez, a fin de descargarlo de carga de asuntos (*“Se trata, en síntesis, de que los Jueces y Magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para ello es preciso descargarles de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las funciones constitucionales que se acaban de señalar, y a ello tiende el nuevo modelo de la Oficina judicial. En ella, se atribuirán a otros funcionarios aquellas responsabilidades y funciones que no tienen carácter jurisdiccional y, por otra parte, se establecerán sistemas de organización del trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, de forma que su actividad profesional se desempeñe con la máxima eficacia y responsabilidad. En este nuevo diseño, jugarán un papel de primer orden los integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios judiciales”*), como desde la perspectiva del Secretario (*“Una de las claves fundamentales para que las Oficinas judiciales alcancen el objetivo de prestar un servicio próximo y de calidad, recogido en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, reside indudablemente en los profesionales que trabajan para la Administración de Justicia, en concreto y por lo que ahora nos ocupa, los Secretarios judiciales. No ha de olvidarse que se trata de técnicos en Derecho, cuya capacitación les permite responsabilizarse de determinadas materias que si bien quedan fuera de la potestad jurisdiccional atribuida con exclusividad a Jueces y Tribunales, no por ello son menos importantes para la buena marcha del servicio público que constituye la Administración de Justicia”*)

Así, como indirectamente he dicho antes, es ése un cambio que podría –o, mejor dicho, debería- haberse puesto en práctica hace ya muchos años. A lo que cabe añadir que, ya puestos, la reforma se ha quedado corta, en tanto que no se ha atrevido a dar el gran salto hacia aquello que parece ahora –y no de aquí unos años- necesario: la “oficina judicial sin papeles”. Ciertamente, ésa es una posibilidad contemplada ya en la reforma de la LOPJ a través de la ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, con la modificación del art. 230 (en relación al 271), y posteriormente en los arts. 135.5, 146.3, 162.1, 162⁵ y 172 y 175 LEC 2000 o en el art. 56.5 LPL. Y, asimismo, varias reflexiones en relación a esa materia se contemplan en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, del año 2002. Sin embargo, es notorio que también en este caso del dicho al hecho hay un trecho y que, al margen de esas previsiones legales –y de otras que incidentalmente abordan la cuestión- el mentado desiderátum del juzgado virtual no acaba de arrancar.

Desde ese punto de vista, quizás podría haberse exigido al legislador que su falta de diligencia en las cuatro o cinco legislaturas anteriores fuera compensada con una reforma para el futuro y no sólo para el presente. No es el caso: ¿tendremos que esperar a una reforma de aquí a varios años, cuando se haga clamorosa esa necesidad (si es que no lo es ya ahora)?

En todo caso, no puedo dejar de constatar que no nos hallamos ante un compromiso de cambio profundo del aparato judicial que derive en un mayor gasto público en el sector –pese a ciertos compromisos adquiridos por el Ejecutivo a raíz de la huelga-. Falta, en este sentido, un gran pacto de Estado –o, mejor dicho, la puesta en práctica de los diversos compromisos políticos que hace ya años se concretaron entre los grandes partidos- que, de una vez por todas permita a nuestra Justicia la puesta al día ante las reclamaciones ciudadanas. Ni tampoco nos encontramos ante un cambio del modelo tradicional de la organización de los juzgados: ciertamente hay servicios que se hacen mancomunados, pero de alguna manera se sigue manteniendo un modelo celular, con delegación de determinadas funciones en servicios

5 .- Que experimenta en su apartado 1 la adición del siguiente párrafo: “Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válida cuando sea recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema”

comunes, sin que nadie se atreva a dar el gran salto hacia un sistema más horizontal, basado en una mayor flexibilidad organizativa. En plata: ¿para qué los destinos “en propiedad?”, ¿por qué –aunque la reforma no tiene que significar una oposición a la pregunta- cada juzgado ha de tener un Secretario?, ¿por qué cada juzgado ha de tener una determinada plantilla de funcionarios adscritos en cada escala?, ¿por qué el mantenimiento de determinados niveles en el seno de la oficina judicial? Nadie se ha atrevido a dar el gran salto a la oficina judicial flexible.

Por otra parte, no deja de ser preocupante que esta reforma de la oficina judicial se produce en unos momentos de profunda crisis económica⁶, lo que – entre otros efectos más dramáticos para la ciudadanía- conlleva una sensible paralización del gasto público. No quiero ser alarmista, pero tengo la impresión –y hablo por simple referencia y una cierta intuición- que la descrita situación va a comportar una reducción de las expectativas que la novación legislativa puede tener sobre el funcionamiento de la Justicia. Craso error, desde mi punto de vista. En efecto, si alguna conclusión cabe extraer de las singularidades de la crisis en nuestro país es que no podemos volver al modelo anterior basado en la escasa innovación y productividad y en sectores de bajo valor añadido. Es por ello que parece necesario un mayor esfuerzo de inversión en los sectores sociales clave (entre otros, enseñanza y formación a todos los niveles, I + D + I, políticas de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar, integración de personas discapacitadas, implementación de las nuevas tecnologías, atención a la dependencia, políticas serias de medio ambiente, modernización de la Administración pública y de la Justicia) si es que se pretende que este país tenga un mínimo futuro para nuestros hijos, tras la estúpida orgía suntuosa de los últimos años. Aunque advierto que es esta una reflexión personal, de alguien –voluntaria y obstinadamente- lego en Economía y ciertamente distante de la del Gobernador del Banco de España.

2. Las singularidades específicas de las modificaciones de la LPL

La Ley 13/2009 viene en gran medida a transponer en el ámbito social los ya anunciado dos grandes ejes vertebradores del cambio de modelo (así, la unificación de determinados aspectos de funcionamiento de la oficina judicial y

⁶ .- Vid ASECIO MELLADO, J. A.; “Reformas procesales y crisis económica”; LA LEY 12500/2009

las mayores competencias de los Secretarios judiciales) Sin embargo, el impacto del cambio normativo en el procedimiento laboral no se queda sólo allí, sino que afecta también a otros determinados aspectos sustantivos. A lo que cabe sumar otras mutaciones que podríamos calificar como “menores” o, incluso en algún caso, como “incidentales”, que abordaremos con posterioridad

2.1 La NOJ y la jurisdicción social

Cabe constatar, de entrada, que pese a las declaraciones de intenciones de la Ley no nos hallamos aquí –a diferencia de lo que ocurre con las nuevas funciones del Secretario judicial- con una transformación “*in radice*” de las normas procesales. El legislador en este punto ha actuado en forma más comedida (probablemente por las obvias diferencias que el tema presenta entre las distintas jurisdicciones y territorios), de tal manera que más que “forzar” un nuevo modelo organizativo ha optado por eliminar posibles trabas legales a la implantación de los llamados “servicios comunes procesales”⁷. La Exposición de Motivos de la Ley 13/2009 es clara en este punto, al vincular esencialmente el nuevo modelo unificado a las nuevas competencias del Secretario judicial⁸. Lo que se debe cohonestar con el nuevo redactado del art. 521 LOPJ, tras la LO 1/2009 y los específicos ámbitos de actuación que allí se reseñan⁹.

⁷ .- Téngase en cuenta, por otra parte, que el Consejo General del Poder Judicial aprobó en fecha 25 de febrero de 2010 el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, pendiente de publicación en el BOE a la hora de escribir estas líneas. De momento, puede descargarse en: <http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpi/cgpi/pjexaminarlegislacion.html&TableName=PJLEGISLACION&dkey=238>

⁸ .- Así se afirma: “*debido a que las leyes que se reforman regulan el procedimiento y no la organización, a lo largo del articulado de las mismas se ha tratado de no hacer mención, salvo en supuestos excepcionales, a los servicios comunes procesales. En la mayoría de los casos el criterio adoptado es el de atribución al Secretario judicial de una determinada competencia, ya que es el responsable último de la realización de todas las actividades que sirven de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Magistrados (artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), aunque la ejecución material corresponda a los funcionarios de los Cuerpos regulados en el Libro VI de la Ley Orgánica, de conformidad con el catálogo de funciones que en el mismo se establecen y siempre bajo la dirección técnico procesal del Secretario judicial (artículo 457 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)*”

⁹ .- Dichos cambios se observan en el artículo Primero Dieciocho de la Ley Orgánica 1/2009, siendo su redactado del siguiente tenor literal:
“Se modifican el apartado 2 y la letra A del apartado 3 del artículo 521, quedando redactados como siguen:
«2. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos de trabajo de las distintas unidades que componen la Oficina judicial, incluidos aquellos que hayan de ser desempeñados por Secretarios Judiciales, e indicarán su denominación, ubicación, los

En cuanto a los aspectos de la oficina judicial unificada que se contempla en la LEC¹⁰, pueden destacarse los siguientes: reparto y remisión de asuntos (art. 69), tramitación de testimonios en relación a quien sea parte en un proceso ante un tribunal y no lo sea en otro habiéndose solicitado de parte la acumulación de procesos (art. 90.2), referencia genérica al lugar de las actuaciones judiciales (art. 129), dotación de plena eficacia de las comunicaciones judiciales a las partes por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial –aunque lógicamente se sigue manteniendo la dirección del Secretario- (art. 152.1, así como en el 161), notificaciones de cambio de domicilio u otros datos personales (art. 156.5), comunicaciones de testigos, peritos o demás intervinientes, del cambio de domicilio (art. 159.3), de los actos de comunicación –ampliando el limitado redactado anterior del art. 163-, auxilio judicial (art. 170), exhortos (arts. 171 y 173), presentación de minuta por los profesionales intervinientes (art. 242.3), posible práctica de diligencias preliminares (art. 259), proporcionar medios de documentación gráfica o visual en relación al estado de bienes embargados (art. 624.1), publicación de los anuncios de subasta (arts. 645.1 y 668), etc.

requisitos exigidos para su desempeño, el complemento general de puesto y el complemento específico.»

«A) Centro Gestor. Centro de destino.

A efectos de la ordenación de los puestos de trabajo y de su ocupación por el personal funcionario, tendrán la consideración de centros gestores los órganos competentes del Ministerio de Justicia o el órgano competente de las Comunidades Autónomas para la gestión del personal, a quienes corresponderá la formulación de la relación de puestos de trabajo en sus respectivos ámbitos territoriales.

Se entenderá por centro de destino:

Cada uno de los servicios comunes procesales.

El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio.

El Registro Civil Central y los Registros Civiles Únicos de cada localidad, donde los hubiese.

Cada una de las Fiscalías o Adscripciones de Fiscalías.

En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creación establezca como tales.

En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creación establezca como tales.

La Mutualidad General Judicial.

Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes o de menos de 7.000 habitantes, dotados de plantilla funcional en razón de su carga de trabajo.

El Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo.

Las Secretarías de Gobierno”

¹⁰ .- Para una mayor profundización de la regulación de la NOJ véase DE PORRES ORTIZ DE URBINA, E. (dir.); *“Hacia un catálogo de buenas prácticas para optimizar la investigación judicial”*; CGPJ, Madrid, 2009; GÓMEZ DE LIAÑO R.; *“Estructura y organización de la nueva oficina judicial”*; Diario La Ley, Nº 7016, MAGRO SERVET, V.; *“Funcionamiento de las oficinas de señalamiento inmediato”*; Diario La Ley, Nº 7195, y *“Hacia un cambio en la organización judicial española: «los juzgados bicéfalos»”*; Diario La Ley, Nº 7275, etc.

Y entrando ya en las innovaciones específicas de la jurisdicción social (teniendo en cuenta que en nuestro orden jurisdiccional tradicionalmente se han ido realizando prácticas novedosas experimentales que, en general, se han ido generalizando en mayor o menor grado) cabe destacar lo siguientes aspectos más significativos en la Ley 13/2009:

- En el art. 20 LPL se modifica el apartado tres, respecto al incidente relativo al trabajador que manifiesta la falta de comunicación del sindicato o su falta de aceptación, a efectos de su representación procesal. Como se recordará, el anterior redactado exigía que la declaración correspondiente se efectuara “a presencia judicial”, mientras que el actual redactado se limita a situar la titularidad en la genérica oficina judicial. Obsérvese en este punto que ni tan siquiera la Ley exige que el incidente se tramite por el Secretario judicial. No deja de ser una “rebaja” significativa, en tanto que las consecuencias de esa manifestación de desconocimiento pueden tener los efectos negativos para el sindicato supuesto representante que contempla el apartado dos del mentado artículo.
- Otro aspecto importante (en parte vinculado con el presente epígrafe) es la derogación efectiva de la singularidad del orden social en relación con la presentación de escritos el último día de plazo en el juzgado de guardia del art. 45.1 LPL. Ciertamente, ese modelo comportaba que en nuestra jurisdicción concurriesen dos regímenes excepcionales respecto a las actuaciones de parte en el “*dies ad quem*” de la caducidad: por un lado la específica aquí referida y, por otro, la general –y posterior en el tiempo- del art. 135.1 LEC (presentación hasta el día siguiente a las 15 horas) Concurrencia cuya compatibilidad alternativa había sido aceptada por la jurisprudencia¹¹. El nuevo texto abroga la singularidad laboral,

¹¹ .- SSTS UD 25.02.2003 –rec. 2121/2002-, 15.03.2005 –rec. 1565/2004-, etc., conforme a las cuales: “en tanto se mantenga la vigencia del art. 45.1 LPL, debe entenderse, de acuerdo con la Disposición Adicional Primera.1 LPL y el art. 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la regulación de la materia en cuestión que realiza la primera de dichas leyes se complementa con la de la segunda. Por tanto, si la parte se acoge al sistema del art. 45.1 LPL y pretende presentar válidamente un escrito el último día de plazo en horas en que no esté abierto el registro del Juzgado o de la Sala de lo Social, podrá acudir al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia y luego ponerlo en conocimiento del Juzgado o Sala de lo Social al día siguiente hábil. Pero puede utilizar también, alternativamente, el nuevo sistema introducido por el art. 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y presentar directamente ante el Juzgado o la Sala de lo Social, hasta las 15 horas del que podríamos llamar “día después”, es decir, el siguiente hábil al del vencimiento del plazo, su escrito; en cuyo caso, como es lógico, no precisa cumplir con la previsión del art. 45.1 LPL”. En idéntico sentido, resolviendo recursos de

remitiendo a la presentación de escritos sujetos a término al marco general y exigiendo su formalización únicamente en los servicios comunes. Es de ver, asimismo, que la Ley 13/2009 no sólo se queda ahí, sino que prohíbe la posibilidad de presentación de cualquier escrito y/o documentación ante los juzgados de guardia en aquellas islas que no tengan un juzgado de lo social, que antes se contemplaba en el art. 45.2.

- Al margen de esas singulares modificaciones hallaremos también otros cambios menores como los relativos a los siguientes artículos de la Ley procesal laboral: art. 42 (abrogando las competencias de la extinta figura del oficial habilitado a efectos de autorización de actuaciones judiciales), 47 (en relación a la permanencia de los autos en sede judicial), 55 (respecto a las comunicaciones a las partes en sede judicial), 110 (sede del ejercicio del derecho de opción en la modalidad procesal de despido), 192 (en cuanto a la presentación del resguardo del ingreso del capital coste por parte del condenado o del certificado de compromiso de pago de prestaciones por la entidad gestora en recursos de suplicación en materia de seguridad social), 228 (por lo que hace a la titularidad de la cuenta de consignaciones y el registro y depósito de la consignación en las normas comunes de los recursos de suplicación y casación), 253 (en relación a las comunicaciones de los registradores de la existencia de nuevos bienes tras un embargo previo, ya en fase ejecutiva), 256 (comunicación de la existencia de reembargo) y 286 (comunicación por la TGSS del capital coste respecto a ejecuciones definitivas de sentencias recaídas en la modalidad procesal de Seguridad Social)

Aún no vinculado con la nueva oficina judicial unificada, cabe llamar la atención sobre la nueva figura contemplada en el art. 347 bis LOPJ, tras la LO 1/2009, de los llamados “jueces de adscripción territorial”¹², cuya función es ejercer

queja, los autos TS 18.07.2001-rec. 1080/01-, 20.07.2001 -rec. 1079/01- y dos de 27.09.2001 -rec. 1078/01 y 1100/01 respectivamente-

¹².- “Se trata de miembros de la carrera judicial que permanecen sin un destino concreto, pero vinculados a una zona geográfica. De este modo, por designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas otras cuyo titular se prevea que estará ausente por tiempo superior a un mes. La Ley persigue con ello «evitar en lo posible la interinidad en el ejercicio de funciones jurisdiccionales y potenciar su desempeño por miembros de la Carrera Judicial», es decir, poner coto a la actividad de Jueces sustitutos, no sólo, como entiende la Exposición de Motivos, para alcanzar «una ostensible mejora en la calidad del

“funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular se prevea que estará ausente por más de tres meses o, excepcionalmente, por tiempo superior a un mes”

2.2 Las nuevas funciones del Secretario judicial

2.2.1 Marco general: las nuevas competencias en aspectos claramente no jurisdiccionales

La delimitación del ámbito de competencias entre juez/magistrado y Secretario judicial ha sido, sin ningún género de dudas, una cuestión compleja en la elaboración de la nueva Ley. Y como es sabido no ha tenido un respaldo unánime de la doctrina científica, en tanto que desde perspectivas estrictamente procesalistas se ha mostrado una disconformidad, más o menos contundente, en la línea divisoria fijada en la Ley¹³, a lo que cabe sumar alguna crítica relativa a la dependencia del cuerpo de Secretarios judiciales al Ministerio de Justicia, abogándose por su inclusión en el seno del CGPJ¹⁴.

Evidentemente se trata de una cuestión estrictamente interpretativa de los límites del art. 117 CE y, por tanto, de qué es “la potestad jurisdiccional”. Y en este punto, la Exposición de Motivos de la Ley 13/2009 es clara: se ha optado por expurgar de la función judicial todo aquello que no conforma el “núcleo

servicio público» (puesto que en muchas ocasiones el personal interino realiza su cometido de manera encomiable) sino también para que se cumpla mejor la exigencia de que sea el Juez natural (el predeterminado por la Ley) quien ejerza la función jurisdiccional”, según SEMPERE NAVARRO, A. V.; “La reforma procesal de 2009-2010 (I): la LO 1/2009”; AS 16/2009

¹³ .- Véase entre otros muchos ejemplos: BANACLOCHE PALAO, J.; “El proyecto de Nueva Oficina Judicial: ¿hacia un nuevo proceso administrativizado?”; Diario La Ley, Nº 7251, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A.; “El necesario debate sobre el nuevo modelo de oficina judicial”; Diario La Ley, Nº 7191; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.; “Comentarios al proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial”; rad 2/2009; MUERZA ESPARZA, J.; “Sobre la oficina judicial y la función jurisdiccional”; AJA 771/2009, y del mismo autor: “Sobre el proceso, la nueva oficina judicial y la Administración de Justicia”; AJA 773/2009, etc. Recuérdese, además, el famoso manifiesto que sobre la reforma legal entonces en curso firmaron un buen número de catedráticos y profesores universitarios de Derecho Procesal bajo el título “Por la unidad y la independencia en la administración de la justicia y por las garantías procesales de los ciudadanos”

¹⁴ .- Véase, SÁNCHEZ-PEGO, F. J.; “Reflexiones constitucionales sobre la reforma procesal de 2009”; AJA 783/2009

duro” de la actividad jurisdiccional, traspasando esas otras actividades a los Secretarios judiciales¹⁵.

De esta manera, en forma expresa el nuevo contenido del art. 179.1 LEC, otorga al Secretario judicial el impulso procesal de oficio del proceso, sustituyendo el anterior redactado que remitía a “*el órgano jurisdiccional*”. Es probablemente éste artículo el que con mayor rotundidad expresa el objeto de la reforma: limitar el papel del Juez y Magistrado a la actividad meramente jurisdiccional (entendiendo por tal esencialmente el juicio, la sentencia y el control de los actos procesales que se dicten en el Juzgado o Tribunal), dejando en manos del Secretario todos los aspectos de tramitación procesal de los autos.

En este marco de voluntad legislativa, cabe observar los siguientes cambios regulados en la LEC (al margen de los que afectan a otros aspectos, singularmente la ejecución y en menor medida los recursos, que abordaremos posteriormente) y que pueden tener eficacia directa en el procedimiento laboral (Disposición Adicional Primera. 1 LPL): las nuevas regulaciones en materia de participación procesal de terceros a través de la llamada “intervención provocada” (arts. 14 y 18 LEC), trámites de sucesión procesal por muerte de alguna de las partes (art. 16), sucesión por transmisión del objeto litigioso (art. 17), requerimiento de pago de honorarios de abogado (art. 35.2), renuncia del aportante de un documento probatorio tachado de falso por su contraparte iniciándose actuaciones penales por dicho motivo o alzamiento de la suspensión por dicho motivo (art. 40.5 y 6 en relación al art. 86.2 LPL), suspensión de la tramitación procesal por planteamiento de declinatoria (art. 64.1), suspensión del proceso y posterior diligencia de ordenación por abstención del juez (art. 10.2 2 y 3), remisión al sustituto de las actuaciones, caso de prosperar recusación (art. 109.1) y remisión de las mismas al Ministerio Fiscal (art. 109.4), declaración de recusación de perito por admisión de certeza (art. 126), o citación a las partes cuando se niegue y declaración de desistimiento en el caso de no comparecencia del recusante (art. 127), habilitación de días y horas inhábiles (art. 131.1), acuerdo de prórroga de

¹⁵ .- Se afirma en este sentido: “*La idea inspiradora de la reforma ha sido la de concretar las competencias procesales del Cuerpo de Secretarios judiciales, configurado como un cuerpo superior jurídico, de modo que salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se ha optado por atribuir la competencia del trámite de que se trate al Secretario judicial. De este modo, se garantiza que el Juez o Tribunal pueda concentrar sus esfuerzos en la labor que le atribuyen la Constitución y las leyes como función propia y exclusiva: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado*”

plazos por causa de fuerza mayor (art. 134.2), declaración de práctica de medidas a puerta cerrada en relación con las competencias plenas del Secretario (art. 138), habilitación como intérprete de cualquier persona conocedora de la lengua de la que se trata (art. 143.1), acuerdo de traducción oficial de documento en idioma no oficial en España por discrepancia de las partes al respecto (art. 144.2), ordenación de las oportunas indagaciones en relación a la determinación del domicilio de una parte (art. 156.1) y acuerdo, caso negativo, de comunicación por edictos (art. 156.4) y al Registro de Demandados Rebeldes (art. 157), régimen de comunicaciones a testigos y peritos (art. 159.2), comunicaciones en general (art. 165) y oficios y mandamientos (art. 167), requerimiento de urgencia de exhortos (art. 173), determinación de Magistrado ponente (art. 180), funciones de ordenación de notificación y archivo (art. 212), traslado del escrito de petición de ejecución y eficacia de sentencia en el caso de interesarse nulidad de actuaciones (art. 228.2), titularidad del incidente de reconstrucción de actuaciones (arts. 232 a 235), resolución del incidente de impugnación de costas (art. 246.3), notificación de subsanación de la no aportación de copias suficientes del escrito presentado de parte (art. 275), traslado de comunicación de parte de hechos nuevos antes del plazo de dictar sentencia (art. 286.2); conservación de grabaciones de imagen y sonido (arts. 359 y 383), admisión del recurso de reposición (art. 453) y tramitación de medidas cautelares (arts.731.2, 734, 741, 744, 745 y 747)

Por su parte, el nuevo redactado de la LPL contiene los siguientes cambios de articulado, también relativos a la mera tramitación: art. 19 (otorgando al Secretario el requerimiento y citación para la designación de un representante en demandas plurales de más de diez actores contra un mismo demandado), art. 21 (adopción de medidas para garantizar la igualdad de las partes cuando alguna de ellas pretenda comparecer asistida de letrado en actuación diversa al acto del juicio), art. 23 (citación del FOGASA en supuestos de empresas concursadas o declaradas previamente como insolventes), art. 43 (fijación de días u horas inhábiles para la realización de actuaciones procesales fuera del calendario del juzgado, en relación a las exclusivas competencias del Secretario judicial y respecto al nuevo contenido del art. 184 LOPJ), art. 48 (incidente de imposición de multas punitivas por no devolución de autos por las partes), art. 62 (con desaparición de la encomienda judicial al Secretario de la práctica de actos de colaboración a través de oficios, exhortos o mandamientos)

En cuanto a las modalidades procesales, los artículos que experimentan alguna modificación respecto al subapartado aquí analizado son los siguientes: art. 130 (citaciones a las partes a efectos de un posible litisconsorcio pasivo necesario en impugnación de laudos recaídos en elecciones sindicales), 132 (acuerdo para recabar a la oficina pública el texto del laudo arbitral sindical), 135 (requerimiento a la oficina pública para que se aporte el expediente administrativo en la submodalidad de impugnación de la denegación de registro del acta electoral), 137 (requerimiento de aportación del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en demandas de clasificación profesional), 139 (requerimiento de aportación de reclamación previa en demandas de Seguridad Social), 141 (requerimiento al empresario para que aporte documento de cobertura del riesgo en demandas de Seguridad Social por accidente de trabajo), 142 (devolución del expediente original en la misma modalidad procesal anterior), 144 (notificación al responsable de la entidad gestora o servicio común de no aportación del expediente administrativo, también en la misma modalidad), art. 147 (designación de un representante en los procedimientos de oficio que afecten a más de diez trabajadores), 168 (requerimiento a la oficina pública del expediente en materia de impugnación de resolución administrativa que deniega el depósito de estatutos sindicales) y 172 (requerimiento de expediente administrativo en la impugnación de estatutos sindicales)

Puede por tanto comprobarse como en este apartado de generalidades procesales, las formalmente nuevas competencias del Secretario judicial se limitan a la realización de requerimientos a las partes o terceros de aportación documental, citaciones y notificaciones en general, constataciones de hechos o manifestaciones de las partes, tramitación documental interna o externa y otras cuestiones procesales meramente incidentales. Y, como es perfectamente sabido, eran éstas atribuciones que en la práctica ya se venían realizando por los Secretarios judiciales, especialmente en la jurisdicción social a través de las llamadas propuestas de providencias o autos que se contemplaban en el anterior texto del art. 51 LPL, ahora abrogadas y sustituidas por los nuevos instrumentos procesales que posteriormente se analizarán.

Con todo, cabe recordar que el Secretario judicial continúa siendo por definición el fedatario público, aunque no cabe omitir el significativo cambio experimentado en el redactado del art. 145 LEC a la hora de regular dicha

función en una forma más puesta al día o, si se prefiere, menos tradicional¹⁶. Es más, como se ha dicho, se la eliminado la competencia de los oficiales habilitados a efectos de autorización de actuaciones procesales. A lo que cabe añadir que conforme al art. 137 –apartados 3 y 4- LEC cualquier actuación procesal que deba celebrarse en presencia del secretario se realice en su ausencia deviene nula de pleno derecho.

2.2.2 El trámite de admisión de la demanda

En relación al inicio del proceso, la Ley otorga al Secretario la capacidad de admisión de la demanda. Las voces procesalistas a las que antes he hecho referencia han insistido en que ésta es una potestad jurisdiccional, de la que deriva un primigenio y necesario acceso al proceso, que, como es sabido, ha dado lugar a una abundante doctrina constitucional que podría ser resumida (simplificando) en base a los siguientes parámetros: a) el derecho a la tutela judicial efectiva tiene una naturaleza prestacional de configuración legal, por lo que su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva se

¹⁶ .- Creo suficientemente elocuente la comparación entre el texto anterior y posterior a la Ley 13/2009 de dicho artículo en relación con las funciones del Secretario judicial. El redactado previo era el siguiente (en subrayado, las diferencias):

“1. Corresponde al Secretario Judicial, con el carácter de autoridad, dar fe de las actuaciones procesales que se realicen en el tribunal o ante éste, donde quiera que se constituya, así como expedir copias certificadas y testimonios de las actuaciones no secretas ni reservadas a las partes interesadas.

Concretamente, el Secretario Judicial:

1º Dará fe, por sí o mediante el registro correspondiente, de cuyo funcionamiento será responsable, de la recepción de escritos con los documentos y recibos que les acompañen.

2º Dejará constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal”

Y el posterior este otro (en subrayado, las diferencias):

“1. Corresponde al Secretario judicial, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial en las actuaciones procesales.

Concretamente, el Secretario judicial:

1.º Dará fe, por sí o mediante el registro correspondiente, de cuyo funcionamiento será responsable, de la recepción de escritos con los documentos y recibos que les acompañen, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes.

2.º Dejará constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal, mediante las oportunas actas y diligencias cualquiera que sea el soporte que se utilice.

3.º Expedirá certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión del destinatario y el fin para el cual se solicitan.

4.º Autorizará y documentará conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta ley el otorgamiento de poderes para pleitos.

2. En el ejercicio de estas funciones no precisará de la intervención adicional de testigos”

satisface igualmente cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la Ley que, a su vez, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental¹⁷; b) sin embargo, en dicho ejercicio rige el principio *pro actione*, por lo que los cánones del control de constitucionalidad de las decisiones judiciales se amplían cuando se trata del acceso a la jurisdicción, a diferencia de aquellos supuestos en los que ya se ha obtenido una primera respuesta judicial¹⁸; c) en consecuencia, la efectividad del derecho a la jurisdicción no consiente interpretaciones y aplicaciones de los requisitos legales caracterizadas por el rigorismo, formalismo o la desproporción entre los fines que preservan y la consecuencia de cierre del proceso que conllevan, con eliminación u obstaculización injustificada del derecho a que un órgano judicial resuelva sobre el fondo de la pretensión a él sometida¹⁹; y d) no obstante, que ese criterio antiformalista no puede conducir a prescindir de los requisitos que se establecen en las leyes y que ordenan el proceso en garantía de los derechos de todas las partes, y que el principio *pro actione* no debe entenderse tampoco como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la resolución del problema de fondo de entre todas las posibles que la regulan²⁰.

Quizás es por ello que la Exposición de Motivos de la Ley 13/2009 sitúa el debate en una simple cuestión de legalidad –que no deja de ser discutible-, al afirmar: *“El acto procesal de admisión de la demanda se configura como una actuación reglada que se establece como norma general dado que, como dispone el artículo 403.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento*

¹⁷ .- Entre otras muchas: SSTC 11/1982, de 29 de marzo, FJ 2; 37/1982, de 16 de junio, FJ 3; 68/1983, de 26 de julio, FJ 6; 69/1984, de 11 de junio, FJ 2; 93/1984, de 16 de octubre, FJ 5.a; 102/1984, de 12 de noviembre, FJ 2; 126/1984, de 26 de diciembre, FJ 2; 60/1985, de 6 de mayo, FJ 3; 99/1985, de 3 de septiembre, FJ 4; 34/1989, de 14 de febrero, FJ 2; 164/1991, de 18 de julio, FJ 1; 220/1993, de 30 de junio, FJ 2; 40/1996, de 12 de marzo, FJ 2; 36/1997, de 25 de febrero, FJ 3; 61/2000, de 13 de marzo, FJ 3; 193/2000, de 18 de julio, FJ 2; 201/2001, de 15 de octubre, FJ 2; 77/2002, de 8 de abril, FJ 3; 86/2002, de 22 de abril, FJ 1; 106/2002, de 6 de mayo, FJ 4; 172/2002, de 30 de septiembre, FJ 3

¹⁸ .- Por todas, SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 119/1998, de 4 de junio, FJ 1; o recientemente, SSTC 153/2002, de 15 de julio, FJ 2; 172/2002, de 30 de septiembre, FJ 3

¹⁹ .- SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 158/2000, de 12 de junio, FJ 5; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4; 160/2001, de 5 de julio, FJ 3, etc.

²⁰ .- Así, por ejemplo, SSTC 195/1999, de 25 de octubre, FJ 2; 3/2001, de 15 de enero, FJ 5; 191/2001, de 1 de octubre, FJ 3; 78/2002, de 8 de abril, FJ 2; 172/2002, de 30 de septiembre, FJ 3

Civil, «Las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley.»”. De esta manera, “salvo casos especiales previstos en el propio artículo, la Ley sólo exige la comprobación de ciertos requisitos formales (la falta de presentación de poderes de representación procesal, la carencia de postulación o defensa obligatorias, la falta de presentación de documentos que fueren necesarios, la ausencia de indicación de la cuantía en la demanda, etc.) y el examen de la jurisdicción y competencia objetiva y territorial, lo que, en la mayoría de los supuestos no es más que una mera comprobación material. Si se tiene además en cuenta que los posibles errores en la apreciación de la jurisdicción y competencia por parte del Secretario judicial pueden corregirse, como ya se hacía antes, a través de la declinatoria interpuesta por el demandado y, en todo caso, por el control de oficio que en cualquier momento del procedimiento puede realizar el Juez o Tribunal en los términos establecidos en la Ley, se trata de un trámite perfectamente asumible por el Secretario judicial”. Por el contrario, cuando se trate de la inadmisión se “requiere o exige un pronunciamiento judicial que fundamente su limitación, pronunciamiento que debe quedar en el ámbito jurisdiccional de Jueces y Tribunales”; para proseguir: “esto significa que, apreciada por el Secretario judicial la falta de alguno de los requisitos o presupuestos de la demanda, deberá dar cuenta al Juez para que éste se pronuncie definitivamente sobre su admisión”. Una lógica similar se sigue a efectos de acumulación indebida de acciones²¹.

Así pues, la lógica de la Ley parece clara. Se nos viene a decir: “los requisitos que debe cumplir la demanda están expresamente contemplados en la Ley, por lo que se trata de una simple cuestión de comprobación que no conforma actividad jurisdiccional”, lo que determina que pueda ejercerse por el Secretario, a quién se otorga además la competencia de emitir requerimientos de subsanación. Sin embargo, si como resultado de esa función de criba previa se llega por el Secretario a la conclusión que concurre una causa de inadmisión –que es, en definitiva, donde puede afectarse al derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de acceso al proceso- la decisión última queda en manos del Juez o Magistrado.

²¹ .- “Respecto a la acumulación de acciones, dado que éstas se plantean en el momento inicial del procedimiento y la admisión de la demanda se atribuye al Secretario judicial, será éste quien decida sobre su admisión, dando cuenta al Juez si entiende que no concurren los requisitos necesarios”

De ese conglomerado que contempla la LEC en esta materia –al margen de la admisión de la demanda de terceristas que regulan los arts. 598 y 599- se desprende, pues, que el Secretario judicial tiene competencias iniciales de admisión de la demanda, comprobando su adecuación a los requisitos legales (art. 404). De esta manera, si a su juicio, se constata que se cumple con el mandato normativo, dictará decreto de admisión. Si, por el contrario, se considera en ese momento inicial que existe falta de jurisdicción, incompetencias objetiva (art. 48.3) y/o territorial (art. 58), acumulación indebida de acciones (art. 73.3) o defectos formales, deberá dar traslado al Juez o Magistrado para que dicte el correspondiente auto de inadmisión previa Audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal (incompetencia objetiva o territorial y falta de jurisdicción) o requerimientos de subsanación (acumulación indebida o falta requisitos formales)

En este terreno hay que resaltar que conforme al art. 182 LEC corresponde al Secretario el señalamiento de la fecha de celebración del acto del juicio, en base a los criterios sentados por el Juez o Tribunal que se recogen en el apartado 3 de dicho artículo.

En el ámbito social se sigue, en principio, la misma lógica. En efecto, los nuevos arts. 81 y 82 –como ocurre también en el 145 bis respecto a la modalidad procesal de procedimiento de oficio por fraude de ley con afectación al desempleo y el art. 148 en relación al procedimiento de oficio- observan sensibles modificaciones en ese momento procesal, y no sólo por razón del cambio de titularidad de su ejercicio.

A ese marco general debe sumarse un cambio significativo en nuestra disciplina. Así, cabe centrar la atención en el hecho de que la falta de aportación del acta de conciliación administrativa no comporta ahora la admisión provisional de la demanda –en la práctica, generalmente acompañada de fijación de fecha de juicio y citación a las partes- como anteriormente se regulaba en el art. 81.2 LPL, sino un simple requerimiento para su aportación en el plazo de quince días, de tal manera que no efectuarse la subsanación en plazo, el Secretario judicial lo ha de poner en conocimiento del órgano judicial para que resuelva sobre su admisión.

No deja de ser llamativo que la nueva regulación tiene unos evidentes efectos dilatorios de la tramitación del proceso. En efecto, habrá que significar que la figura de la admisión provisional –con todos los defectos técnico-formales que

se quiera- se imbricaba claramente en el principio de inmediación del procedimiento laboral, permitiendo una gestión menos dilatada en el tiempo. En otras palabras, con la anterior regulación el procedimiento seguía adelante, aunque no se aportara el acta de conciliación administrativa; sin embargo, en la nueva legislación el proceso queda paralizado hasta que se aporte el mentado documento. Quizás de no está de más recordar que en los actuales momentos la situación de crisis económica está conllevando una notorio dilación de los servicios administrativos de conciliación, por la conocida sobrecarga de trabajo.

En esa situación se pueden producir indudables problemas prácticos a raíz de la nueva regulación, especialmente en aquellas modalidades sometidas a plazo de caducidad y en que se actúe en los últimos días del mismo, lo que comporta, como es sabido, un planteamiento prácticamente coetáneo de la demanda y de la papeleta de conciliación administrativa previa. Según la fecha en que celebre esta última puede ocurrir que el requerimiento de subsanación sea anterior, lo que comportaría –en una interpretación estricta de la Ley- la inadmisión de la demanda. Es obvio, al menos desde mi punto de vista, que esa radical salida sería claramente contraria al principio “*pro actione*” de la doctrina constitucional antes citada, así como una interpretación meramente formalista, lo que debería aconsejar una ampliación del plazo de subsanación (aún no estando éste expresamente contemplado en la Ley)²²

Ello es especialmente significativo en materia de despido –entroncando así con el objeto de las Jornadas-, en tanto que la dilación temporal que la nueva regulación comporta va a determinar unos mayores términos solutorios, con indudables efectos negativos para las partes.

Por otra parte, en cuanto a sus efectos en la responsabilidad del Estado de los salarios de tramitación de los arts. 57 LET y 116 LPLy ss, debe observarse que dichas normas determinan como “*dies a quo*” del cómputo de la responsabilidad pública la de la fecha de presentación –que no admisión- de la demanda; pero sin embargo el art. 119.1 a) LPL contempla en forma expresa la exclusión en el período de referencia de “*el tiempo invertido en la subsanación de la demanda, por no haber acreditado la celebración de la conciliación o de la reclamación administrativa previa*”. En consecuencia parece lógico deducir que ese período de subsanación no se tendrá en cuenta a dichos efectos.

²² .- En sentido similar, entre otros muchos pronunciamientos, véase la STC 69/1997, de 8 de abril, FJ 6.

Por otra parte, cabe destacar que el contenido anterior del art. 81 LPL ha experimentado sensibles modificaciones en relación con una causalidad decisoria del control inicial del contenido de la demanda, en línea con la LEC. Así, mientras el anterior texto se remitía a “defectos, omisiones o imprecisiones”, el nuevo ha omitido cualquier mención a las “imprecisiones” del escrito, y las “omisiones” quedan limitadas a las meramente formales. He oído alguna opinión que considera que se ha eliminado el control de adecuación sustantiva de la demanda, quedando limitado al meramente formal. No obstante, debe observarse que esa interpretación obvia que el art. 82.1 también ha sido cambiado en su anterior redactado, indicándose al respecto: *“Admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 80.1 en sus apartados c) y d), el Secretario judicial señalará...”* Y el apartado c) mencionado contiene referencia a *“la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas”*, mientras que el d) se remite al redactado de la súplica. No deja, empero, de ser significativo que el ya citado art. 81, tal y como más arriba se ha apuntado, limita la capacidad del Secretario judicial al control de *“defectos u omisiones de carácter formal”*.

En consecuencia, quizás no es descabellado llegar a la conclusión de que aquello que la Ley observa es un doble control de adecuación del escrito rector inicial: por un lado, el formal –por tanto, apartados a), b), e) y f) del art. 80.1-, al que cabrá añadir el ya inicial referido ex LEC de competencias jurisdiccional, objetiva y territorial y acumulación de acciones, que correspondería al Secretario judicial –junto con la acreditación de los actos preprocesales-, de otro, el redactado de las pretensiones procesales, tanto en su argumentación como en la congruencia de sus pedimentos, cuya competencia sería del Juez o el Tribunal correspondiente²³. Aunque ciertamente el texto induce a confusión, no está de más constatar que en algunas ocasiones nos hallamos ante demandas formalmente correctas pero que, sin embargo, no tienen un contenido bastante, siendo por tanto susceptibles de causar indefensión. Aspecto que, sin control previo, es susceptible de producir problemas futuros, en tanto que la constatación de ese contenido suficiente no podrá hacerse

²³ .- En el mismo sentido, LOUSADA AROCHENA, J. F.; *“Análisis de la incidencia de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, sobre el procedimiento laboral: una primera aproximación”*; AL 4/2010. Y en el ámbito civil, BLASCO SOTO, M. C.; *“La nueva estructura (o desestructura) del proceso. La admisión de la demanda en el proceso civil (Ley 13/2009 de 3 de noviembre)”*; Diario La Ley, N° 7325,

material – a diferencia de otros órdenes jurisdiccionales por la inmediatez del procedimiento laboral- hasta el momento del juicio y tras la alegación de la parte demandada de indefensión, lo que, en consecuencia, determinará mayores dilaciones temporales. A lo que cabe añadir que si ese control inicial sustantivo no se produce por el Juez, la conclusión –como señala algún autor²⁴- sería la declaración de oficio de nulidad de actuaciones, una vez constatada la insuficiencia en estos aspectos de la demanda.

A una conclusión similar cabría llegar en relación a otros supuestos de deficiencias sustantivas en la demanda con posibles efectos dilatorios “*ex post*”, como la concurrencia de litisconsorcio pasivo necesario, la competencia de la jurisdicción española –aún siendo éste supuesto muy dudoso, en tanto que la referencia a la competencia jurisdiccional respecto las competencias del Secretario podría integrarse aquí, aún siendo esta lectura técnicamente incorrecta-, falta de acción (singularmente por lo que hace a las demandas meramente declarativas), etc.

2.2.3 La terminación del proceso: especial referencia al trámite de conciliación ante el Secretario judicial

También en lo referente a la finalización del proceso aparecen en la Ley 13/2009 cambios significativos. Así se expresa de nuevo en la Exposición de Motivos: *“Por lo que se refiere a la terminación del procedimiento, la idea que preside la reforma es que, en aquellos casos en que pueda ponerse fin al mismo como consecuencia de la falta de actividad de las partes o por haber llegado éstas a un acuerdo, pueda el Secretario judicial dictar decreto que ponga fin al procedimiento. Ello es así porque en estos casos se trata de convalidar lo que no es sino expresión de la voluntad de las partes, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer contra el decreto del Secretario judicial a fin de que el titular del órgano judicial pueda revisar la resolución”*. Para finalizar: *“De este modo, han sido atribuidas al Secretario judicial la declaración de terminación anticipada del proceso por desistimiento a solicitud expresa del actor, la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal, (...) etc. También, desde luego, la conciliación, para llevar a cabo la labor mediadora*

²⁴.- CAVAS MARTÍNEZ, F.; *“La reforma procesal de 2009-2010 (II): Cambios en la sustanciación del proceso laboral ordinario”*; AS 17/2009

que la Ley Orgánica del Poder Judicial le reconoce como propia en el artículo 456.3.c)”

Y así, en el ámbito de actuación de la jurisdicción social, se ha modificado el art. 84 LPL. A dichos efectos el trámite inicial de **conciliación previo al juicio** cambia de titularidad, pasando del Juez o Tribunal al Secretario (lo que se justifica en función de que la mediación les es propia) Si se llega a un acuerdo se dictará el correspondiente decreto de validación, acordándose además el archivo de actuaciones. Sin embargo –como ocurría hasta ahora en la conciliación estrictamente judicial- si el Secretario llega a la conclusión de que el acuerdo “*es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes, de fraude de ley o de abuso de derecho*”, no lo aprobará, con la advertencia a las partes de que deberán celebrar la vista oral. Lógicamente, en el supuesto de desacuerdo la consecuencia es la celebración del juicio.

Por lo que hace a la esta nueva competencia debo manifestar una inquietud personal. Las notas de inmediatez y oralidad del procedimiento laboral (así como su menor formalidad respecto a otras jurisdicciones) determinan que la conciliación no sea aquí un puro trámite rutinario. El conflicto laboral tiene unas especiales características, en tanto que la divergencia entre las partes es constante en la empresa pero, sin embargo, ambas se precisan mutuamente, por lo que no nos hallamos ante una conflictividad de tracto único, sino continuada y constante. De ahí que la autocomposición –más o menos mediatizada por terceros- sea probablemente la mejor solución para este tipo de divergencias. Y ello explica que en muchos países los mecanismos solutorios especializados en relaciones laborales no tengan un carácter directamente jurisdiccional o, aunque así sea, el papel de la conciliación y/o mediación sea trascendental²⁵.

También cabrá recordar que en nuestra experiencia legal el componente conciliador ha tenido un peso significativo en la composición de los conflictos laborales, al menos desde las Leyes de 19 de mayo de 1908, de Tribunales Industriales y de Consejos de Conciliación y Arbitraje, que irán alternando hasta el franquismo y tras sucesivos cambios legislativos –como la Ley

²⁵ .- Véase al respecto el reciente estudio comparado de los sistemas de autocomposición del conflicto laboral en la Unión Europea elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND), con el título “*Individual disputes at the workplace: Alternative disputes resolution*”, que puede descargarse en: <http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0910039s/tn0910039s.pdf>

Corporativa Nacional de Primo de Rivera o los jurados mixtos republicanos-, mecanismos de tribunales legos y escabinato, pero en los que la conciliación previa al arbitraje devenía esencial. Resulta significativo que pese a que la dictadura franquista abolió todos esos mecanismos, optando por la judicialización a ultranza de los conflictos laborales, la función de la conciliación judicial –al margen de las “sindicales” o administrativas previas- tuvo un papel significativo.

Esa tendencia generalizada se explica porque en demasiadas ocasiones las partes pueden tener más o menos claros los puntos de coincidencia, pero por las propias características del conflicto social precisan a menudo un pequeño empujón “desde arriba”. Es por ello que el propio legislador preveía en el art. 84 LPL anterior –en una lógica que hundía sus raíces en normativas anteriores- el intento de conciliación forzosa por parte del Juez, antes de entrar en la vista oral. No tengo tan claro que en el ámbito laboral –lo que no es predicable de la mayor parte del resto de disciplinas jurídicas- la encomienda de dicha actividad al Secretario judicial sea eficaz. No dudo de la capacidad de las personas que componen dicho cuerpo para realizar esas funciones –aunque no parece claro que, como afirma la Ley, la función mediadora les sea propia, por naturaleza-. Lo que ocurre es que las propias características del procedimiento laboral –en relación a la naturaleza del conflicto social- determinan que en la práctica la conciliación y el juicio se confundan (lógicamente, dentro de unos límites racionales, que no causen indefensión) Y contra alguna afirmación que he oído, tampoco creo que el Juez se “contamine” por el previo intento de conciliación: al contrario, la charla inicial con las partes a dichos fines le ilustra muchas veces sobre la realidad de fondo de la divergencia (lo que, en ocasiones, es más difícil de apreciar en la maraña ritual del proceso)

Creo que, de alguna manera, el propio legislador es consciente de esa inercia histórica y de esa realidad funcional, no en vano el nuevo art. 84.3 permite una nueva avenencia entre las partes en el decurso de la vista oral correspondiendo en este caso su aprobación al Juez o tribunal, salvo en los supuestos de suspensión. Parece claro, en consecuencia, que nada empece a que lo largo del juicio –o, incluso, como ocurría hasta ahora, hasta el momento de dictarse sentencia- las partes lleguen a un acuerdo.

Mas esa tesitura plantea dos nuevos problemas. En primer lugar, la Ley no aclara si el papel del Juez en esa componenda (dicho sea en su acepción coloquial) es activo –como hasta ahora- o meramente pasivo, por dejarse al

albur de las partes dicha posibilidad, limitándose aquél a la mera corroboración. Y ese silencio del legislador –intuyo que querido- conlleva evidentes problemas de legitimación del juzgador que, a la postre, significan el rebaje de autoridad imprescindible en lo que antes hemos denominado “conciliación desde arriba”, además de la posibilidad de crear insólitos problemas procesales. El segundo aspecto que parece problemático es que si la interpretación que acaba de hacerse es la adecuada, entonces nos hallamos en la práctica ante tres conciliaciones: la administrativa previa, la efectuada ante el Secretario y la que se realiza ante el Juez, con el riesgo que en la práctica la segunda de las referidas –por tanto, la incluida “ex novo” por la Ley 13/2009- acabe limitada en la práctica a aquellos supuestos en los previamente o en los pasillos las partes han llegado, ellas mismas, a un acuerdo, bien sea en el momento previo al juicio o bien cuando se haya entrado en el mismo y se haya suspendido –se entiende que a efectos de posible acuerdo-. Sin embargo, este escenario, que limitaría la conciliación del Secretario a una competencia meramente formal, choca con el texto de la Ley que, como hemos visto no exige una simple actividad de conciliación, sino de mediación. Es más, debe observarse que probablemente el uso del término “mediación” en el marco de la conciliación judicial por el Secretario no es intrascendente, en tanto que éste no tiene los límites jurisdiccionales del Juez, por lo que puede emitir su propia opinión sobre las peticiones de las partes, puede hacer propuestas concretas y puede invocar precedentes judiciales. Sin embargo, es obvio que esa función va a requerir un conocimiento profundo de la legislación substantiva y la jurisprudencia interpretadora, lo que resulta novedoso respecto a la formación eminentemente procesalista de los Secretarios.

La problemática práctica de la conciliación, con todo, no se agota en las previas reflexiones. Surgen también dudas aplicativas en el art. 83.2, conforme al cual *“Si el actor, citado en forma, no compareciere ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del juicio, el Secretario judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda”*. Mis dudas las expresaré aquí con preguntas: ¿Se puede tener a alguien por desistido por no acudir a un acto de conciliación? Y ¿qué ocurre si la demandante no comparece a la conciliación, pero sí al juicio?

Y, finalmente con relación a la conciliación, habrá que observar que conforme al art. 82.1 LPL los actos de conciliación y de juicio deberán ser sustanciados en forma sucesiva y, por tanto, DRAE en mano *“En el tiempo que ha de seguir al momento en que se está”*. Sin embargo, no está de más recordar que la Ley no

exige que la sucesión sea inmediata, ni que exista unidad de acto, lo que comporta la conclusión que, aunque en principio ambos actos procesales han de celebrarse el mismo día, la sucesión temporal no tiene porqué ser automática (máxime porqué si así se entendiera las consecuencias de demora horaria podrían ser significativas). Y si ello es así, no parece descabellado que la cédula de notificación “ad hoc” tenga que diferenciar entre ambos momentos a la hora de fijar la hora correspondiente.

2.2.4 La vista oral y el Secretario judicial

Respecto a la regulación de la vista oral se adicionan o modifican en la LPL las siguientes competencias del secretario judicial: art. 50 –expresa referencia a la fe pública del Secretario cuando se dicten sentencias “in voce”-, art. 83 – otorgando al Secretario judicial la competencia para acordar la suspensión y comprobación de la acreditación de los motivos alegados-, art. 84 –respecto al trámite de conciliación judicial, lo que también ha de ponerse en relación con el nuevo redactado del art. 148.1 b) respecto a la conciliaciones en procedimiento de oficio - (estos dos últimos aspectos serán abordados luego en forma específica) y art. 101 (respecto a la garantía de percepción del salario del trabajador correspondiente al día del juicio) Debe resaltarse, además, el cambio experimentado en el art. 89.2 LPL, que abordaremos a continuación.

Por otra parte cabe destacar también la exclusiva competencia del Secretario en el trámite de **suspensión del juicio**. Así se contempla en el art. 83.2 LPL, que mantiene un redactado prácticamente idéntico al anterior, salvo la sustitución del sujeto activo –antes, el órgano judicial; ahora, el Secretario-. Sin embargo es notorio que una vez iniciada la vista oral pueden surgir múltiples cuestiones (significativamente, la modificación del contenido de la demanda o la alegación de indefensión de la demandada) que determinen la imposibilidad de que el mismo siga adelante, so pena de causar indefensión a una o ambas partes. Pese al categórico redactado del precepto legal citado parece claro que en dichos supuestos la competencia suspensoria es –o, mejor dicho, debería ser en buena lógica- competencia del Juez o Tribunal, pues ningún sentido tendría que si éstos constatan la existencia de un defecto procesal a lo largo del juicio tuvieran que pedir autorización al Secretario judicial –que puede no asistir al mismo- para la suspensión. En otras palabras: la propia dinámica interna de la Ley 13/2009 ha de llevar forzosamente a la conclusión que una vez iniciado el juicio y mientras se desarrolle el mismo la competencia del Juez

o Magistrado en materia procesal es absoluta. No es ésta una conclusión que se desprenda claramente de la Ley, pero que sin embargo sí parece observarse en forma indirecta de su propia inercia y de alguna norma esporádica²⁶.

Otra novedad significativa en este apartado es la ya citada modificación que experimenta el art. 89.2 LPL (en relación con los arts. 146 y 147 LEC y 453.1 LOPJ), permitiendo que **el Secretario no asista al acto del juicio** siempre que “*se cuente con tecnológicos necesarios*”, aunque para ello, el Secretario judicial deberá garantizar “*la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías*”²⁷. Un redactado similar, con expresa remisión, es apreciable en el art. 236 respecto a los incidentes de ejecución.

²⁶ .- Así, por ejemplo, del nuevo redactado de los arts. 40.5 y 88.2 LEC

²⁷ .- La Exposición de Motivos de la Ley 13/2009 es incluso más explícita que el contenido normativo, al afirmarse: “*En materia de documentación de las actuaciones, entre ellas las vistas y fe pública, han sido objeto de modificación los artículos 145 a 148 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Era precisa la modificación para adaptar estos preceptos a la dicción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que concretó los principios en que se inspira la labor de los Secretarios judiciales cuando realizan sus funciones de dación de fe, de modo que las ejercen con exclusividad y plenitud (artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 453.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En general, los artículos arriba mencionados no son sino adaptación al articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, en el artículo 146 se prevé la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad en la grabación de las vistas, audiencias y comparecencias, de forma que quede garantizada la autenticidad e integridad de lo grabado. En este sentido, se establece que el documento electrónico que contenga la grabación, siempre que incorpore la firma electrónica reconocida del Secretario judicial, constituirá el acta a todos los efectos. En estos casos, como se recoge en el artículo 147, sólo será necesaria la presencia del Secretario judicial en la sala si lo han solicitado las partes con anterioridad o si excepcionalmente lo considera éste oportuno atendiendo, entre otras razones, a la complejidad del asunto o al número y naturaleza de las pruebas que deban practicarse. Sólo en aquellos supuestos en que no pudieran utilizarse los mecanismos de registro o de garantía que permitan respectivamente la grabación de las vistas o garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado, el acta se extenderá por el Secretario judicial que concurra a la vista. También se establece el contenido mínimo del acta que ha de levantar el Secretario judicial durante las vistas cuando se utilicen medios técnicos de grabación y sin embargo no se pueda utilizar la firma electrónica, ya que en tales casos el soporte que contenga la grabación no constituye el acta del juicio al no ofrecer las garantías de la autenticidad e integridad de lo grabado. Cuando ni siquiera fuere posible la utilización de medios técnicos de grabación, el acta extendida por el Secretario judicial deberá recoger, con la extensión y detalle necesario, todo lo actuado. Se establece además de forma obligatoria la extensión del acta por procedimientos informáticos, excepto en el caso de que la Sala en que se esté celebrando la actuación carezca de medios informáticos; con ello se busca la erradicación de las actas manuscritas, en muchos casos ilegibles, tan frecuentes todavía en muchos órganos jurisdiccionales españoles. Esta previsión se hace extensiva a todos los órdenes jurisdiccionales e igualmente a las Juntas de acreedores previstas en la Ley Concursal, si bien dejando claro que éstas, aún siendo objeto de grabación, requieren la presencia ineludible del Secretario judicial en su condición de miembro de la misma*”

La custodia del documento electrónico de soporte corresponde al Secretario, previéndose que las partes podrán solicitar una copia de la grabación –como ocurría habitualmente con el acta escrita-, aunque el gasto soporte correrá de su cuenta (se supone, y permítame el lector la broma, que con el regocijo de la SGAE por el pago del canon digital)

Dicha exención de presencia –que pone en evidencia en línea con las reflexiones previamente efectuadas cómo la fe pública empiezan a darla los ordenadores- sólo presenta dos excepciones: a) cuando así *lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista*; y b) cuando *“excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen; supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta”*.

No puede dejarse de constatar, en este sentido, que actualmente los aparatos de grabación de los juicios no tienen mecanismo de reconocimiento de firma electrónica, al menos en Barcelona.. Y esta dilación en la puesta en práctica de los componentes informáticos o el software que la Ley exige no deja de ser preocupante en un futuro inmediato: mientras no se cumplan esos requisitos los Secretarios judiciales deberán conciliar y asistir a los juicios, lo que presumiblemente puede ocasionar retrasos significativos.

El propio legislador parece ser consciente de dichos defectos cuando en el apartado 85.3 LPL se contempla expresamente: *“Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial deberá consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: lugar y fecha de celebración, Juez o Tribunal que preside el acto, peticiones y propuestas de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaración de su pertinencia o impertinencia, resoluciones que adopte el Juez o Tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte”*. Se trata, como puede comprobarse, de la actual práctica de la jurisdicción social, al menos en Cataluña, pero que en todo caso no exonera de presencia al Secretario en el juicio.

E incluso se prevé qué ocurrirá si tampoco se pueden utilizar registros sin elementos de verificación. Y aquí se reproduce (apartado 4 del art. 85) el anterior elenco de contenido mínimo del acta (antes observado en el apartado 1), aunque con una precisión: deberá ser escrita con medios informáticos, prohibiéndose el carácter manuscrito, salvo que la Sala carezca de dichos medios. En todo caso, en dicho supuesto de acta “escrita” los incidentes que puedan formular las partes en relación a su contenido son ahora resueltos por el propio Secretario y no, como ocurría hasta ahora, por el Juez.

Y a ello cabe añadir un problema procesal significativo, al que la Ley 13/2009 no da respuesta efectiva: quién debe verificar los poderes y la identidad de las partes en la fase inicial del juicio si, como se desprende de la Ley, el Secretario está ausente de la vista oral. Es ésa una función que quizás puede ser ejercida por el propio Juez o Magistrado o que puede solventarse a través de la comprobación de esos extremos por el Secretario en la fase de conciliación/mediación previa.

2.2.5 Recursos y remedios procesales

En esta materia las modificaciones más destacadas en la LPL en relación a las nuevas competencias de los Secretarios judiciales pasan por los cambios de redactado de los siguientes artículos: 185 (trámite de impugnación de la reposición), 192 (diligencia de traslado a la entidad gestora para la fijación del capital coste a efectos de ingreso de la cantidad para la formalización del recurso de suplicación por el condenado en el primer grado jurisdiccional contra sentencias que hayan reconocido el derecho a una prestación de Seguridad Social), 193 (declaración de que el recurso de suplicación ha sido interpuesto en tiempo y forma y se tiene por anunciado), 195 (provisión del escrito de recurso al resto de partes para su impugnación), 210 (acuerdo de entrega de autos para la formalización del recurso de casación), 211 (traslado al Ministerio Fiscal de los autos en materia de recurso de casación), 212 (traslado al Ministerio Fiscal para informe de inadmisión del recurso de casación), 220 (declaración de que el recurso de casación para la unificación de la doctrina está preparado), 221 (fin del recurso de casación para la unificación de doctrina por no formalización en plazo legal), 222 (reclamación de oficio de sentencia de suplicación contradictoria si no se ha dado traslado a las partes en el recurso de casación para la unificación de la doctrina), 224 (traslado a la parte no recurrente del recurso de casación para la unificación de la doctrina), 227

(verificación del ingreso de consignación a efectos de recursos de suplicación y casación), 230 (entrega de autos al abogado designado de oficio para la formalización del recurso de suplicación y casación), 234 (sustituyendo el *nomen iuris* del tradicional *recurso de revisión* por el de *revisión de las sentencias*, al quedar aquél limitado a los decretos, en los términos que más adelante veremos) y 302 (recurso de reposición contra decreto del Secretario en ejecución provisional)

No es, por tanto, apreciable en este terreno una problemática general específica, más allá de las reflexiones que puedan hacerse respecto a algunos artículos concretos, al tratarse fundamentalmente de aspectos relacionados con la tramitación procesal, otorgándose la titularidad –en línea con el cambio normativo- al Secretario, tanto en el primer grado jurisdiccional como en el segundo, salvo por lo que hace a la declaración –susceptible de queja- de tener por no preparado el recurso o declaración de firmeza de la sentencia por falta de subsanación y en cuanto al señalamiento de las fechas de deliberación, votación y fallo en los TSJ y el TS, que corresponde a la Sala correspondiente.

2.2.6 Las nuevas funciones del Secretario en relación a la ejecución

Por el contrario, en el proceso ejecutivo los cambios son significativos, en tanto que se otorga al Secretario una potestad prácticamente decisoria. Y de nuevo aquí la Exposición de Motivos de la Ley 13/2009 es altamente clarificadora: “*En materia de ejecución, el artículo 456.3.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los Secretarios judiciales la ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados. Como consecuencia de esta atribución ha sido preciso modificar profundamente el Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tratando de delimitar claramente las competencias que pueden ser asumidas por los Secretarios judiciales de aquéllas otras a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando reserva a los Jueces y Tribunales determinadas decisiones. Entre las atribuciones destacadas, se encuentra la decisión de las medidas ejecutivas concretas para llevar a cabo lo dispuesto por la orden general de ejecución. Habiéndose otorgado a los Secretarios judiciales la mayor parte de las actuaciones del proceso de ejecución, ello lleva consigo que también se les atribuya la decisión acerca de la acumulación de las ejecuciones*”.

Los cambios de la LEC al respecto parten esencialmente del nuevo redactado del art. 545.4, que otorga al Secretario la capacidad para la “*concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, la adopción de todas las medidas necesarias para la efectividad del despacho, ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueran necesarios*”, aunque debe tenerse en cuenta que conforme al art. 551 1 y 2 la admisión a trámite de la ejecución y la determinación de los términos en que debe despacharse corresponde al Juez o Tribunal.

Y a ello deben añadirse las mutaciones normativas concretas que afectan a las siguientes materias: intervención en la tramitación de la ejecución provisional (arts. 528.3, 531 y 533.1), intervención en la fijación de costas en ejecución (art. 539.2), señalamiento de vistas también en proceso ejecutivo (art. 540.3); asimismo, cabe destacar su intervención en la acumulación de ejecuciones (art. 555), suspensiones de la ejecución del art. 557 y 568, señalamiento de vistas orales (art. 560), puesta a disposición del ejecutante de la suma de dinero pagada por el ejecutado tras requerimiento judicial (art. 583.1), decreto del embargo y adopción de medidas de garantía (arts. 587, 592.1 y 593), requerimiento de manifestación de bienes al ejecutado e imposición, en su caso, de multas coercitivas (art. 589), así como la realización de investigaciones sobre el patrimonio del deudor (art. 590 y 591), admisión y tramitación de la demanda de terceristas (arts. 598 y 599) y tramitación de determinados aspectos de la misma (art. 619) , acreditación del régimen del matrimonio del ejecutado a efectos de acumulación de rentas (art. 607.3) y aplicación, en su caso, de deducciones sobre las rentas en función de la concurrencia de cargas familiares (art. 607.4), adopción de medidas de garantía en caso de reembolso (art. 610.3), resolución de la petición de mejora o modificación del embargo por el ejecutante (art. 612.2), remisión a las entidades correspondientes de requerimiento de embargos de rentas y/o cuentas corrientes (art. 621), decreto de la administración judicial de bienes (art. 622), requerimiento de mantenimiento de bienes muebles y nombramiento, en su caso, de administrador judicial alternativo al deudor y seguimiento y remoción de aquél (arts. 626, 627 y 687 y 690 respecto a bienes hipotecados), así como reembolso de los gastos (art. 628), emisión de mandamiento para la anotación preventiva de bienes inmuebles (art. 629) y acuerdo de cancelación (art. 688), nombramiento de administrador judicial de una empresa y seguimiento de los trámites correspondientes (arts. 631 633), entrega de dinero o otros bienes efectivos en forma directa al ejecutante (art. 634), orden de

enajenación en el mercado de acciones u otras obligaciones (art. 635), aprobación de la realización del resto de bienes y derechos (art. 636), designación de perito tasador (art. 638.1) y resolución de los incidentes que puedan producirse por dicha actividad (arts. 638.2 y 3 y 639), convocatoria a las partes a comparecencia respecto a la suscripción del convenio de realización y aprobación del mismo (art. 640), acuerdo de realización de bienes a través de persona o entidad especializada y resolución de los aspectos procesales que puedan aparecer a lo largo del proceso de realización (arts. 641 y 642.2), dirección y tramitación de la subasta (arts. 644, 645, 647, 649, 650, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 666, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 693 y 695.2), autorización y tramitación de la administración para el pago (arts. 676 , 678 y 680), adopción de medidas de garantía respecto a ejecuciones no dinerarias y, en su caso, apremios (arts. 700 y 701), medidas de realización de entrega de cosas genéricas o indeterminadas (art. 702), tramitación y seguimiento de la ejecución de las obligaciones de hacer y de no hacer (arts. 706 a 711), tramitación y fijación de los daños y perjuicios causados a lo largo del proceso ejecutivo (arts. 713 y 714), y de la determinación de equivalentes monetarios en ejecuciones no dinerarias (art. 717) y liquidación de frutos y rentas (arts. 719 a 720)

Por su parte, los cambios que experimenta la LPL pasan por el cambio de redactado en el art. 24.2 (constatación de la subrogación del FOGASA con notificación a los trabajadores afectados a efectos de constitución como ejecutantes por las cantidades no satisfechas por el mentado organismo), art. 37 (acumulación de ejecuciones, forzosa u optativa), art. 38 (acumulación entre juzgados de distinta circunscripción), art. 39 (trámites formales del incidente de acumulación de ejecuciones), art. 236 (resolución de cuestiones incidentales en ejecución), art. 239 (imposición de apremios pecuniarios), art. 242 (requerimiento de continuación de la ejecución tras suspensión previa y sustitución de la expresión “sentencia que se ejecuta” por “título que se ejecuta”), art. 243 (aplazamiento de la ejecución), art. 247 (requerimiento para la manifestación de bienes del ejecutado), art. 248 (recaptación de información sobre bienes registrados y cuentas bancarias), art. 251 (designación de persona que asume el depósito, administración, intervención o peritación de bienes embargados o acreditación de la imposibilidad de aceptar esas funciones en relación al FOGASA y entidades gestoras o servicios comunes de la Seguridad Social), art. 253 (remisión de traba de bienes registrables al registrador correspondiente), art. 254 (citación a las partes a fin de designar administración de bienes embargados), art. 255 (designación de un tercero

como depositario de bienes embargados), art. 256 (toma de medidas efectivas en relación a reembolso), art. 257 (toma de medidas que aseguren la traba de bienes embargados), art. 258 (suspensión de actuaciones en el caso de tercerías), art. 259 (designación de perito tasador), art. 261 (acuerdo de venta de bienes por entidades autorizadas), art. 266 (anticipo de pago de los gastos de ejecución, previa autorización del Juez), art. 269 (distribución proporcional de las cantidades obtenidas en la ejecución), art. 270 (realización de propuesta de distribución de bienes y homologación, en su caso, de la propuesta común), art. 271 (aprobación del acuerdo de distribución y citación a las partes, si hay desacuerdo), art. 274 (audiencia al FOGASA si previamente no ha sido citado en trámite de declaración de insolvencia), art. 282 (medidas coercitivas en el caso de no readmisión de trabajador despedido en ejecución de sentencia), art. 283 (prórroga del plazo de abandono de vivienda tras extinción contractual), art. 286 (copia a la entidad gestora de sentencia firme en prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social), art. 288 (en materia de ejecución provisional: requerimiento a la empresa para que se consignen las cantidades objeto de anticipo y requerimiento en su caso de pago anticipado al organismo público correspondiente)

Queda pues claro que es en este terreno en el que con mayor claridad es apreciable la nueva atribución de competencias al Secretario –de tal manera que incluso es él quién dicta la insolvencia de la empresa mediante decreto ex art. 274.2 LPL-, limitándose el Juez –dicho sea en términos meramente generales y a efectos expositivos- a admitir o inadmitir la ejecución y a fijar las líneas generales de la Orden de ejecución, así como al control “ex post” de la actividad concreta que lleve a término en esta materia el Secretario.

En todo caso, debe destacarse que ese marco general se ve en parte matizado en relación a la ejecución de sentencias firmes de despido (arts. 276 a 284 LPL) Aquí la distribución de competencias anterior se sigue básicamente manteniendo. Así, de entrada, también aquí la orden general de ejecución corresponde al Juez –tras petición expresa del trabajador-, limitándose el papel del Secretario al simple señalamiento y citación a las partes a la vistilla ante el Magistrado, tras la que resolverá a través del tradicional auto extintivo o de inadmisión, cuando cabe la resolución contractual. Y en los casos de despido nulo o con opción del trabajador por la readmisión, el modelo legal pasa por el trámite de audiencia de las partes ante el Juez y la emisión por éste del correspondiente auto de readmisión. Sin embargo, a partir de dicho momento la Ley atribuye (art. 282 LPL) las competencias decisorias al Secretario, siendo

éste quién decidirá la percepción retributiva –dentro del marco general que se haya fijado en el auto-, el mantenimiento en alta y cotización en la Seguridad Social y, en su caso, de condición de representante de los trabajadores, con comunicación en su caso a la Autoridad laboral a efectos de sanciones administrativas. Asimismo, ex art. 283 LPL será el Secretario quién decida la prórroga del abandono de vivienda. No puedo dejar de llamar la atención que ese peculiar reparto de competencias –que en parte se escapa del modelo general- pone en evidencia una vez más (por si alguien aún tenía dudas) la naturaleza mixta ejecutiva-declarativa de las figuras aquí analizadas.

2.2.7 Los nuevos instrumentos procesales

Respecto a los elementos formales de ejercicio de dichas competencias, debe recordarse que conforme al art. 206.2 LEC –así como el art. 208 por lo que hace a su contenido-, los instrumentos procesales pueden ser de tres tipos: a) las diligencias de ordenación²⁸, como mecanismo de tramitación e impulso procesal (“*cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca*”), equiparables a las providencias judiciales, hasta ahora reguladas en los arts. 223 y 224 LEC, que quedan vacíos de contenido ; b) los a partir de ahora llamados decretos, “*cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto*”²⁹, asimilables en cuanto a sus requisitos formales a los autos judiciales; y c) diligencias de constancia, comunicación o ejecución, “*a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal*”.

²⁸ .- Las diligencias de ordenación se observan en forma expresa en los siguientes artículos de los LEC (por lo que hace a los supuestos de aplicación subsidiaria en nuestra jurisdicción): 16.2, 17.1, 68, 102.3, 136, 145.1 1º y 2º, 146.1, 157.2, 161 1, 2 y 4, 166.2, 271.2, 545.5 7º, 557.2, 558.2, 589.1, 590, 593.2, 628.1 y 2, 640.2, 641.1 y 663.1. Sin embargo, en nuevo redactado de la LPL dicho instrumento sólo se contempla en forma expresa –al margen de la propia regulación del mismo- en los arts. 186.2, respecto la admisión del recurso de revisión y en el art. 192.3, en relación al requerimiento de fijación del capital-coste en recursos de suplicación respecto a prestaciones de la Seguridad Social.

²⁹ .- En concreto, la figura del decreto se contempla en forma expresa en los artículos de la LEC (directa o indirectamente afectantes al orden social): 16, 17, 19.4, 20.3, 29.2, 30.1 1º, 34.2, 35.2, 79.1, 97.2, 134.2, 138.3, 143.1, 235.3, 237.2, 244.3, 245.4, 246,3 y 4, 258.3, 342.3, 375.2, 404.1, 408.2, 451.1, 452,2, 453.2, 528.3, 531, 545.4. 6º y 7, 550.1.1º, 551.3 y 5, 553, 554.1, 558.2, 570, 583.3, 589.3, 593.2, 598.3, 612.2, 619.2, 622.2, 626 2 y 4, 627.1, 631.1, 632.2, 633 2 y 3, 639 2 y 4, 640.3, 641 3 y 5, 642.2, 650 1 y 5, 653.3, 670 1, 4, 6 y 8, 672.2, 674.1, 676 1 y 2, 678.2, 687.2, 688.3, 690.2, 693.3, 700, 703.4, 706.2, 714.1, 719.1, 720 y 730.2.

En todo caso, dichas resoluciones pueden dictarse oralmente en términos similares, sino idénticos, a las judiciales (ex art. 210 LEC) A lo que cabe añadir que el uso inapropiado de alguno de dichos instrumentos procesales, por intromisión en el terreno jurisdiccional y, por tanto, sustituyendo las providencias, autos o las sentencias, comportará su nulidad (art. 225. 6º)

Y, por lo que hace a los decretos, su similitud en el terreno formal con “minisentencias” (y pido perdón por el simplismo) es patente en la Ley, al exigirse que en cada Juzgado o Tribunal exista –además del tradicional “Libro de Sentencias”- un “Libro de Decretos” (nuevo art. 213 bis)³⁰, o se permita su complemento (art. 215.4) No deja de ser, sin embargo, chocante que conforme al ya citado art. 208.2 la equiparación formal se haga con los autos, sin que respecto a los mismos nuestras normas procesales contemplen aquellas medidas concretas.

Esas resoluciones del Secretario tienen, además, recursos específicos y nuevos. Así, contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos cabe interponer recurso de reposición ante el propio Secretario (arts. 451 a 454), contra los que no cabe recurso alguno (nuevo art. 454 bis), con independencia de la posibilidad de “*reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva*”; añadiéndose, a continuación que: “*esta reproducción se efectuará, necesariamente, en la primera audiencia ante el Tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvete en ella*”, Sin embargo, contra los decretos “*por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación*” o “*contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea*”, podrá interponerse el nuevo recurso de revisión (manteniéndose la actual denominación recurso de revisión ante el TS en relación a pronunciamientos firmes)

Las características y configuración procesal de tal recurso pasan por los siguientes trazos caracterizadores:

- Carece “*de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto*”

³⁰.- Al que remite también el art. 47.2 LPL

- El plazo de interposición es de cinco días.
- Como elementos formales más destacables cabe reseñar que deberá formalizarse por escrito *“en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido”*
- En cuanto a su tramitación, el citado art. 454 bis prevé que *“el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente”*. Añadiéndose a continuación: *“Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Tribunal lo inadmitirá mediante providencia. Transcurrido el plazo para impugnación, háyanse presentado o no escritos, el Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto, en un plazo de cinco días”*. Dicha resolución de admisión o inadmisión no tiene recurso

La LEC contempla la posibilidad de apelación en aquellos supuestos en los que se *“ponga fin al procedimiento o impida su continuación”*. Es obvio que en el ámbito social este redactado debe referirse al recurso de suplicación, una vez finalizado por sentencia o auto el proceso en el primer grado jurisdiccional, en los términos que analizaremos a continuación.

Lógicamente este modelo es traspasado también al orden social. Y ello puede comprobarse en la implementación de los decretos en el nuevo texto procesal: así, en el art. 24.2, respecto a la subrogación del FOGASA y sus efectos sobre los acreedores, 39 (acumulación de actuaciones), 48 (multa por no devolución de autos), 49.2 y 3 (reconociéndose en este último supuesto la posibilidad de dictar resoluciones orales), 84 1 y 2 (decreto autorizando la conciliación o denegándola), 185.2 (denegación de reposición contra decreto previo), 221 (no formalización en plazo del recurso de casación para la unificación de la doctrina), 236 (marco general del proceso ejecutivo), 243 (en relación al aplazamiento de la ejecución con expresa referencia al recurso de revisión), 250 (notificación a los representantes de los trabajadores de la ejecución contra su empresa), 251 (designación de administración por entidades públicas), 254 (designa de administrador de bienes embargados), 265 (respecto a la adjudicación de bienes subastados), 269 (criterios provisionales de fijación de las cantidades a distribuir entre los acreedores tras realización del embargo) y 274 (declaración de insolvencia provisional).

En cuanto a las singularidades del régimen de recursos en el ámbito laboral –y en relación con las reflexiones previamente efectuadas- cabe observar, de entrada, la modificación del epígrafe del Capítulo I del Libro III LPL, que pasa a denominarse “*De los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos*”, en lugar de “*De los recursos contra providencias y autos*”.

Debe resaltarse que, como ocurre en la LEC; el régimen aplicable es distinto en función de si el decreto es o no definitivo, es decir y en relación al primer supuesto, “*si pone fin al procedimiento o impide su continuación*”. Aún no siendo el texto de la Ley claro, ésta parece ser la interpretación lógica de la lectura combinada del nuevo redactado de los arts. 184.1 y 186.1 segundo párrafo.

En el caso de **decretos no definitivos** cabe la interposición de recurso de reposición ordinario, sin que en principio éste pueda luego recurrirse. Así, el art. 184.1 LPL determina que “*Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos cabrá recurso de reposición ante el Secretario judicial que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la Ley prevea recurso directo de revisión*”, con la excepción –hasta ahora limitada a providencias y autos- de los procesos de conflictos colectivos e impugnación de convenios (apartado 4) Conforme al art. 185, la reposición deberá formularse ante el propio Secretario en el ahora habitual plazo de cinco días con indicación de la infracción cometida a juicio de parte; a lo que sigue un trámite de impugnación a las demás partes de cinco días y un período de resolución final –también por el propio Secretario- de otros cinco días.

El decreto que deniega la reposición es, en principio irrecurrible en forma autónoma, lo que no impide en su caso “*reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva*” (art. 186.1) Es llamativo, en este sentido, que mientras el art. 454 bis LEC permite volver a plantear el debate jurídico en la primera audiencia judicial posterior, ninguna observación específica similar se contempla en la LPL. Sin embargo, no parece descabellado llegar a la conclusión que si el decreto no definitivo se ha dictado con anterioridad al juicio, nada empece a que la cuestión pueda volverse a plantear en el mismo, sin tener que esperar, en su caso, al recurso (aunque algún autor aboga por la declaración de nulidad de actuaciones³¹, lo que no

³¹ .- LUJÁN ALCARAZ, J.; “*La reforma procesal de 2009-2010 (IV): novedades en la admisión de la demanda*”; AS 19/2009

parece desarquetado en determinados supuestos). Así, por ejemplo, si se ha planteado reposición por la demandada contra el decreto de admisión (art. 404.1 LEC) por razón de competencia jurisdiccional o funcional o cualquier otro supuesto y éste ha sido desestimado.

Asimismo, el art. 186 LPL regula las líneas generales del recurso contra los **decretos definitivos**. En estos casos, así como en aquéllos supuestos en los que la Ley lo permite en forma expresa, cabe interponer el recurso de revisión –en remisión lógica a la LEC en los términos antes descritos–, aunque el mismo “*carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto*”. Los trámites, requisitos formales y plazos son idénticos a los anteriormente vistos respecto al recurso de reposición. La única diferencia es que la capacidad decisoria es del Juez o Tribunal mediante auto.

Un régimen recursal tan diferenciado es susceptible lógicamente de conllevar indudables problemas procesales, máxime cuando un concepto tan inconcreto como el carácter definitivo o no del decreto es lo que diferencia un modelo u otro. En el ámbito de la LPL sólo hallaremos tres supuestos claros en los que la propia norma contempla en forma expresa el recurso de revisión: en el art. 39.3 respecto el decreto que en trámite de acumulación de procesos dicte el Secretario del juzgado requerido aceptándola, con remisión de actuaciones, en el art. 243.1 en cuanto al decreto que acuerda el aplazamiento de la ejecución por afectación por ponerse en peligro la continuación de las relaciones laborales; y en el art. 302 (ejecución provisional)

Lógicamente, tan parco marco normativo en la norma procesal especializada habrá de ponerse en relación a aquellos otros tipos en los que la LEC regula la posibilidad de interponer recurso de revisión y que son trasladables a la jurisdicción social. Y en este caso la Ley procesal civil contempla los siguientes supuestos: art. 41, respecto al decreto del Secretario que levanta la suspensión del asunto por prejudicialidad penal, art. 134.2 en cuanto a la prórroga de plazos procesales por causa de fuerza mayor, art. 237 en relación a la declaración de la caducidad de la instancia por inactividad procesal de las partes en dos años (sin que éste el marco de abordar si dicha norma se aplica al terreno social) y los arts. 244.3 y 246.3 y 4 por lo que hace a la tasación de costas. En el procedimiento ejecutivo las referencias al recurso de revisión son más frecuentes. Así en los arts. 551.3 5º (decreto de desarrollo del auto declarando la ejecución), art. 582.2 (validación del dictamen sobre importe de

la deuda), art. 563.1 (provisión en contradicción con el título ejecutivo, lo que engarza con los ya referidos arts. 189.2 y 204 Segundo LPL), art. 589.3 (imposición de multas coercitivas al ejecutado para que haga declaración de bienes), art. 607.7 (puesta a disposición del deudor de las cantidades embargadas), art. 612 (reducción o modificación del embargo por cambio de situación del deudor), art. 632.3 (respecto al contenido del cargo de administrador judicial), art. 633 (discrepancias en relación a la cuenta final que presente el administrador), art. 639.4 (oposición de la valoración de bienes hecha por perito), art. 650.4 (aprobación de remate a favor de postura que no cumple el mínimo en relación a bienes muebles), art. 670.4 (mismo supuesto anterior respecto bienes inmuebles), art. 678.2 (desacuerdo respecto a la rendición de cuentas del acreedor administrador de bienes embargados), art. 690.3 (rendición de cuentas de acreedor administrador de bienes inmuebles), art. 700 (embargo de bienes respecto a ejecución no dineraria) y art. 706.2 (aprobación de la cantidad correspondiente a la realización por un tercero de la condena de hacer no personalísimo)

En todo caso, el auto recaído en revisión sólo es recurrible **en suplicación o casación** cuando expresamente se prevea por la Ley. Y del redactado del nuevo art. 189.2 y 204 Segundo, parece desprenderse que sólo caben recursos en procedimientos ejecutivos y en relación a los ya tradicionales supuestos –en relación a los autos- *“que la sentencia ejecutoria hubiere sido recurrible en suplicación, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado”*. La limitación de recurso al proceso ejecutivo es, por ende, perfectamente lógica, en tanto que: a) como acaba de verse gran parte de los supuestos legales que contemplan los decretos se refieren a dicho proceso; b) los decretos definitivos dictados en el proceso declarativo son susceptibles, en su caso, de integrarse en la suplicación o –en línea con las reflexiones previamente efectuadas- de plantearse de nuevo en la vista oral si son previos a ésta.

Finalmente, respecto a este epígrafe concreto, ha de destacarse el radical cambio de contenido del art. 51 que pasa a tener un genérico redactado sobre el contenido de las resoluciones, eliminando las competencias propositivas del Secretario en relación a la emisión de providencias y autos como previamente se ha indicado. Y, en el mismo sentido, se deroga el hasta vigente art. 52 (y se modifican totalmente los contenidos del art. 51 y el enunciado del art. 54), lo que comporta la eliminación de las diligencias de ordenación, en línea con la

modificación que experimenta en el mismo sentido la LEC en sus arts. 223 y 224.

2.3 El nuevo modelo de acumulaciones de acciones, procesos y recursos

La práctica existente en determinados territorios respecto a las acumulaciones –muy vinculada, a la postre, al modelo productivista de módulos instaurado hace unos años en la carrera judicial-, ha comportado que el legislador entre el tema (haciéndose referencia en la Exposición de Motivos al “*fomento de las buenas prácticas procesales*”³², introduciendo unas reglas ciertamente rígidas en la materia, que es horizontal en todos los órdenes

A dichos efectos la Ley 13/2009 ha procedido a modificar los siguientes artículos de la LPL: 27 (Principios generales de la acumulación), 28 (acciones indebidamente acumuladas), 29 (acumulación de acciones contra un mismo demandado) 30 (acumulación en distintos juzgados), nuevo art. 30 bis (forzosa acumulación en caso de posibles pronunciamientos contradictorios), 31 (Procedimientos de oficio y acumulaciones), 33 (requisitos para la acumulación de recursos), 34 (Procedimiento de acumulación), 35 (Efectos de la acumulación), 37 (Acumulación de ejecuciones), 38 (tramitación de la acumulación de ejecuciones), 39 (Procedimiento de acumulación de ejecuciones), 40 (Efectos de la acumulación de ejecuciones), 41 (Plazo de la acumulación de ejecuciones) y 232 (Procedimiento de acumulación de recursos)³³

Debe destacarse, sin embargo, que algunos de los preceptos referidos lo único que se observan son aspectos meramente formales (como la sustitución del

³² .- Añadiendo a continuación: “*Con ello pueden paliarse en alguna medida las dilaciones en la tramitación de los pleitos si se concentran los esfuerzos en un único procedimiento, (...) suspendiéndose el resto de recursos en tanto no se resuelva el primero. Cabe añadir que además estas previsiones legales serán el instrumento adecuado para hacer efectivos los objetivos de transparencia en las actuaciones de los órganos judiciales y la correcta evaluación del desempeño de sus titulares*”

³³ .- Esa tónica limitadora de las capacidades dispositivas del Juez o Tribunal en materia de acumulaciones se sigue también en la LEC. Así, en relación a la acumulación de procesos en distintos tribunales cuando concurra prejudicialidad o exista interconexión de efectos (arts. 75, 76 y 78), fijación de criterios para la determinación de qué juzgado o tribunal debe entender de los asuntos acumulados –antigüedad de la demanda- (art. 79), trámite de audiencia a las partes cuando se decida la acumulación de oficio (arts. 80.2 i 83.4), etc.

término “acumulación de autos” por “acumulación de procesos”) o se refieren a las nuevas competencias del Secretario judicial, en los términos ya más arriba analizados.

No obstante, habrá que especificar que el nuevo texto establece también algún aspecto sustantivo en relación a los instrumentos procesales aplicables y respecto a la competencia decisoria: así, el art. 31 en cuanto a la acumulación de las demandas de oficio con las reclamaciones individuales en las que concurra identidad subjetiva y de causa de pedir, que deberán materializarse por auto; o el art. 34.3, que deja en manos de jueces y tribunales la decisión de desacumulación de procesos.

Del mentado cambio normativo se deriva el siguiente esquema:

- Acumulación de acciones (art. 27 LPL)

El anterior redactado de la Ley procesal laboral permitía que la parte actora acumulara en la demanda “*cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos*”, salvo –con el efecto reflejo sobre la reconversión- las de despido, las de extinción del contrato de trabajo de los artículos 50 y 52 ET, materia electoral, impugnación de convenios colectivos, impugnación de estatutos de los sindicatos y tutela de derechos fundamentales.

Después de la LPL se sigue manteniendo la misma tónica, aunque con algunas novedades:

- a) Se incluye como supuesto de acumulación indebida las demandas de movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (art. 138 bis) –con las reflexiones que luego haré en relación a esta última modalidad procesal-
- b) Se establece un límite territorial y/o funcional: es decir, que todas las acciones puedan tramitarse ante el mismo juzgado o tribunal –lo que se extiende a la demanda reconvenional-
- c) Se permite la acumulación de acciones ejercitadas “*simultáneamente*” de uno o varios actores “*siempre que entre esas acciones exista un nexo*”

por razón del título o causa de pedir”, para proseguir: “*Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos*”. Es decir, que en la misma demanda de uno o varios actores podrán integrarse pretensiones procesales diversas siempre que concorra identidad de nexos en la “*causa petendi*” o en el título. Debe, en todo caso, observarse que esa nueva regulación no enerva la acumulación indebida de los supuestos tasados.

- d) Por otra parte, no deja de ser un tanto sorprendente que la limitación de acumulación de acciones en materia de Seguridad Social siga siendo idéntica (“*Tampoco serán acumulables entre sí las reclamaciones en materia de Seguridad Social, salvo cuando tengan la misma causa de pedir*”), más allá de su pase al nuevo apartado 5 de dicho artículo, en lugar del 3 anterior. Habrá que recordar en este punto que la interpretación de dicho redactado no es pacífica y que existen múltiples discrepancias doctrinales al respecto, con obvia afectación al principio de seguridad jurídica³⁴.
- e) Y es también novedosa la inclusión de una posible acumulación de acciones en materia de extinción del contrato por incumplimientos empresariales del art. 50 ET en materia de abono de salarios, en relación a salarios adeudados. Así, conforme al mentado art. 27 LPL tras la Ley 13/2009: “*cuando para la referida acción de extinción del contrato de trabajo del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se invoque la falta de pago del salario pactado contemplada en la letra b) del apartado 1 de aquel precepto, la reclamación salarial podrá acumularse a la acción solicitando la extinción indemnizada del vínculo*”. Es ése un redactado problemático por varias razones. En primer lugar, porque no parece claro que la reclamación salarial en sentido estricto debe referirse únicamente a los períodos que dan lugar a la extinción o se permite también la inclusión de otros conceptos que, como tales, no dan directamente la posibilidad de la extinción. El texto de la Ley parece limitar el nuevo marco a aquella primera y restrictiva interpretación. A ello deben añadirse las dudas en relación a aquellos supuestos en los que lo que se discute –como la más

³⁴ .- Entre otras posibles e interesantes monografías sobre el tema, me permito aconsejar el análisis de LOUSADA AROCHENA, J. F.; “*Acumulación de acciones y de autos en materia de Seguridad Social*”; AS 22/2008

reciente doctrina casacional viene aceptado- la extinción contractual por causa de impago de prestaciones de incapacidad temporal: ¿estamos aquí hablando de salario?, ¿es posible acumular una acción extintiva junto a otra de cantidad que, además, debe dirigirse contra terceros como son la entidad gestora y en su caso los servicios comunes y entidades colaboradoras?. Y, ya a otro nivel, cabe observar que a esa acumulación de acciones se suma la acumulación de procesos con un posible despido anterior o posterior. Si se tienen presente los problemas prácticos que esta acumulación de procesos comporta (orden procesal, aspectos declarativos, efectos, etc) por su mal diseño legal y las carencias de la doctrina interpretadora, la adición de un nuevo aspecto de reclamación en el juicio y la sentencia no deja de comportar problemas de articulación práctica.

En cuanto a los aspectos procesales de la acumulación y su valoración en sede jurisdiccional rige aquí la ya anunciada delegación decisoria inicial en el Secretario judicial, que viene a sustituir al Magistrado o Tribunal en la criba inicial. A aquél corresponde ahora comunicar al actor la diligencia de subsanación vía opción en caso que se considere la existencia de acumulación indebida de acciones. De esta manera, si no se subsana en plazo o se mantienen circunstancias de acumulación indebida, deberá dar cuenta al Magistrado o Tribunal, a fin de que éste acuerde el archivo de actuaciones. Como puede comprobarse se trata de una adaptación del anterior redactado del art. 28.1 LPL a la nueva distribución de competencias judiciales. En el mismo sentido, se mantiene la figura de la opción tácita del art. 28.2 LPL, aunque también con tres importantes novedades: a) se amplía el supuesto de despido hasta ahora contemplado a todas las demandas sometidas a plazo de caducidad; y b) se aclara que quién tiene por no interpuesta la acción indebidamente acumulada al despido es el Juez o Tribunal; y c) se adiciona un nuevo párrafo al art. 28.2 que viene a resolver las reglas solutorias en caso de acumulación de demanda por despido y otra sometida a plazo de caducidad, de tal manera que si no existe opción se seguirá la tramitación de aquella primera y se tendrá por no formulada esta otra, *“advirtiéndose al demandado de su derecho de ejercitarlas por separado”*

- Acumulación de procesos (arts. 29 a 32 LPL)

Los cambios más significativos en esta materia son los siguientes:

- a) Procesos seguidos en el mismo juzgado.- La acumulación de procesos contra un mismo demandado seguidos ante el mismo juzgado por el mismo o diferentes actores deviene obligatoria –y ya no potestativa- si se ejercitan idénticas acciones. Y dicho carácter forzoso opera no sólo a instancia de parte, sino que es exigible de oficio (nuevo redactado del art. 29.1).
- b) Procesos seguidos en distintos juzgados.- El mismo carácter forzoso es observable –con eliminación de nuevo del elemento potestativo- si concurren las identidades subjetivas y de acciones referidas en el apartado anterior, cuando las demandas se hallen en juzgados de lo social diferentes.
- c) Procesos interconectados.- Se incluye un nuevo supuesto de acumulación –que parece ser también forzoso- cuando concorra unidad de demandado, en igual o diferente juzgado, *“cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pretende exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes”*. Debe denotarse que esa previsión –contenida en el nuevo art. 30 bis LPL- no aclara si es precisa la identidad o diversidad de demandantes. Pero en todo caso, hay que observar que ese redactado estaba ya en vigor –aunque no era claro el carácter forzoso- en el art. 75, regla primera, LEC 2000 –manteniéndose sustancialmente en términos similares tras la Ley 13/2009-, sin que, paradójicamente se traslada la regla primera del mentado artículo, es decir, cuando pueda concurrir prejudicialidad.

Sin duda que las intenciones del legislador son loables: evitar que sobre unos mismos hechos causantes concurren pronunciamientos judiciales contradictorios en forma directa o indirecta lo que –conforme constante doctrina constitucional es susceptible de afectar al derecho a la tutela judicial efectiva-. Es obvio que se ha de compartir que no tiene sentido que existan dos pronunciamientos, por ejemplo, en relación a la impugnación de un grado de incapacidad permanente en el que la resolución de la entidad gestora sea impugnada simultáneamente por la Mutua y por el trabajador. Lo que ocurre es que los términos legales son tan amplios e indeterminados que permiten interpretaciones muy

dispar, lo que no deja de ser preocupante, en tanto que –reitero- la acumulación es forzosa. Ha de observarse, en ese sentido, que no estamos aquí hablando de acumulación de acciones, sino de procesos, sin que exista aquí ninguna limitación. Sin embargo, parece lógico entender que los límites del art. 27 en sus apartados 4 y 5 siguen rigiendo aquí, pues en caso contrario podría llegarse a la conclusión de la forzosa acumulación de un proceso por sanción y otro por despido posterior por reiteración o concurrencia de conducta; o una demanda de clasificación profesional con otra de despido; o, en materia de accidentes de trabajo, un proceso de determinación de contingencia con otros relativos al grado de incapacidad –lo que es lógico-, pero a lo que cabe sumar, pues concurriría “*a priori*” la conexión que la Ley exige en una interpretación formal una demanda por recargo y otra de reclamación de indemnización civil adicional de daños y perjuicios. Ciertamente que en todos estos ejemplos pueden concurrir sentencias contradictorias y existe entre ellos una evidente conexión, pero no parece lógico que por la vía de la acumulación forzosa de procesos se acaben acumulando acciones que la Ley prohíbe.

- d) Despido y extinción por incumplimiento contractual del empresario.- En este punto no hay cambios, en tanto que la acumulación forzosa entre ambos procesos del art. 32 permanece inalterada
- e) Procedimientos de oficio y demandas individuales relacionadas.- También esta acumulación permanece inalterada en el art. 31 LPL, aunque se introduce una pequeña novedad en el sentido de afirmar que se llevará a cabo por parte del Juez o Tribunal.

En todos los supuestos en que se la Ley 13/2009 ha modificado el sistema de acumulación de procesos (arts. 29, 30 y 30 bis) se contiene una previsión prácticamente idéntica en relación a la tramitación procesal. Así, la actuación procesal inicial corresponde también al Secretario, con audiencia a las partes por un plazo de tres días, dictándose auto de acumulación en su caso por el Magistrado o Tribunal.

- Acumulación de recursos (art. 33 LPL)

En esta materia sólo resulta apreciable que el carácter optativo de la acumulación se sigue manteniendo cuando no existe petición de parte, mientras que resulta obligatorio si se solicita. En todo caso habrá que recalcar que la Ley no contempla aquí ningún trámite procesal específico. A lo que habrá de añadirse que, como señala algún autor, es ésta una norma pensada para supuestos de sentencias “clónicas” del mismo juzgado, y no tanto para pronunciamientos diversos del primer grado jurisdiccional³⁵.

De los mentados cambios se deriva claramente como la acumulación de procesos deviene en todo caso forzosa en el primer grado jurisdiccional y en trámite de suplicación, también si se solicita en forma expresa. Debe observarse, en todo caso, que un tan categórico redactado no deja de comportar problemas prácticos. Así, cabe reseñar en primer lugar que habrá supuestos en los que –aunque se pida por una o ambas partes- el juzgador o el Secretario lleguen a la conclusión de que no procede por razones de fondo la acumulación (y por supuesto, no me estoy ahora refiriendo a aspectos meramente formales o procesales menores) Pues bien, aunque el Juez o Secretario consideren que la acumulación no es conveniente, no parece que el actual redactado les otorgue ningún resquicio para tratar esa excepcionalidad. A lo que cabe añadir que es perfectamente posible que un juzgado desconozca la existencia de otras demandas similares, de tal manera que si las partes no solicitan la acumulación y se llega a sentencias diferenciadas, se corra el riesgo que un hipotético recurrente alegue la infracción de los preceptos analizados a efectos recursales.

Por otra parte, no deja de ser conflictivo la delimitación de qué debe entenderse por “petición de parte”: ¿de qué parte, de una o de ambas? Es claro, en ese sentido, que si la solicitud de acumulación se solicita conjunta o separadamente –antes o después del trámite de audiencia- deberá operar la acumulación forzosa. Pero la Ley no aclara qué ocurre cuando una parte lo solicita y la otra se opone o cuando en el caso de acumulación de procesos con varios actores o demandados unos lo aceptan y otros no. La LEC no aclara el dilema, en tanto que su art. 75 se limita a afirmar que “*La acumulación podrá ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende*”, sin que por su parte la LPL nada diga respecto. Parece claro que en dichos supuestos la acumulación no puede depender de la exclusiva voluntad de una de las partes, por lo que no habrá de estarse a las

³⁵ .- LOUSADA AROCHENA, J. F.; “Análisis ...”.

circunstancias del caso, de tal manera que el carácter legal forzoso de la acumulación sólo debe servir como orientación práctica o, por utilizar la expresión de la Ley, como “buena práctica procesal”.

- Acumulación de ejecuciones (arts. 36, 37 y 38 LPL)

Como es sabido el art. 37.1 LPL preveía una forzosa acumulación de ejecuciones cuando las acciones ejercitadas tendiera a obtener la entrega de una cantidad de dinero y existieran indicios de que los bienes del deudor o deudores pudieran ser insuficientes para satisfacer la totalidad de los créditos que se ejecuten, siendo optativas en el resto de casos; y otra, potestativa, en aquellos casos en los que así lo impusieran los criterios de economía y de conexión entre las diversas obligaciones cuya ejecución se pretenda en ejecuciones no dinerarias (art. 37.2) La única novedad que observa la Ley 13/2009 respecto a dicho panorama es que ésta segunda posibilidad potestativa deviene formalmente forzosa (y aclaro que el término “formalmente” se refiere a las evidentes dosis de subjetividad que el redactado contiene)

Donde sí hay cambios significativos es en los trámites procesales a seguir. Así, en primer lugar, la acumulación la decide en exclusiva el Secretario judicial –por la lógica decisoria que rige en esta materia y que hemos analizado previamente en el epígrafe 2.2.6-. En segundo lugar, aunque se mantiene sustancialmente en vigor el plan procesal anterior en relación a la formulación del incidente de acumulación, el requerimiento al otro juzgado o tribunal y el mecanismo de solución de divergencia entre ambos órganos jurisdiccionales, se regula que dichos trámites deberán articularse a través de decretos. Y, finalmente se contemplan criterios subsidiarios en orden a la determinación del juzgado que ha de seguir la ejecución –si son dos o más-, además del hasta ahora contemplado de mayor antigüedad en la orden de ejecución: así, si existe coincidencia en el día, tendrá prioridad la antigüedad en el título y, subsidiariamente por nueva coincidencia, la fecha de presentación de la demanda.

Algún sector doctrinal ha destacado la evidente incongruencia de que no se prevea la intervención del juez del juzgado requerido en caso de

denegación de la acumulación, lo que no ocurre ni respecto a los supuestos que se acepta, ni en relación al juzgado requeriente³⁶.

Es asimismo apreciable la existencia de nuevos trámites de audiencia a las partes, hasta ahora inexistentes. Esa nueva tendencia puede apreciarse en los siguientes artículos: 29, respecto la acumulación de acciones por varios actores seguidas ante el mismo juzgado (*“El Secretario judicial dará traslado, por plazo común de tres días, a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación se trate, a fin de que formulen alegaciones acerca de aquélla. Transcurrido el plazo, el Juzgado o Tribunal dictará auto decidiendo la acumulación, de cumplirse los requisitos legales”*), 30 en relación a la acumulación de acciones en demandas seguidas ante distintos juzgados (*“El Secretario judicial dará traslado, por plazo común de tres días, a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación se trate, a fin de que formulen alegaciones acerca de aquélla. Transcurrido el plazo, el Juzgado o Tribunal dictará auto decidiendo la acumulación, de cumplirse los requisitos legales”*) y en el nuevo art. 30 bis (*“2. En estos casos, el Secretario judicial dará audiencia, por plazo común de tres días, a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación se trate, a fin de que formulen alegaciones. 3. El Juez o Tribunal resolverá decidiendo la acumulación, de cumplirse los requisitos legales. Contra este auto no cabrá otro recurso que el de reposición”*)

2.4 Adaptaciones “históricas” de la LPL

Ya hemos visto como la Ley 13/2009 aprovecha el cambio normativo para proceder a realizar una serie de adaptaciones en relación a aspectos que han sido modificados por legislaciones sustantivas posteriores u omisiones de normas procesales anteriores.

En este sentido cabe reseñar los siguientes aspectos modificadores:

- **Adaptación del euro.-** En este sentido se calculan en euros –y no en pesetas, como hasta ahora- las cantidades que constaban en los

³⁶.- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.; *“Novedades principales introducidas en el proceso laboral por la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial”*; RAD 10/2009

anteriores artículos 48 (multas punitivas por no devolución de autos), 97 (multa por temeridad o mala fe en sentencia), 189 (límite cuantitativo para el acceso al recurso de suplicación), 223 (multa pecuniario por apreciación de ánimo dilatorio en la interposición de recurso de casación para la unificación de la doctrina), 227 (depósito para recurrir en suplicación y casación) y 233 (costas de la parte vencida en recursos de suplicación y casación). En todo caso, no deja de ser llamativo que, más allá de la competencia reglamentaria para modificar las cuantías referidas, esas cantidades permanezcan inalterables durante veinte años, sin que se hayan puesto al día, pese a las previsiones de la Disposición Adicional Segunda LPL, lo que sin duda comporta una evidente atenuación de los efectos disuasorios legamente perseguidos.

- **Singularidades del art. 138 LPL.-** Aunque la Ley 11/1994 creó esta concreta modalidad procesal respecto la normativa sustantiva de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y movilidad geográfica, previendo su carácter urgente, no tuvo en cuenta una serie de singularidades respecto a otros aspectos procesales, que son ahora abordados en la Ley 13/2009. Así, se contempla ahora la interdicción de acumulación de acciones (art. 27.4), inhabilidad del mes de agosto (art. 43.4), excepción de los trámites de conciliación administrativa (art. 64.1) y reclamación previa (art. 70.1) y colisión con los procedimientos de tutela de derechos fundamentales (art. 182) Debe destacarse en este punto que también se reduce el plazo para dictar sentencia, en los términos que abordaremos en el inciso final de estas reflexiones.

- **Criterios específicos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar.-** También tras la Ley Orgánica de Igualdad y la ampliación de derechos que dicha norma contempla, se procede a adaptar la figura contemplada en el art. 138 bis a idénticas previsiones y limitaciones que las observadas en el anterior apartado. Con el añadido de la limitación de recurso del art. 189 –en parte, ya establecida en el mentado art. 138 bis-. Por otra parte, se procede a la modificación del Capítulo V del Título II del Libro II y la de la Sección 5.ª del Capítulo V del Título II del Libro II, sustituyendo los *Permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos familiares* por los *Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente*.

Sin embargo, los términos de la Ley no dejan de causar problemas, en tanto no queda claro qué supuestos substantivos se adecuan a dicha modalidad procesal. Desde mi punto de vista no cabe llegar a una conclusión universal que incluya todos los derechos derivados de la filiación y la familia integrados en los artículos 34.8, 37 3, 4, .4 bis y 5, 38.3, 45.1 d), 46.3, 48.4 a 6 y 48 bis ET, ni tampoco cabe limitar su terreno aplicativo al estricto marco legal. Me explico, mientras que el anterior redactado del art. 138 bis LPL se remitía a las figuras del permiso por lactancia y la reducción de jornada por motivos familiares (como, por otra parte, sigue regulando el art. 37.6 ET con referencia directa al 128 bis LPL, sin que la norma sustantiva haya sido modificada), el texto surgido de la Ley 13/2009 se refiere a “*los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente*”, desarrollándose posteriormente el objeto de esa modalidad procesal –en texto inalterado- en relación a las divergencias de las partes respecto a la concreción horaria y el período de disfrute propuesto por el trabajador. Por tanto, habrá que entender que además de las figuras hasta ahora reguladas, se integran ahora aquellos casos en los que pueden surgir dichas discrepancias, en relación a derechos en esta materia que no sólo estén establecidos en la Ley, sino también en los convenios. Pero habrá que observar que no se discutirá aquí el acceso al derecho discutido como tal, sino únicamente su concreción temporal y su período de disfrute (entendiendo por esta última, desde mi punto de vista, el período de referencia no su duración, al menos cuando ésta deriva de la Ley o está claramente fijada en el convenio).

Y es obvio que el elenco de situaciones que pueden dar lugar a esa divergencia es amplio. Sin voluntad de *numerus clausus* pueden citarse: ejercicio de la maternidad o paternidad parcial, adaptación de jornada y turno respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral –el ya citado art. 34.8 post LOIEMH, que tiene un amplio seguimiento en la negociación colectiva, al menos en Cataluña, en materias como el acompañamiento de familiares a visitas médicas-, el disfrute de los permisos por enfermedad de familiar en forma fraccionada –también habitual en la negociación colectiva-, ausencia y reducción de jornada por nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados, permisos y licencias que el convenio colectivo contemple en relación al cuidado o asistencia de familiares, reducciones de jornadas convencionales –ajenas a las legales- por motivos familiares,

etc. En otros casos, la remisión a la concreción temporal puede despertar dudas hermenéuticas en relación a si esta modalidad procesal puede ser aplicada. Así, por ejemplo, respecto a permisos por exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto o el disfrute de vacaciones coincidentes con maternidad/paternidad (con la problemática hermenéutica de si aquí se aplica también la modalidad de los arts. 125 y 126 LPL). Y, a la vez, parece claro que hay supuestos exentos –por no afectación a concreción horaria y período de referencia- como las excedencias por cuidado de hijos y familiares.

- **Adaptación a la Ley Orgánica de violencia de género.**- Las omisiones del legislador en la Ley Orgánica 1/2004 son también aquí subsanadas por lo que hace a la inhabilidad del mes de agosto (art. 43.4), excepción de conciliación administrativa (art. 64.1) y reclamación previa (art. 70.1) Debe destacarse, sin embargo, que en esta materia no existe ninguna modalidad procesal específica, de tal manera que los mentados cambios normativos habrán forzosamente de referirse –como se desprende de la Ley- a todos los derechos legamente reconocidos a las víctimas –sin que exista referencia a los convencionalmente establecidos- y, en consecuencia, *“a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa”* (art. 37.7 ET), el derecho preferente al traslado de residencia ex art. 40.3 bis ET y suspensión del contrato de trabajo de los arts. 45.1 n) y 48.6. Sin embargo, no parece claro si dichos preceptos –en especial los referentes a la exoneración de reclamación y conciliación previa- son de aplicación en el caso de despidos objetivos del art. 52.2 d) –cuando dentro del período de referencia para el cálculo de la inasistencia se incluyan además los derivados de la asistencia física o psicológica de la afectada-, los disciplinarios cuando se postule la nulidad por la vía del art. 55.5 b) *in fine* y, especialmente, en materia de prestaciones de la Seguridad Social cuando la pretensión de la trabajadora sea la aplicación del período de cotización ficticia del art. 124.5 LGSS o el acceso (art. Art. 208 1.1 e) y 1.2, 231.2 y Disposición Adicional Cuadragésimo segunda LGSS) o duración (art. 210 LGSS) del desempleo. En todo caso, parece claro que la interpretación judicial de dichos preceptos deberá tener en cuenta –amén de la obvia protección de las víctimas, lo que lleva a no realizar lecturas meramente

formalistas- que la voluntad del legislador en este punto es clara: evitar dilaciones procesales que impidan el acceso a las tutelas judiciales de la mujeres maltratadas.

- En materia de **tutela de derechos fundamentales**, viene a solventarse formalmente la específica y única referencia al derecho de libertad sindical por la general, de conformidad con el art. 53.2 CE. Se modifica de esta manera la rúbrica del Capítulo XI del Título II del Libro II, así como el Art. 301 (Carácter ejecutable de las sentencias no firmes recaídas en determinadas modalidades procesales) Y en sentido similar, el Art. 95 (dictámenes para mejor proveer/ diligencias finales): en este caso, en relación a la posibilidad de solicitar informes públicos para todo tipo de discriminaciones y no sólo las derivadas del sexo)
- Asimismo, se reestructura el art. 122, en relación a la del **despido objetivo**, eliminado las varias causas de nulidad desestructuradas hasta ahora contempladas –por la evolución de la normativa substantiva en aluvión-, dotándose a dicho artículo de una estructura continuada.
- Por otra parte, puede comprobarse como las referencias contenidas en la LPL respecto a la aplicación del ET en materia sancionadora (extinta tras la entrada en vigor del RD Legislativo 5/2000) han sido ahora sustituidas por referencias a la **LISOS**. Así, por ejemplo, en el art. 282 c) LPL.
- Asimismo, se deroga en materia de **cooperativas** la Disposición Adicional Quinta, en relación al art. 125 de la Ley 3/1987, derogada por la Ley 27/1999, de 16 de julio, que establecía el efecto atractivo de la normativa procesal laboral, que venía actuar como norma supletoria.
- Y, finalmente, hallaremos algunas **modificaciones menores** –que podríamos calificar como “pejigueras” (y pido perdón por la expresión). Por ejemplo, la modificación del art. 189 c) –en el sentido de substituir a efectos de posibilidad de recurso la referencia a la invalidez por la incapacidad permanente- o del art. 281 –incluyendo el término “regular” en la ejecución del despido en el que sólo cabe la readmisión-

2.5 La “readaptación a la LEC”

Las omisiones del legislador en el 2000 en relación a los criterios de adaptación de la LPL a la LEC son ahora, en parte, solventadas también por la Ley 13/2009.

Y, en este sentido, pueden apreciarse los siguientes cambios –de naturaleza básicamente formal-, al margen de la presentación de escritos el último día de plazo ex art. 45 LPL, en los términos ya más arriba apuntados:

- Cuestiones de competencia: Eliminación de la acción inhibitoria hasta ahora contemplada en el art. 14 b) LPL –en línea con la derogación de dicha figura en el Título II del Libro I LEC- y mantenimiento exclusivo de la declinatoria, que pierde su carácter perentorio.
- Abstención y recusación: inclusión de las normas aplicables a Secretarios y funcionarios, con remisión a la LEC (adición de un nuevo apartado 4 en el art. 15) –tal y como contemplan los arts. 103, 104 y 114 a 123 de la norma procesal civil, en relación al contenido de su art. 100-
- Actos de comunicación: son remarcables en este punto los cambios que experimenta el art. 42, así como los arts. 53, 57 (con remisión en ambos casos a la LEC) y 58 –contenido de las cédulas de notificación-, 59 – citación por edictos- y 60 –régimen de notificaciones-. Se trata de una clara adaptación a las previsiones contenidas en el Capítulo V del Título V del Libro I LEC³⁷. En todo caso, merece la pena destacar el cambio que experimenta el art. 60.3 LPL, en el que se añade, en relación a la práctica de notificación en su despacho del Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Seguridad Social, el siguiente párrafo: “*Cuando dispongan de los medios técnicos a que se refiere el apartado 5 del artículo 56 de esta Ley, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios*”, Cabrá recordar, en este sentido, que esa posibilidad con carácter general está contemplada en el artículo de la LPL que el texto cita, así como en el art. 162 LEC, sin que se comprenda muy bien esa singularidad específica.

³⁷ .- Véase al respecto LUJAN ALCARAZ, J.; “*La reforma procesal de 2009-2010 (III): novedades en relación con los actos de comunicación*”; AS 18/2009

- Substitución del concepto formal de “autos” por “procesos”, en los términos que se analizarán en el siguiente epígrafe y de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título III del Libro I LEC
- Sustitución formal de las añejas diligencias de mejor proveer por diligencias finales: arts. 88 y 95 LPL, en relación a los arts. 435 y 436 LEC
- Substitución formal de la denominación de la prueba de confesión por la de interrogatorio de parte: art. 91 LPL respecto al art. 301 y ss LEC
- Substitución formal de la denominación de la prueba testifical por la de interrogatorio de testigos: art. 92 LPL (art. 360 a 381 LEC)
- Sometimiento a las reglas formales de la LEC en materia de prueba pericial: con desaparición de las hasta vigentes referencias a la no aplicación de insaculación de peritos (art. 93 LPL)
- Sometimiento a las reglas generales de la queja de la LEC: con eliminación de la mención expresa a los criterios específicos del TS que hasta ahora contemplaba el art. 187 LPL, en tanto que los actuales arts. 494 y 495 LEC ya no diferencian entre la queja para apelación y para casación, como ocurría en el anterior texto procesal general
- Sustitución del recurso de súplica por el de reposición: arts. 197, 198, 204 y 302 LPL, en relación a los arts. 451 a 454 LEC
- Modificación del modelo de liquidación de bienes de la LPL en el proceso ejecutivo por el de la LEC: así, en los arts. 260 a 262 LPL (arts. 641 a 675 LEC)
- Y, finalmente, hallaremos también meras cuestiones terminológicas, como la sustitución de la expresión “*acumulación de autos*” por “*acumulación de procesos*” en el nuevo texto de los arts. 34 y 35, o la de “*actuaciones judiciales*” por “*actuaciones procesales*”, del art. 43.1. Apreciaciones similares pueden observarse en el nuevo contenido de los arts. 68 y 159. O, en sentido similar –por incidental-, la referencia hasta ahora contenida en el art. 231 LPL –aportación de nuevos documentos

en recurso de suplicación- al art. 506 LEC se ve ahora, lógicamente, reemplazada por la mención del art. 270 del mismo cuerpo legal.

Con todo, cabe destacar que quizás existen aún vacíos de adaptación entre la LPL y la LEC. Es el caso de las diligencias preliminares (arts. 256 y ss LEC) en relación a los arts. 76 a 79 LPL.

Nos hallamos, por tanto, ante una auténtica integración de la ley procesal laboral a la civil, en tanto que –como se desprende de lo hasta ahora dicho- no se trata sólo de una adaptación formal, sino también sustantiva en tanto que determinados aspectos singulares del orden social (como el proceso ejecutivo –aún siendo conscientes de que en gran medida buena parte de los órganos de esta jurisdicción ya aplicaban la LEC- y en menor medida el régimen de citaciones) han acabado desapareciendo.

2.6 Las nuevas competencias procesales de los graduados sociales

Es éste un aspecto que, ciertamente, poco o nada tiene que ver con la puesta al día de la oficina judicial y que, probablemente, obedezca más a añejas reclamaciones de ese colectivo a través de sus potentes organismos colegiados. De hecho, la Exposición de Motivos de la Ley da como explicación la adaptación “*de la norma legal a la realidad*”

Las modificaciones que la Ley experimenta en esta materia son de dos tipos. Por un lado, se elimina la exigencia que el graduado social esté colegiado a efectos de representación (art. 18), lo que no deja de ser lógico, en tanto que si dicha representación puede ser ejercida por un “*provi vidí*” u “hombre bueno”, ningún sentido tenía esa limitación. Sin embargo, insólitamente, el art. 19.1 sigue exigiendo la colegiación para la representación en los procedimientos que afecten a más de diez actores.

El segundo cambio significativo pasa por el reconocimiento a dicho colectivo profesional de la posibilidad de formalizar recurso de suplicación, exigiéndose aquí –lógicamente- la colegiación. A dichos efectos, se procede a una modificación exhaustiva (y en algún caso, carente de lógica). Se cambia así el redactado de los arts. 21, 193, 229, 230, 233 y la DA 2ª LPL.

2.7 Otros cambios normativos

El resto de modificaciones abordadas por la Ley 13/2009, que abordaremos en áreas temáticas, son las siguientes por lo que hace a las modificaciones de la Ley de Procedimiento Laboral:

- a) Un importante aspecto a reseñar –que podría haberse integrado previamente en las modificaciones derivadas de la adaptación a la LEC- es el cambio que experimenta el redactado del art. 5 LPL. Cabe recordar que en el texto anterior la inadmisión de la demanda por incompetencia quedaba reservada a la materia o función, mientras que el nuevo redactado extiende ese escenario, también, al ámbito territorial. Parece obvio que con ese cambio la voluntad del legislador pasa por negar la teoría jurisprudencial de la sumisión tácita, de tal forma que nos hallaremos ante un redactado que no difiere ostensiblemente del marco específico del art. 54 LEC. Cabrá, por tanto, entender que los criterios judiciales surgidos a raíz de la publicación de la LEC, aplicando de oficio la incompetencia territorial (y rectificadas por la doctrina unificada, a partir de la STS UD 16.02.2004) vuelven a cobrar ahora eficacia.

- b) Por otra parte, debe reseñarse la modificación de determinados plazos procesales. Es el caso de los siguientes preceptos: art. 82, de tal manera que el plazo mínimo existente entre la citación y la fecha de la conciliación del juicio se amplía de cuatro a quince días; art. 84, en relación con la impugnación por terceros afectados de la conciliación efectuada –ahora- ante el Secretario judicial, manteniéndose el general de quince días, pero con una concreción del *dies a quo* desde el momento de conocimiento por aquél del acuerdo; art. 90, ampliando hasta diez días, en lugar de tres, el plazo máximo anterior al juicio para solicitar la práctica de prueba que requiera de citación o requerimiento; y art. 138, reduciendo de diez a quince días el plazo para dictar sentencia. Por otra parte, conforme al nuevo redactado del art. 24.2 LPL cuando se despache ejecución a instancias del FOGASA una vez subrogado en el crédito a los trabajadores, el plazo de quince días para que los trabajadores manifiesten su concurrencia al proceso de ejecución empieza a computarse a partir de la notificación del decreto del Secretario y no desde el momento de abono de las cantidades obtenidas.

- c) Es también significativo el cambio de redacción del art. 85 LPL, en la adición de un nuevo apartado 5 conforme al cual en el juicio en el trámite de alegaciones iniciales de las partes " *Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes o sus defensores con el Tribunal fijarán los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes*". Es obvio que la voluntad del legislador en este punto es la concreción a efectos de prueba de hechos controvertidos, a fin y efectos de evitar dilaciones por reiteración en la práctica en dicha fase y en conclusiones.
- d) Asimismo constituye una cierta novedad, al menos en la Ley, la cuestión relativa a las advertencias sobre el tiempo y forma en que deben interponerse los recursos contra las sentencias en el art. 100 LPL. En el redactado anterior se preveía que dicho contenido debía integrarse en la cédula de notificación, mientras que ahora se establece su inclusión en el texto de la sentencia.
- e) Y, finalmente en cuanto a la LPL, hay que destacar la existencia de algunas modificaciones en el régimen de recursos y remedios procesales. Así, en primer lugar, se modifica el recién citado art. 138 LPL, permitiendo la posibilidad de recurso –hasta ahora vedada- en aquellos casos en los que concurra afectación general. Se trata, obviamente, de una adición del todo artificial –que, por otra parte, no se repite en el resto de modalidades procesales carentes de recurso-, en tanto que resulta evidente que la afectación general es aplicable a todos los supuestos. A lo que cabe añadir que difícilmente se puede considerar –de conformidad con los criterios de la doctrina unificada- que una modificación sustancial o geográfica, como tal y en el marco de una empresa, tenga afectación general.

Por otra parte, el segundo de los aspectos a destacar en este tema es la modificación que experimenta la LOPJ, a través de la adición de una nueva Disposición Adicional Decimoquinta. En el ámbito laboral parece claro que los únicos elementos novedosos aquí apreciables pasan por la obligación de consignación de las cantidades de 30 y 50 euros para

instar recursos de queja y revisión, respectivamente. Es éste un elemento novedoso, hasta ahora inexistente y que como dificultad práctica sólo ofrece la duda respecto a que en cuenta deberá consignarse respecto a la queja. Por la propia lógica de este singular recurso parece evidente que deberá hacerse en la del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, ante el Tribunal Supremo (o al menos, ése es el criterio que se ha seguido en Cataluña).

En todo caso, es de agradecer que la LO 1/2009 nos aclare el destino de los depósitos. Conforme al apartado 10 de la DA Decimoquinta en su nuevo redactado: *“Los depósitos perdidos y los rendimientos de la cuenta quedan afectados a las necesidades derivadas de la actividad del Ministerio de Justicia, destinándose específicamente a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita, y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia. A estos efectos, los ingresos procedentes de los depósitos perdidos y los rendimientos de la cuenta generarán crédito en los estados de gastos de la sección 13 “Ministerio de Justicia”*

Sin embargo, también hay cambios en la LEC que pueden afectar al funcionamiento del orden social. Los más significativos son los siguientes:

- a) Regulación del acceso de los ciudadanos a las sentencias.- A dichos efectos se modifica el art. 212.2 LEC, introduciendo “ex novo” la siguiente previsión: *“Se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso podrá quedar restringido cuando el mismo pueda afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes”*

- b) Ampliación de los supuestos que dan lugar a la nulidad de actuaciones.- Se modifica el art. 228.1, sustituyendo como causa el anterior redactado (*“actuaciones fundada en defectos de forma que hayan causado indefensión”*) por el siguiente otro *“actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución”*.

- c) Plazo de solicitud del beneficio de justicia gratuita de la parte demandada.- Se añade un nuevo párrafo en el art. 339.1 –que si bien se refiere a los juicios verbales civiles quizás podría extenderse a la jurisdicción social, en los siguientes términos: *“Si se tratara de juicios verbales sin trámite de contestación escrita, el demandado beneficiario de justicia gratuita deberá solicitar la designación judicial de perito al menos con diez días de antelación al que se hubiera señalado para la celebración del acto de la vista, a fin de que el perito designado pueda emitir su informe con anterioridad a dicho acto”*
- d) Contenido de las cédulas de emplazamiento.- Asimismo, aunque sea en forma incidental, debe llamarse la atención del cambio experimentado en el art. 155.1 LEC –aunque en este caso por la prácticamente coetánea Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios-, con el siguiente añadido: *“En la cédula de emplazamiento o citación se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla”* y el nuevo régimen de dación de cuentas (art. 178) Por otra parte, hay que resaltar el nuevo papel que la Ley otorga a los procuradores en el régimen de notificaciones –en la práctica habilitándolos como una especie de agentes judiciales-, aunque por obvios motivos es ése un aspecto que difícilmente tendrá incidencia práctica en el orden social.

3. Entrada en vigor

Conforme a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/2009 tan abundantes cambios normativos entrarán en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE. Conforme al art. 5.1 CC parecería lógico concluir que el inicio de la vigencia es el próximo 4 de mayo. Sin embargo, si se considera que, por su carácter interno, nos hallamos ante una norma de tipo administrativo, puede invocarse la aplicación 48.2 de la Ley 30/1992, lo que conllevaría que la fecha de entrada en vigor fuese el siguiente día 5. Debe denotarse que este último ha sido el criterio seguido por la Comisión Jurídica Asesora creada en el CGPJ para el desarrollo de la NOJ.

En cuanto al íter de aplicación cabe observar que conforme a las DT Primera y Segunda de la Ley 13/2009, el nuevo marco legal será aplicable desde la fecha antes indicada a todos los procesos ejecutivos en marcha, mientras que a los declarativos sólo a los que se inicien a partir de ese día, siguiéndose el resto por la normativa anterior hasta la fecha que se dicte sentencia.

Barcelona, març de 2010

ANEXO.- TEXTO COMPARADO DE LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LA LPL TRAS LA LEY 13/2009

Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE de 4 de noviembre de 2009):		
MODIFICACIONES EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL		
ARTÍCULO AFECTADO	ANTERIOR REDACTADO	ACTUAL REDACTADO
<u>Art. 5 (declaración de oficio de incompetencia):</u> Modificación del apartado 1	1. Si los órganos jurisdiccionales se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia o de la función, <u>acto seguido de su presentación</u> dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho	1. Si los órganos jurisdiccionales se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho
<u>Art. 14 (cuestiones de competencia):</u> modificación en su integridad: - Eliminación de la inhibitoria)	Las cuestiones de competencia se sustanciarán y decidirán con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil , salvo lo dispuesto en las siguientes reglas: a) Las declinatorias se propondrán como excepciones <u>perentorias</u> y serán resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos. Si se estimase la declinatoria, el demandante podrá deducir su demanda ante el órgano territorialmente competente, y si la acción estuviese sometida a plazo de caducidad, se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme. b) <u>Formulada inhibitoria, el órgano ante el que se plantee lo comunicará por el medio más rápido posible al órgano ante el que penda el proceso, que suspenderá su tramitación a las resultas de aquélla.</u>	Las cuestiones de competencia se sustanciarán y decidirán con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo dispuesto en las siguientes reglas: 1.ª Las declinatorias se propondrán como excepciones y serán resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos. 2.ª Si se estimase la declinatoria, el demandante podrá deducir su demanda ante el órgano territorialmente competente, y si la acción estuviese sometida a plazo de caducidad, se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme.

	<p><u>Una vez que haya quedado firme el auto en que se declare no haber lugar el requerimiento de inhibición se comunicará por el medio más rápido posible al órgano que conociera del proceso, que alzaré la suspensión y continuará su trámite.</u></p> <p><u>Si de lo actuado se apreciase que el planteamiento de la cuestión tenía una exclusiva finalidad dilatoria, en la resolución en la que se declare no haber lugar al requerimiento de inhibición se impondrá motivadamente al que la formuló la multa prevista en el artículo 97.3</u></p>	
Art. 15 (recusación): adición de un nuevo apartado 4 respecto a Secretarios y otros funcionarios	4. La abstención y la recusación de los Secretarios judiciales y de los miembros de los demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se regirán por lo dispuesto para cada uno de ellos en la Ley de Enjuiciamiento Civil	
Art. 18 (representación): Modificación del apartado 1: -Competencias del Secretario/a judicial	1. Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a Procurador, Graduado Social colegiado o a cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado <u>por comparecencia</u> ante Secretario judicial o por escritura pública	1. Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a procurador, graduado social o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante Secretario judicial o por escritura pública
Art. 19 (Representación de varios actores): Modificación del apartado 2: - Competencias del Secretario/a judicial	2. Cuando <u>el Juzgado o Tribunal</u> , conforme al artículo 29, <u>acuerde de oficio o a instancia de parte</u> la acumulación de autos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a más de 10 actores, los requerirá para que designen un representante común, pudiendo recaer dicha designación en cualquiera de los sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto, junto con la comunicación a los	2. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 29, <u>se acuerde</u> la acumulación de procesos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a más de diez actores, <u>el Secretario judicial</u> les requerirá para que designen un representante común, pudiendo recaer dicha designación en cualquiera de los sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto, junto con la

	actores de la resolución de acumulación, les citará de comparecencia ante el Secretario judicial dentro de los cuatro días siguientes para el nombramiento del representante común; si el día de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma, se procederá a la designación del representante común, entendiéndose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto	comunicación a los actores de la resolución de acumulación, <u>el Secretario judicial</u> les citará de comparecencia dentro de los cuatro días siguientes para el nombramiento del representante común; si el día de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma, se procederá a la designación del representante común, entendiéndose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto
Art. 20 (representación sindical): modificación del apartado 3: - Eliminación de la presencia judicial en la comprobación de comunicación del sindicato	3. Si en cualquier fase del proceso el trabajador expresara, <u>a presencia judicial</u> , que no había recibido la comunicación del Sindicato o que habiéndola recibido hubiera negado la autorización de actuación en su nombre, el Juez o Tribunal, previa audiencia del Sindicato, acordará el archivo de las actuaciones sin más trámite	3. Si en cualquier fase del proceso el trabajador expresara <u>en la Oficina judicial</u> que no había recibido la comunicación del sindicato o que habiéndola recibido hubiera negado la autorización de actuación en su nombre, el Juez o Tribunal, previa audiencia del sindicato, acordará el archivo de las actuaciones sin más trámite
Art. 21 (Postulación): Modificación de los apartados 1 y 3): - CAPACIDAD DE LOS GRADUADOS SOCIALES PARA INTERPONER SUPPLICACIÓN/ - Competencias del Secretario/a judicial	1. La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, pero podrá utilizarla cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos, con las excepciones fijadas en el artículo 2 d), de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. (...) 3. Si en cualquier otra	1. La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia. <u>En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación será preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes</u> , en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos, con las excepciones fijadas en el artículo 2.d) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (...) 3. Si en cualquier otra

	actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de Letrado, <u>el Juez o Tribunal</u> adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes	actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, <u>el Secretario judicial</u> adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes
Art. 23 (FOGASA): Modificación del apartado 2: - Competencias del Secretario/a judicial	2. En supuestos de Empresas incursas en procedimientos concursales, así como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, <u>el Juez, de oficio o a instancia de parte</u> , citará como parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho	2. En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, así como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, <u>el Secretario judicial</u> citará como parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho
Art. 24 (FOGASA): modificación del apartado 2: -Competencias del Secretario/a judicial. -Obligación de prorrateo de las cantidades obtenidas	2. Despachada ejecución, <u>se hará constar en el auto la subrogación producida</u> , notificándose a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes, si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la Empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo, se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el término de quince días <u>como máximo hasta el momento de abono de las cantidades obtenidas si, de ser insuficientes, pretendieren el abono o prorrateo con el Fondo de los respectivos importes de sus créditos</u>	2. Despachada ejecución, <u>el Secretario judicial dictará decreto haciendo constar la subrogación producida</u> , que se notificará a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo, se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de quince días. Las cantidades obtenidas se abonarán prorrateadas entre el Fondo y los trabajadores en proporción a los importes de sus respectivos créditos.
Modificación de la rúbrica del Capítulo I del Título III	De la acumulación de acciones, <u>autos</u> y recursos	De la acumulación de acciones, <u>procesos</u> y recursos
Art. 27 (Principios generales de la acumulación): Modificación en su integridad: - Limitación funcional y territorial de la acumulación y	1. El actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos.	1. El actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos, <u>siempre que todas ellas puedan tramitarse ante el mismo Juzgado o</u>

<p>reconvención, - Acumulación de acciones de varios actores - Inclusión en la prohibición de acumulación de las modalidades procesales de los arts 125 y 138 bis LPL - Posibilidad de acumulación de la extinción del art. 50 ET con reclamaciones de cantidad de los salarios indebidos - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>2. No obstante y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de esta Ley, no podrán acumularse a otras en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar, en los anteriores juicios, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley.</p>	<p>Tribunal. <u>2. En los mismos términos podrá el demandado reconvenir.</u> <u>3..</u> 4. No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de esta Ley, no podrán acumularse a otras en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido, las de extinción del contrato de trabajo de los artículos 50 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las que versen sobre materia electoral, <u>las</u>, las de impugnación de convenios colectivos, las de impugnación de estatutos de los sindicatos y las de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar, en los anteriores juicios, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley. <u>No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando para la referida acción de extinción del contrato de trabajo del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se invoque la falta de pago del salario pactado contemplada en la letra b) del apartado 1 de aquel precepto, la reclamación salarial podrá acumularse a la acción solicitando la extinción indemnizada del vínculo.</u> 5. Tampoco serán acumulables entre sí las reclamaciones en materia de</p>
--	--	---

	<p>3. Tampoco serán acumulables entre sí las reclamaciones en materia de Seguridad Social, salvo cuando tengan la misma causa de pedir</p>	<p>Seguridad Social, salvo cuando tengan la misma causa de pedir. <u>6. Cuando se presenten demandas acumulando objetiva o subjetivamente acciones, el Secretario judicial verificará que concurren los presupuestos indicados en los apartados precedentes</u></p>
<p><u>Art. 28 (acciones indebidamente acumuladas):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Efectos de la negativa de desacumulación por la parte actora - Ampliación del régimen de excepciones de archivo a todas las acciones con plazo de caducidad</p>	<p>1. Si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, <u>el Juez o Tribunal</u> requerirá al demandante para que, en el plazo de cuatro días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, se acordará el archivo de la demanda, notificándose la resolución.</p> <p>2. No obstante, cuando se trate de una demanda <u>de despido</u> a la que indebidamente se hubiera acumulado otra acción, aunque el actor no opte, se seguirá la tramitación del juicio de <u>despido</u> y se tendrá por no formulada la otra acción acumulada, advirtiéndose al demandante de su derecho a ejercitarla por separado</p>	<p>1. Si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, <u>el Secretario judicial</u> requerirá al demandante para que, en el plazo de cuatro días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, <u>o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones</u>, dará cuenta al Tribunal para que éste, en su caso, acuerde el archivo de la demanda.</p> <p>2. No obstante, cuando se trate de una demanda sometida <u>a plazo de caducidad</u> a la que indebidamente se hubiera acumulado otra acción, aunque el actor no opte, se seguirá la tramitación del juicio <u>por aquella y el Juez o Tribunal</u> tendrá por no formulada la otra acción acumulada, advirtiéndose al demandante de su derecho a ejercitarla por separado. <u>Si se hubiera, indebidamente, acumulado una acción por despido y otra u otras acciones sometidas igualmente a plazo de caducidad, aunque el actor no opte, se seguirá la tramitación del juicio por despido y el Juez o Tribunal</u> tendrá por no formulada la <u>otra u otras acciones acumuladas, advirtiéndose al demandante de su derecho a ejercitarlas por</u></p>

<p><u>Art. 29 (acumulación de demandas en un mismo juzgado):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Audiencia a las partes</p>	<p>Si en el mismo Juzgado o Tribunal se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ella idénticas acciones, podrá acordarse, de oficio o a instancia de parte, la acumulación de los autos</p>	<p><u>separado</u></p> <p>1. Si en el mismo Juzgado o Tribunal se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ellas idénticas acciones, se acordará, de oficio o a instancia de parte, la acumulación de los autos. <u>2. El Secretario judicial dará traslado, por plazo común de tres días, a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación se trate, a fin de que formulen alegaciones acerca de aquélla. Transcurrido el plazo, el Juzgado o Tribunal dictará auto decidiendo la acumulación, de cumplirse los requisitos legales</u></p>
<p><u>Art. 30 (acumulación en distintos juzgados):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - ¿Obligación de acumulación? - Audiencia a las partes</p>	<p>Si en el caso del artículo anterior las demandas pendieran ante dos o más Juzgados de lo Social de una misma circunscripción, también <u>podrá</u> acordarse la acumulación de todas ellas, de oficio o a petición de parte. Esta petición habrá de formularse ante el <u>Juez</u> que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro,</p>	<p>1. Si en el caso del artículo anterior las demandas pendieran planteadas en distintos procesos ante dos o más Juzgados de lo Social de una misma circunscripción, también <u>se acordará</u> la acumulación de todas ellas, de oficio o a petición de parte. Esta petición habrá de formularse ante el <u>Juzgado o Tribunal</u> que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro. <u>2. El Secretario judicial dará traslado, por plazo común de tres días, a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación se trate, a fin de que formulen alegaciones acerca de aquélla. Transcurrido el plazo, el Juzgado o Tribunal dictará auto decidiendo la acumulación, de cumplirse los requisitos legales</u></p>
<p><u>Nuevo art. 30 bis:</u> - FORZOSA ACUMULACIÓN EN CASO DE POSIBLES PRONUNCIAMIENTOS CONTRADICTORIOS</p>	<p>Artículo 30 bis. 1.. 2. En estos casos, el Secretario judicial dará audiencia, por plazo común de tres días, a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación se trate, a fin de que formulen alegaciones.</p>	

<p>- Competencias del Secretario/a judicial - Audiencia a las partes</p>	<p>3. El Juez o Tribunal resolverá decidiendo la acumulación, de cumplirse los requisitos legales. Contra este auto no cabrá otro recurso que el de reposición</p>	
<p>Art. 31 (Procedimientos de oficio y acumulaciones): Nuevo redactado: - Instrumento procesal: auto</p>	<p>A los procesos de oficio iniciados a virtud de comunicación de la Autoridad Laboral regulados en el artículo 146 de esta Ley, se acumularán, de acuerdo con las reglas anteriores, las demandas individuales en que concurren identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos Juzgados de la misma circunscripción</p>	<p>A los procesos de oficio iniciados en virtud de comunicación de la autoridad laboral regulados en el artículo 146 de esta ley, se acumularán, de acuerdo con las reglas anteriores, las demandas individuales en que concurren identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos Juzgados de la misma circunscripción. <u>Dicha acumulación se acordará por el Juzgado o Tribunal mediante auto</u></p>
<p>Art. 33 (requisitos para la acumulación de recursos): Modificación en su integridad: - Obligación de acumulación si es a instancias de parte</p>	<p>En las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo se podrá acordar de oficio o a instancia de parte la acumulación de recursos pendientes, cuando entre ellos exista identidad de objeto y de alguna de las partes, previa audiencia de los comparecidos en todo caso y del Ministerio Fiscal en los recursos de casación</p>	<p>En las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo se podrá acordar de oficio, <u>y deberá decretarse si es a instancia de parte</u>, la acumulación de recursos pendientes, cuando entre ellos exista identidad de objeto y de alguna de las partes, previa audiencia de los comparecidos en todo caso y del Ministerio Fiscal en los recursos de casación</p>
<p>Art. 34 (Procedimiento de acumulación): Modificación de los apartados 1 y 3: - Cuestiones terminológicas</p>	<p>1. La acumulación de acciones y <u>autos</u> deberá formularse y acordarse antes de la celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por vía de reconvencción (...) 3. Acordada la acumulación de <u>autos</u>, podrá ésta dejarse sin efecto respecto de uno o varios de ellos, si concurren causas que justifiquen su tramitación separada</p>	<p>1. La acumulación de acciones y <u>procesos</u> deberá formularse y acordarse antes de la celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por vía de reconvencción (...) 3. Acordada la acumulación de <u>procesos</u>, podrá ésta dejarse sin efecto por el Juez o Tribunal respecto de uno o varios de ellos, si concurren causas que justifiquen su tramitación separada</p>
<p>Art. 35 (Efectos de la acumulación): Modificación en su integridad:</p>	<p>La acumulación de acciones, <u>autos</u> y recursos cuando proceda producirá el efecto de discutirse</p>	<p>La acumulación de acciones, <u>procesos</u> y recursos cuando proceda producirá el efecto de discutirse conjuntamente y</p>

<p>- Cuestiones terminológicas</p>	<p>conjuntamente y resolverse en una sola resolución todas las cuestiones planteadas</p>	<p>resolverse en una sola resolución todas las cuestiones planteadas</p>
<p><u>Art. 37 (Acumulación de ejecuciones):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Obligación de acumulación en determinados supuestos</p>	<p>1. Cuando, deberá acordarse la acumulación de ejecuciones, de oficio o a instancia de parte, de seguirse ante un mismo Juzgado, o a instancia de parte, de conocer de ellas Juzgados distintos. 2. En los demás supuestos, <u>el órgano judicial podrá</u> acordar la acumulación, de oficio o a instancia de parte, si así procede, atendiendo a criterios de economía y de conexión entre las diversas obligaciones cuya ejecución se pretenda</p>	<p>1. Cuando las acciones ejercitadas tiendan a obtener la entrega de una cantidad de dinero y existan indicios de que los bienes del deudor o deudores pudieran ser insuficientes para satisfacer la totalidad de los créditos que se ejecuten, <u>el Secretario judicial deberá</u> acordar la acumulación de ejecuciones, de oficio o a instancia de parte, de seguirse ante un mismo Juzgado, o a instancia de parte, de conocer de ellas Juzgados distintos. 2. En los demás supuestos, <u>el Secretario judicial deberá</u> acordar la acumulación, de oficio o a instancia de parte,</p>
<p><u>Art. 38 (tramitación de la acumulación de ejecuciones):</u> Modificación en su integridad: - Obligación de acumulación. - Criterios alternativos en el caso de coincidencia de fecha - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. La acumulación será decretada, en su caso, por el órgano judicial que haya iniciado con anterioridad la ejecución, al que también corresponderá, en los términos establecidos en esta Ley, adoptar cuantas medidas sean necesarias para la efectividad de las ejecuciones acumuladas. 2. Si las ejecuciones cuya acumulación se pretenda se tramitaran ante órganos judiciales de diversa circunscripción, y en la iniciada con anterioridad no figurase incluida la mayor parte de los trabajadores y créditos afectados ni embargada con prioridad la mayor parte de los bienes del deudor común, la acumulación corresponderá decretarla, <u>en su caso, al órgano judicial</u> que con prioridad trabó embargo sobre la totalidad o mayor parte de los referidos</p>	<p>1. Los procesos de ejecución <u>se acumularán al primero en que se ordenó el despacho de la ejecución. Si dicha orden es de la misma fecha se acumularán atendiendo a la antigüedad del título, y en último caso se estará a la fecha de presentación de la demanda.</u> 2. Si las ejecuciones cuya acumulación se pretenda se tramitaran ante órganos judiciales de diversa circunscripción, y en la iniciada con anterioridad no figurase incluida la mayor parte de los trabajadores y créditos afectados ni embargada con prioridad la mayor parte de los bienes del deudor común, la acumulación corresponderá decretarla <u>al Secretario judicial</u> que con prioridad trabó embargo sobre la totalidad o mayor parte de los referidos bienes</p>

<p>Art. 39 <u>(Procedimiento de acumulación de ejecuciones):</u> Modificación en su integridad: - Competencia del Secretario/a judicial - Instrumento procesal - Recurso de revisión</p>	<p>bienes</p> <p>1. El incidente de acumulación podrá plantearse por o ante el <u>órgano judicial</u> competente para decretar la acumulación de las ejecuciones, en los términos indicados en el artículo anterior, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes.</p> <p>2. De estimar procedente la acumulación, <u>el órgano judicial dictará auto</u>, oídas las partes, reclamando la remisión de las ejecuciones a acumular a los órganos judiciales ante los que se tramiten.</p> <p>3. Si <u>el Juez requerido</u> estima procedente el requerimiento, dictará auto accediendo a ello y acordando la remisión de lo actuado.</p> <p>4. <u>En el supuesto de acumulación preceptiva establecido en el artículo 37.1 de esta Ley, si el Juez competente para decretar la acumulación la estimara improcedente o si el Juez requerido no accediere a ella, tras dictar el auto correspondiente</u>, elevará seguidamente a la Sala de lo Social del Tribunal superior inmediato común testimonio suficiente de sus actuaciones y, en su caso, de todas las realizadas en el incidente de acumulación, comunicándolo al otro Juez afectado para que por éste se haga lo propio y remita, de no haber aún intervenido, el oportuno informe. La Sala resolverá sobre la procedencia de la acumulación y determinará</p>	<p>1. El incidente de acumulación podrá plantearse por o ante el <u>Juzgado o Tribunal</u> competente para decretar la acumulación de las ejecuciones, en los términos indicados en el artículo anterior, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes.</p> <p>2. De estimar procedente la acumulación, <u>el Secretario judicial acordará mediante decreto</u>, oídas las partes, reclamar la remisión de las ejecuciones a acumular a los órganos judiciales en los que se tramiten.</p> <p>3. Si <u>el Secretario judicial del órgano</u> requerido estima procedente el requerimiento, dictará decreto accediendo a ello y acordando la remisión de lo actuado. <u>Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión.</u></p> <p>4. <u>Si el Secretario judicial competente para decretar la acumulación la estimara improcedente o si el requerido no accediere a ella, tras dictar el decreto correspondiente y firme que sea éste</u>, elevará seguidamente a la Sala de lo Social del Tribunal superior inmediato común a ambos órganos judiciales testimonio suficiente de sus actuaciones y, en su caso, de todas las realizadas en el incidente de acumulación, comunicándolo al otro afectado para que por éste se haga lo propio y remita, de no haber aún intervenido, el oportuno informe. La Sala resolverá sobre la procedencia de la acumulación y determinará el Juzgado competente para conocer de las ejecuciones</p>
--	--	--

	el Juzgado competente para conocer de las ejecuciones	
Art. 40 (Efectos de la acumulación de ejecuciones): Modificación en su integridad: - Efectos del incidente: respecto la tramitación	El incidente de <u>acumulación</u> no suspenderá la tramitación de las ejecuciones afectadas salvo las actuaciones relativas al pago a los ejecutantes de las cantidades obtenidas con posterioridad al planteamiento de dicho incidente	La tramitación del incidente de <u>acumulación</u> no suspenderá la de las ejecuciones afectadas, salvo las actuaciones relativas al pago a los ejecutantes de las cantidades obtenidas con posterioridad al planteamiento de dicho incidente
Art. 41 (Plazo de la acumulación de ejecuciones): Modificación del apartado 1: - Limitación obligatoria del plazo	1. La acumulación podrá instarse o acordarse mientras no quede cumplida la obligación que se ejecute o hasta que, en su caso, se declare la insolvencia del ejecutado	1. La acumulación de <u>ejecuciones</u> sólo podrá instarse o acordarse mientras no quede cumplida la obligación que se ejecute o hasta que, en su caso, se declare la insolvencia del ejecutado
Art. 42 (Autorizaciones): Modificación en su integridad: - Eliminación de competencias de oficiales judiciales - Remisión a la LEC	Las actuaciones judiciales han de ser autorizadas por el Secretario <u>o por el Oficial de la Administración de Justicia a quien aquél habilite o que legalmente le sustituya</u>	Las actuaciones procesales han de ser autorizadas por el Secretario judicial <u>en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil y con las especialidades previstas en esta Ley</u>
Art. 43 (Calendario): Modificación de los apartados 1, 3, 4 y 5: - Aspectos terminológicos - Inclusión del cómputo del mes de agosto de las modalidades procesales de los arts. 125 y 138 bis LPL y aspectos regulados en la LO de Violencia de Género - Competencias de los Secretarios judiciales	1. Las actuaciones <u>judiciales</u> deberán practicarse en días y horas hábiles. (...) 3. Salvo los plazos señalados para dictar resolución <u>judicial</u> , todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables, y sólo podrán suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las Leyes. 4. Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo para las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los artículos 50 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, vacaciones, materia electoral, conflictos	1. Las actuaciones <u>procesales</u> deberán practicarse en días y horas hábiles. (...) 3. Salvo los plazos señalados para dictar resolución, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables, y sólo podrán suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes. 4. Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo para las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los artículos 50 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, <u>movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la de derechos de</u>

	<p>colectivos, impugnación de Convenios Colectivos y tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.</p> <p>Tampoco serán inhábiles dichos días para las actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para las de aquellas que, de no adoptarse, puedan producir un perjuicio de difícil reparación.</p> <p>5. El Juez o Tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil, o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial. Iniciada una actuación en tiempo hábil podrá continuar hasta su conclusión sin necesidad de habilitación</p>	<p><u>conciliación de la vida personal, familiar y laboral a que se refiere el artículo 138 bis</u>, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales. Tampoco serán inhábiles dichos días para las actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para las de aquellas que, de no adoptarse, puedan producir un perjuicio de difícil reparación. <u>Será hábil el mes de agosto para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.</u></p> <p>5. El Juez o Tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial. <u>Esta habilitación se realizará por los Secretarios judiciales cuando tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por jueces o Tribunales.</u> Iniciada una actuación en tiempo hábil podrá continuar hasta su conclusión sin necesidad de habilitación</p>
<p><u>Art. 45(Presentación de escritos en el último día de plazo):</u> <u>Modificación en su</u></p>	<p>1. <u>La presentación de escritos o documentos el último día de un plazo, podrá efectuarse ante el</u></p>	<p>1. <u>Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil</u></p>

<p>integridad: - Sustitución del juzgado de guardia por los servicios comunes - Limitación hasta las 15 horas del día siguiente (LEC)</p>	<p><u>Juzgado de Guardia de la sede del Juzgado o Sala de lo Social competente, si tiene lugar en horas en que no se halle abierto el Registro de entrada de dichos órganos. A tal efecto se habrá de expresar la hora en la oportuna diligencia de presentación en el Juzgado de Guardia, debiendo el interesado dejar constancia de ello en el Juzgado o Sala de lo Social al día siguiente hábil, por el medio de comunicación más rápido.</u> <u>2. En las islas en las que no tengan sede los Juzgados de lo Social, la presentación de escritos y documentos podrá efectuarse, en las mismas condiciones del apartado anterior, en cualquiera de los Juzgados de la isla que asuma las funciones de Juzgado de Guardia</u></p>	<p><u>siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.</u> <u>2. En ningún caso se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia</u></p>
<p><u>Art. 47 (Acceso a los autos):</u> Modificación en su integridad: - Adaptación a las nuevas competencias de los Secretarios judiciales</p>	<p>1. Los autos permanecerán en <u>los Juzgados y Salas de lo Social</u> bajo la custodia del Secretario, donde podrán ser examinados por los interesados que acrediten interés legítimo, a quienes deberá entregárseles testimonios, certificaciones o copias simples cuando lo soliciten. 2. Todo interesado podrá tener acceso al libro de sentencias a que se refiere el artículo 213 de la Ley de Enjuiciamiento Civil</p>	<p>1. Los autos permanecerán en <u>la Oficina judicial</u> bajo la custodia del Secretario, donde podrán ser examinados por los interesados que acrediten interés legítimo, a quienes deberán entregárseles testimonios, certificaciones o copias simples cuando lo soliciten. 2. Todo interesado podrá tener acceso al libro de sentencias a que se refiere el artículo 213 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al libro de decretos referido en el artículo 213 bis de la misma Ley</p>
<p><u>Art. 48 (Efectos de la no devolución de autos):</u> Modificación del apartado 2: - Competencias del Secretario/a judicial - Incremento de multas coercitivas</p>	<p>2. Si transcurrido el plazo concedido para su examen no fueren devueltos los autos, <u>incurrirá el responsable de ello</u>, salvo que la entrega se hubiere efectuado por testimonio, <u>en multa de 2.000 a 20.000</u></p>	<p>2. Si transcurrido el plazo concedido para su examen no fueren devueltos los autos, <u>por el Secretario judicial mediante decreto se impondrá al responsable multa de veinte a doscientos euros diarios</u>, salvo que la entrega se</p>

	<u>pesetas diarias</u> . Pasados dos días sin que los mismos hayan sido devueltos, procederá el Secretario a su recogida; si al intentarlo no le fueran entregados en el acto, dará cuenta al Juez para que disponga lo que proceda por retraso en la devolución	hubiere efectuado por testimonio. Pasados dos días sin que los mismos hayan sido devueltos, el Secretario judicial ordenará su recogida; si al intentarlo no le fueran entregados en el acto, dará cuenta al Juez para que disponga lo que proceda por el retraso en la devolución
Modificación de la rúbrica del Capítulo II del Título IV	De las resoluciones y diligencias de ordenación	De las resoluciones procesales
<u>Art. 49 (Instrumentos procesales):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Requisitos formales de las resoluciones orales	1. Los Juzgados y Tribunales de lo Social adoptarán sus decisiones por medio de providencias, autos y sentencias en los casos y con las formalidades legalmente previstos. 2. También dictarán resoluciones verbales durante la celebración del juicio u otros actos a presencia judicial, reseñándose en el acta	1. Los Jueces y Tribunales de lo Social adoptarán sus decisiones por medio de providencias, autos y sentencias en los casos y con las formalidades legalmente previstos. 2. <u>Los Secretarios judiciales resolverán por medio de diligencias y decretos, igualmente en los casos y con las formalidades legalmente previstos.</u> 3. <u>Se podrán dictar resoluciones orales por el Juez, Tribunal o Secretario judicial durante la celebración del juicio u otros actos que presidan, documentándose en el acta con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones</u>
<u>Art. 50 (resoluciones in voce):</u> Modificación de los apartados 1 y 3: - Requisitos formales de las sentencias orales - Competencias del Secretario/a judicial	1. El Juez, en el momento de terminar el juicio, podrá pronunciar sentencia de viva voz, que se consignará en el acta con el contenido y requisitos establecidos <u>en la Ley de Enjuiciamiento Civil</u> . También podrá limitarse a pronunciar el fallo, que se documentará en el acta <u>mediante la fe del Secretario Judicial</u> , sin perjuicio de la redacción posterior de la sentencia dentro del plazo y en la forma legalmente previstos (...) 3. Las partes quedarán notificadas de las sentencias dictadas	1. El Juez, en el momento de terminar el juicio, podrá pronunciar sentencia de viva voz, que se consignará en el acta con el contenido y requisitos establecidos en el artículo <u>97.2 de esta Ley</u> . También podrá limitarse a pronunciar el fallo, que se documentará en el acta, sin perjuicio de la redacción posterior de la sentencia dentro del plazo y en la forma legalmente previstos (...) 3. Las partes quedarán notificadas de las sentencias dictadas oralmente. Si,

	oralmente <u>mediante su lectura y la firma del acta</u> . Si, conocido el fallo las partes expresaran su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia	conocido el fallo, las partes expresaran su decisión de no recurrir, el Juez en el mismo acto declarará la firmeza de la sentencia
<u>Art. 51 (Propuestas de resolución de Secretarios judiciales):</u> Modificación en su integridad: - Desaparición del actual contenido y sustitución por un redactado genérico de requisitos formales de las resoluciones	1. <u>A los Secretarios corresponde proponer al Juez o a la Sala de lo Social las resoluciones que deban revestir la forma de providencia o auto. Se exceptúan las providencias que revisen las diligencias de ordenación y los autos decisorios de cuestiones incidentales sobre recursos o sobre asuntos en que se haya suscitado contienda así como los limitativos de derechos.</u> 2. <u>Las propuestas deberán adoptarse en el tiempo y con la forma previstos legalmente para la resolución de que se trate. Deberán ser suscritas por el Secretario proponente y el Juez o la Sala podrá aceptarlas con la expresión de «conformes» o dictar la resolución que proceda.</u>	<u>Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte, el nombre de quien la dicte, la expresión de si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos</u>
<u>Art. 52 (Diligencias de ordenación):</u> QUEDA SIN CONTENIDO	Artículo 52. [Diligencias de ordenación] 1. <u>Corresponde a los Secretarios dictar diligencias de ordenación que tengan por objeto dar a los autos el curso ordenado por la Ley, así como impulsar formalmente el procedimiento en sus distintos trámites.</u> 2. <u>Su forma se limitará a la expresión de lo que se disponga, con el nombre del Secretario, la fecha y su firma.</u> 3. <u>Las diligencias de ordenación serán revisables de oficio por el Juez o por el Magistrado Ponente de la Sala de lo</u>	- - - -

	<p><u>Social.</u> <u>4. Las partes podrán pedir la revisión de las diligencias de ordenación en el día siguiente a su notificación, en escrito motivado dirigido al Juez o al Ponente, quienes resolverán de plano, salvo que consideren necesario dar traslado a la parte contraria para que en el plazo de dos días, comunes si fuesen varias, aleguen lo conveniente. En este caso habrá de dictarse la providencia resolutoria en término de una audiencia</u></p>	
<p>Art. 53 (Contenido de los actos de comunicación): Modificación del apartado 1: - Remisión a la LEC</p>	<p>1. Los actos de comunicación se efectuarán en forma que se <u>garanticen el derecho a la defensa y los principios de igualdad y de contradicción. Habrán de practicarse por los medios más rápidos y eficaces que permitan su adecuada constancia y las circunstancias esenciales de la misma</u></p>	<p>1. Los actos de comunicación se efectuarán en la forma <u>establecida en el Capítulo V del Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en esta Ley</u></p>
<p>Art. 54 (Notificaciones): Modificación de los apartados 1 y 3: - Aspectos terminológicos - Competencias del Juez en medidas cautelares, preventivas o ejecutivas</p>	<p>1. <u>Las providencias, autos, sentencias y diligencias de ordenación del Secretario</u> se notificarán en el mismo día de su fecha, o de la publicación, en su caso, a todos los que sean parte en el juicio, y no siendo posible, en el día hábil siguiente (...)</p> <p>3. Si durante el proceso hubieran de adoptarse medidas tendentes a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes o a asegurar la efectividad de la resolución judicial, y la notificación inmediata al afectado de las actuaciones procesales o de la medida cautelar, preventiva o ejecutiva adoptada pudiera poner en peligro su efectividad, el</p>	<p>1. <u>Las resoluciones procesales</u> se notificarán en el mismo día de su fecha, o de la publicación en su caso, a todos los que sean parte en el juicio, y no siendo posible en el día hábil siguiente (...)</p> <p>3. Si durante el proceso hubieran de adoptarse <u>por el Juez o la Sala</u> medidas tendentes a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes o a asegurar la efectividad de la resolución judicial, y la notificación inmediata al afectado de las actuaciones procesales o de la medida cautelar, preventiva o ejecutiva adoptada pudiera poner en peligro su</p>

	<p>órgano judicial podrá, motivadamente, acordar la demora en la práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad</p>	<p>efectividad, el órgano judicial podrá, motivadamente, acordar la demora en la práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad</p>
<p><u>Art. 55 (Requisitos formales de las notificaciones):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario - Oficina judicial</p>	<p>Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos se harán <u>por el Secretario o por quien desempeñe sus funciones</u>, en el local <u>del Juzgado o Tribunal o en el servicio común</u>, si allí comparecieren por propia iniciativa los interesados y, en otro caso, en el domicilio señalado a estos efectos</p>	<p>Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos se harán en el local <u>de la Oficina judicial</u>, si allí comparecieren por propia iniciativa los interesados y, en otro caso, en el domicilio señalado a estos efectos</p>
<p>Art. 57 (notificación mediante célula): Modificación en su integridad: - Aspectos terminológicos - Rebaja de la edad del receptor de la célula - Eliminación del vecino más próximo como receptor - Obligaciones del receptor - Actualización de multas punitivas - Remisión a la LEC</p>	<p>1. Si las <u>diligencias de comunicación</u> no pudieran efectuarse en la forma indicada se practicarán mediante la entrega de cédula al destinatario; si no fuese hallado se entregará aquélla al pariente más cercano o familiar o empleado, mayores de <u>dieciséis años</u> que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, <u>al vecino más próximo</u> o al portero o conserje de la finca. 2. Sin necesidad de constituirse en el domicilio del interesado se podrá entregar la cédula a cualquiera de las personas antes mencionadas y a quien por su relación con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto de comunicación. 3. Se hará saber al receptor: <u>que ha de cumplir el deber público que se le encomienda; que puede ser sancionado con multa de 2.000 a 20.000 pesetas</u> si se niega a la recepción, o no hace la entrega a la mayor brevedad; que ha de</p>	<p>1. Si los <u>actos de comunicación</u> no pudieran efectuarse en la forma indicada se practicarán mediante entrega de la copia de la resolución o de cédula al destinatario; si no fuese hallado se entregará aquélla al pariente más cercano o familiar o empleado, mayores de <u>catorce años</u>, que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, al portero o conserje de la finca. 2. Sin necesidad de constituirse en el domicilio del interesado se podrá entregar la <u>copia de la resolución</u> o la cédula a cualquiera de las personas antes mencionadas y a quien por su relación con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto de comunicación. 3. Se hará saber al receptor que ha de cumplir el deber público que se le encomienda; <u>que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su</u></p>

	<p>comunicar al órgano judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen</p>	<p><u>paradero, con advertencia de que puede ser sancionado con multa de veinte a doscientos euros si se niega a la recepción o no hace la entrega a la mayor brevedad; que ha de comunicar a la Oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen.</u> <u>4. En todo caso, la comunicación por medio de entrega de copia de la resolución o cédula se realizará conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil</u></p>
<p><u>Art. 58 (Contenido de las cédulas):</u> <u>Modificación en su integridad:</u> - Nuevos requisitos formales de la cédula y de la copia de notificación</p>	<p>1. Las cédulas, <u>a las que se acompañará copia literal del acuerdo,</u> contendrán los siguientes requisitos: a) El Juzgado o Tribunal que haya dictado el acuerdo, la fecha de éste y el asunto en que haya recaído. b) El nombre de la persona <u>a quien se dirige.</u></p> <p>c) Fecha de expedición de la cédula y firma <u>del Secretario.</u></p> <p>2. En las cédulas de citación a las partes para prestar confesión judicial, en las de testigos, peritos y asesores, se consignarán, además de los requisitos mencionados en el apartado anterior, los</p>	<p>1. Las cédulas contendrán los siguientes requisitos:</p> <p>a) El Juez, Tribunal <u>o Secretario judicial</u> que haya dictado la resolución, la fecha de ésta y el asunto en que haya recaído. b) El nombre <u>y apellidos</u> de la persona <u>a quien se haga la citación o emplazamiento.</u> c) <u>El objeto de la citación o emplazamiento.</u> d) <u>Lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento.</u> e) <u>La prevención de que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.</u> f) Fecha de expedición de la cédula y firma.</p>

	<p>siguientes:</p> <p>a) El objeto de la citación.</p> <p>b) El lugar, día y hora en que deba comparecer el citado.</p> <p>c) La prevención de que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. En esta cédula no se insertará copia de la resolución que hubiere acordado la citación.</p> <p>3. <u>Para constancia de las diligencias de citación, notificación, emplazamiento y requerimiento se unirá a los autos un duplicado de la cédula, que contendrá los siguientes extremos:</u></p> <p>a) Fecha de la diligencia.</p> <p>b) Firma de la persona a quien se haya entregado la cédula y, si no fuere el interesado, su nombre, documento de identificación, domicilio y relación con el destinatario.</p> <p>c) Firma del <u>Secretario, haciendo constar, en su caso, si el notificado no quisiera o no pudiera firmar</u></p>	<p>2. <u>La entrega de la copia de la resolución o de la cédula se documentará por medio de diligencia en la que se hará constar:</u></p> <p>a) Fecha de la diligencia.</p> <p>b) <u>Nombre de la persona destinataria.</u></p> <p>c) <u>Nombre y firma de la persona a quien se haya hecho la entrega y, si no fuere el interesado, su número del documento nacional de identidad en el caso de españoles o su número de identidad reflejado en la documentación equivalente y que acredite la identidad y nacionalidad del interesado en el caso de extranjeros, domicilio y relación con el destinatario.</u></p> <p>d) Firma del <u>funcionario</u></p>
<p>Art. 59 (Edictos): Modificación en su integridad: - Aspectos terminológicos - Medios de averiguación del domicilio: ampliación de supuestos</p>	<p>Cuando una vez intentada la comunicación utilizando los medios <u>razonables</u>, no conste el domicilio del interesado, o se ignore su paradero, se consignará por diligencia y <u>el Juzgado o Tribunal</u> mandará que se haga <u>la notificación, citación o emplazamiento</u>, por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la cédula en el «Boletín Oficial» correspondiente, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones</p>	<p>1. Cuando una vez intentado el acto de comunicación y <u>habiendo utilizado los medios oportunos para la investigación del domicilio, incluida en su caso la averiguación a través de los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas, éstos hayan resultado infructuosos</u> y no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero, se consignará por diligencia.</p> <p>2. En tal caso, <u>el Secretario judicial mandará que el acto</u></p>

	<p>se harán <u>en estrados</u> salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento</p>	<p><u>de comunicación</u> se haga por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la resolución o de la cédula en el Boletín Oficial correspondiente, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán <u>fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones</u> que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento</p>
<p><u>Art. 60 (Régimen de notificaciones):</u> Modificación en su integridad: - Aspectos terminológicos - Posibilidad de notificación electrónica con la Abogacía del Estado o los letrados de la SS - Requisitos formales de los exhortos: desaparición de la obligación de acompañamiento de la célula correspondiente</p>	<p>1. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiera mandado en la resolución. En los requerimientos se admitirá la respuesta que diera el requerido, consignándolo sucintamente en la diligencia.</p> <p>2. Cuando <u>estas diligencias</u> deban entenderse con una persona jurídica se practicarán, en su caso, en las Delegaciones, sucursales, representaciones o agencias establecidas en la población donde radique el Juzgado o Tribunal que conozca del asunto aunque carezcan de poder para comparecer en juicio las personas que estén al frente de las mismas.</p> <p>3. Los actos de comunicación con el Abogado del Estado, así como con los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, se practicarán en su despacho oficial. Estas diligencias se</p>	<p>1. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiera mandado en la resolución. En los requerimientos se admitirá la respuesta que diera el requerido, consignándolo sucintamente en la diligencia.</p> <p>2. Cuando <u>los actos de comunicación</u> deban entenderse con una persona jurídica se practicarán, en su caso, en las delegaciones, sucursales, representaciones o agencias establecidas en la población donde radique el Juzgado o Tribunal que conozca del asunto, aunque carezcan de poder para comparecer en juicio las personas que estén al frente de las mismas.</p> <p>3. Los actos de comunicación con el Abogado del Estado, así como con los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, se practicarán en su despacho oficial. <u>Cuando dispongan de los medios técnicos a que se refiere el apartado 5 del artículo 56 de esta Ley, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos</u></p>

	<p>entenderán, respecto de las Comunidades Autónomas, con quien establezca su legislación propia.</p> <p>4. Cuando se trate de comités de empresa, las diligencias antedichas se entenderán con su presidente o Secretario y, en su defecto, con cualquiera de sus miembros.</p> <p><u>5. Cuando la citación o emplazamiento haya de hacerse por medio de exhorto se acompañará la cédula correspondiente</u></p>	<p><u>medios.</u> Estos actos se entenderán, respecto de las Comunidades Autónomas, con quien establezca su legislación propia.</p> <p>4. Cuando se trate de comités de empresa, las diligencias antedichas se entenderán con su presidente o Secretario y, en su defecto, con cualquiera de sus miembros</p>
<p><u>Art. 62 (competencias en materia de exortos, mandamientos y recordatorios):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. El Secretario deberá expedir oficios, exhortos, mandamientos y <u>recordatorios interesando la práctica de actuaciones que dimanen de su ámbito de competencia.</u></p> <p><u>2. En cualquier caso, el Juez o la Sala podrá encomendar al Secretario que practique estos actos de cooperación judicial.</u></p>	<p>El Secretario deberá expedir oficios, exhortos, mandamientos y <u>cualesquiera otros actos de comunicación que se acuerden interesando la práctica de actuaciones</u></p>
<p><u>Art. 64 (Régimen de excepciones de la conciliación previa):</u> Modificación del apartado 1: - Ampliación de los supuestos a las modalidades procesales de los arts. 125 y 138 bis LPL y aspectos regulados en la LO de Violencia de Género</p>	<p>1. Se exceptúan de este requisito los procesos que exijan la reclamación previa en vía administrativa, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, los iniciados de oficio, los de impugnación de Convenios Colectivos, los de impugnación de los Estatutos de los Sindicatos o de su modificación y los de tutela de la <u>libertad sindical</u></p>	<p>1. Se exceptúan de este requisito los procesos que exijan la reclamación previa en vía administrativa, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, <u>movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, los de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 138 bis</u>, los iniciados de oficio, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación y los de tutela <u>de los derechos fundamentales.</u> <u>También se exceptúa el ejercicio de las acciones</u></p>

		<u>laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género</u>
<u>Art. 68 (Efectos de la conciliación):</u> Modificación en su integridad: - Aspectos terminológicos	Lo acordado en conciliación <u>tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes</u> sin necesidad de ratificación ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias	Lo acordado en conciliación <u>constituirá título para iniciar acciones ejecutivas</u> sin necesidad de ratificación ante el Juez o Tribunal, y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos en <u>el Libro IV de esta Ley</u>
<u>Art. 70 (Régimen de excepciones de la reclamación previa):</u> - Ampliación de los supuestos a las modalidades procesales de los arts. 125 y 138 bis LPL y aspectos regulados en la LO de Violencia de Género	Se exceptúan de este requisito los procesos relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, los iniciados de oficio, los de conflicto colectivo, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, los de tutela de la libertad sindical y las reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial, al amparo de lo prevenido en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	1. Se exceptúan de este requisito los procesos relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, <u>los de movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, los de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 138 bis</u> , los iniciados de oficio, los de conflicto colectivo, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, los de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales y las reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial, al amparo de lo prevenido en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 2. <u>También se exceptúa el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género</u>
<u>Art. 74 (principios del proceso laboral):</u> Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial	1. Los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social <u>y los Secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás</u>	1. Los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso laboral ordinario según los principios de

	<u>competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial</u> , interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso laboral ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad	inmediación, oralidad, concentración y celeridad
Modificación de la rúbrica del Capítulo I del Título I del Libro II	De los actos preparatorios y medidas precautorias	De los actos preparatorios, de la anticipación y aseguramiento de la prueba y del embargo preventivo
Modificación de la rúbrica de la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II,	Sección 2ª. Medidas precautorias	Sección 2.ª De la anticipación y aseguramiento de la prueba
Adición de una Sección 3.ª al Capítulo I del Título I del Libro II, que precede al artículo 79	Sección 3.ª Del embargo preventivo	- - - -
<u>Art. 81 (Subsanación de defectos en la admisión de la demanda):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Desaparición de la admisión provisional si no se aporta conciliación previa	1. <u>El órgano judicial</u> advertirá a la parte de los defectos, omisiones o <u>imprecisiones</u> en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días, <u>con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo.</u> 2. <u>El Juez admitirá provisionalmente</u> toda demanda aunque no se acompañe certificación del acto de conciliación previa. Deberá, no obstante, advertir al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, <u>bajo apercibimiento de que de no hacerse así se archivará la demanda sin más trámite</u>	1. <u>El Secretario judicial</u> advertirá a la parte de los defectos u omisiones de <u>carácter formal</u> en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días. 2. <u>Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación previa, el Secretario judicial</u> advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación. 3. <u>Realizada la subsanación, el Secretario judicial admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisión</u>
<u>Artículo 82 (citación para juicio):</u> Modificación en su integridad	1. <u>Si la demanda fuese admitida, el Juez o Tribunal señalará,</u> dentro de los diez días siguientes al de su	1. <u>Admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 80.1 en sus</u>

<p>- Competencias del Secretario/a judicial</p> <p>- CONCILIACIÓN ANTE SECRETARIO/A JUDICIAL</p> <p>- Ampliación del plazo mínimo entre citación y juicio para todo tipo de empresas</p> <p>- Requisitos formales</p> <p>- Ampliación de plazos para los letrados de la SS y los de la CCAA</p>	<p>presentación, el día y la hora en que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, debiendo mediar, <u>en todo caso</u>, un mínimo de <u>cuatro días</u> entre la citación y la efectiva celebración de dichos actos.</p> <p>2. La celebración de los actos de conciliación y juicio tendrá lugar en única convocatoria, debiendo hacerse a este efecto la citación en forma, con entrega a los demandados, a los interesados y, en su caso, al Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y demás documentos. En las cédulas de citación se hará constar que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse.</p> <p>3. Deberá señalarse un plazo mayor al establecido en el apartado 1 de este artículo:</p> <p>a) <u>Cuando la citación se practique con persona jurídica, pública o privada, o con un grupo sin personalidad, en cuyo caso deberá efectuarse con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de los actos de conciliación y juicio.</u></p> <p>b) Cuando la representación y defensa</p>	<p><u>apartados c) y d), el Secretario judicial señalará</u>, dentro de los diez días siguientes al de su presentación, el día y la hora en que hayan de tener lugar <u>sucesivamente</u> los actos de conciliación y juicio, debiendo mediar un mínimo de <u>quince días</u> entre la citación y la efectiva celebración de dichos actos. <u>En el señalamiento de las vistas y juicios el Secretario judicial atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.</u></p> <p>2. La celebración de los actos de conciliación y juicio, <u>el primero ante el Secretario judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado</u>, tendrá lugar en única pero sucesiva convocatoria, debiendo hacerse a este efecto la citación en forma, con entrega a los demandados, a los interesados y, en su caso, al Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y demás documentos. En las cédulas de citación se hará constar que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse.</p> <p>3. Cuando la representación y defensa en juicio sea atribuida al Abogado del Estado, se le concederá un plazo de veintidós días para la consulta a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. <u>Cuando la representación y defensa en juicio sea atribuida al Letrado de la Administración de la Seguridad Social, se le concederá igualmente un plazo de veintidós días para la consulta a la Dirección del</u></p>
---	--	---

	<p>en juicio sea atribuida al Abogado del Estado, en cuyo caso se le concederá un plazo de veintidós días para la consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. El señalamiento del juicio se hará de modo que tenga lugar en fecha posterior al indicado plazo</p>	<p><u>Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Este mismo plazo se entenderá, respecto de las Comunidades Autónomas, para consulta al organismo que establezca su legislación propia.</u> El señalamiento del juicio se hará de modo que tenga lugar en fecha posterior al indicado plazo</p>
<p><u>Art. 83 (Suspensiones):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. Sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el órgano judicial, podrán suspenderse por una sola vez los actos de conciliación y juicio, señalándose nuevamente dentro de los diez días siguientes a la fecha de la suspensión. Excepcionalmente y por circunstancias graves adecuadamente probadas, podrá acordarse una segunda suspensión.</p> <p>2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda.</p> <p>3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía</p>	<p>1. Sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados <u>ante el Secretario judicial</u>, podrá éste suspender por una sola vez los actos de conciliación y juicio, señalándose nuevamente dentro de los diez días siguientes a la fecha de la suspensión. Excepcionalmente y por circunstancias graves adecuadamente probadas, podrá acordarse una segunda suspensión.</p> <p>2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión <u>del acto de conciliación o del juicio, el Secretario judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo</u>, le tendrán por desistido de su demanda.</p> <p>3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de <u>conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía</u></p>
<p><u>Art. 84 (Conciliación judicial):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Cómputo del plazo de impugnación para terceros afectados</p>	<p>1. <u>El órgano judicial, constituido en audiencia pública, intentará la conciliación, advirtiendo a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles, sin prejuzgar el contenido de la eventual sentencia. Si el órgano judicial estimare que lo convenido es</u></p>	<p>1. <u>El Secretario judicial intentará la conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y advertirá a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las</u></p>

	<p><u>constitutivo de lesión grave para alguna de las partes, de fraude de ley o de abuso de derecho, no aprobará el acuerdo.</u></p> <p>2. <u>Se podrá aprobar la avenencia en cualquier momento antes de dictar sentencia.</u></p> <p>3. Del acto de conciliación se extenderá la correspondiente acta.</p> <p>4. El acuerdo se llevará a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.</p> <p>5. La acción para impugnar la validez de la avenencia se ejercitará ante el mismo Juzgado o Tribunal, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los quince días de la fecha de su celebración</p>	<p><u>actuaciones.</u></p> <p>2. <u>Si el Secretario judicial estimare que lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes, de fraude de ley o de abuso de derecho, no aprobará en el decreto el acuerdo, advirtiéndolo a las partes que deben comparecer a presencia judicial para la celebración del acto del juicio.</u></p> <p>3. <u>En caso de no haber avenencia ante el Secretario judicial y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo que, en su caso, alcanzasen las partes corresponderá al Juez o Tribunal y sólo cabrá nueva intervención del Secretario judicial aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa.</u></p> <p>4. Del acto de conciliación se extenderá la correspondiente acta.</p> <p>5. El acuerdo se llevará a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.</p> <p>6. La acción para impugnar la validez de la avenencia se ejercitará ante el mismo Juzgado o Tribunal <u>al que hubiera correspondido la demanda</u>, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los quince días de la fecha de su celebración. <u>Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que conocieran el acuerdo</u></p>
<p><u>Art. 85 (Desarrollo de la vista oral):</u> <u>Modificación del apartado 1 y adición de un nuevo apartado 5:</u> - Competencias del Secretario judicial - Fijación en la vista oral de los hechos conformes y</p>	<p>1. Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio, dando cuenta <u>el Secretario</u> de lo actuado. Acto seguido, el demandante ratificará o ampliará su demanda aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial</p>	<p>1. Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se dará cuenta de lo actuado. A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial. (...) 5. Si no se suscitasen</p>

disconformes		<u>cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes o sus defensores con el Tribunal fijarán los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes</u>
Art. 86 (Prejudicialidad): Modificación de los apartados 2 y 3: - Intervención judicial decisoria en relación con supuestos de alegada falsedad documental	<p>2. En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, continuará el acto de juicio, hasta el final, y con suspensión de las actuaciones posteriores, el órgano judicial concederá un plazo de ocho días al interesado, para que aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensión durará hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal, hecho que deberá ser puesto en conocimiento del Juez o Tribunal por cualquiera de las partes.</p> <p>3. Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o Sala de lo Social la vía <u>del recurso de revisión</u> regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil</p>	<p>2. En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, continuará el acto de juicio hasta el final, <u>y en el caso de que el Juez o Tribunal considere que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto</u>, acordará la suspensión de las actuaciones posteriores y concederá un plazo de ocho días al interesado para que aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensión durará hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal, hecho que deberá ser puesto en conocimiento del Juez o Tribunal por cualquiera de las partes.</p> <p>3. Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o Sala de lo Social la vía de la <u>revisión</u> regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil</p>
Art. 88 (sentencia): Modificación en su integridad: - Adecuación formal a la LEC: diligencia finales por las de	<p>1. Terminado el juicio, y dentro del plazo para dictar sentencia, el Juez o Tribunal podrá acordar la práctica de cuantas pruebas estime necesarias,</p>	<p>1. Terminado el juicio, y dentro del plazo para dictar sentencia, el Juez o Tribunal podrá acordar la práctica de cuantas pruebas estime necesarias, <u>como diligencias</u></p>

<p>mejor proveer y de la prueba de confesión en juicio por el interrogatorio de parte</p>	<p><u>para mejor proveer</u>, con intervención de las partes. En la misma providencia se fijará el plazo dentro del que haya de practicarse la prueba, durante el cual se pondrá de manifiesto a las partes el resultado de las diligencias a fin de que las mismas puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente acerca de su alcance o importancia. Transcurrido ese plazo sin haberse podido llevar a efecto, el órgano judicial dictará un nuevo proveído, fijando otro plazo para la ejecución del acuerdo, librando las comunicaciones oportunas. Si dentro de éste tampoco se hubiera podido practicar la prueba, el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, acordará que los autos queden definitivamente conclusos para sentencia.</p> <p>2. Si la diligencia consiste en la <u>confesión judicial</u> o en pedir algún documento a una parte y ésta no comparece o no lo presenta sin causa justificada en el plazo que se haya fijado, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada</p>	<p><u> finales</u>, con intervención de las partes. En la misma providencia se fijará el plazo dentro del que haya de practicarse la prueba, durante el cual se pondrá de manifiesto a las partes el resultado de las diligencias a fin de que las mismas puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente acerca de su alcance o importancia. Transcurrido ese plazo sin haberse podido llevar a efecto, el órgano judicial dictará un nuevo proveído, fijando otro plazo para la ejecución del acuerdo, librando las comunicaciones oportunas. Si dentro de éste tampoco se hubiera podido practicar la prueba, el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, acordará que los autos queden definitivamente conclusos para sentencia.</p> <p>2. Si la diligencia consiste en el <u>interrogatorio de parte</u> o en pedir algún documento a una parte y ésta no comparece o no lo presenta sin causa justificada en el plazo que se haya fijado, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada</p>
<p>Art. 89 (Acta del juicio): Modificación en su integridad: - Regulación del registro videográfico del juicio - Requisitos formales - Ausencia del juicio del Secretario/a: régimen de excepciones - Elaboración de acta electrónica: competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. Durante la celebración del juicio se irá extendiendo la correspondiente acta, en la que se hará constar: a) Lugar, fecha, Juez o Tribunal que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores que les asisten, y breve referencia al acto de conciliación. b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba</p>	<p>1. <u>El desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.</u> 2. <u>Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el Secretario</u></p>

	<p>propuestos por ellas, declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la negación y protesta, en su caso.</p> <p>c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:</p> <p>1º Resumen suficiente de las de confesión y testifical.</p> <p>2º Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la citada relación.</p> <p>3º Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.</p> <p>4º Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del Juez o Tribunal en torno a las recusaciones propuestas de los peritos.</p> <p>5º Resumen de las declaraciones de los asesores, en el caso de que el dictamen de éstos no haya sido elaborado por escrito e incorporado a los autos.</p> <p>d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, deberán expresarse en el acta las cantidades que fueran objeto de ella.</p> <p>e) Declaración hecha por el Juez o Tribunal de conclusión de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.</p> <p>2. El Juez o Tribunal resolverá, sin ulterior recurso, cualquier observación que se hiciera sobre el contenido del acta, firmándola seguidamente en unión de las partes o de</p>	<p><u>judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen; supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.</u></p> <p>3. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial deberá consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: lugar y fecha de celebración, Juez o Tribunal que preside el acto, peticiones y propuestas de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaración de su pertinencia o impertinencia, resoluciones que adopte el Juez o Tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.</p> <p>4. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el</p>
--	--	---

	<p>sus representantes o defensores y de los Peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firmándola, por último el Secretario, que dará fe.</p> <p>3. El acta del juicio podrá ser extendida también a través de medios mecánicos de reproducción del mismo. En tal caso, se exigirán los mismos requisitos expresados en el número anterior.</p> <p>4. Del acta del juicio deberá entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren</p>	<p>Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, en la que se hará constar:</p> <p>a) Lugar, fecha, Juez o Tribunal que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores que les asisten.</p> <p>b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la negación y protesta, en su caso.</p> <p>c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:</p> <p>1.º) Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y de testigos.</p> <p>2.º) Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la citada relación.</p> <p>3.º) Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.</p> <p>4.º) Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del Juez o Tribunal en torno a las recusaciones propuestas de los peritos.</p> <p>5.º) Resumen de las declaraciones de los asesores, en el caso de que el dictamen de éstos no haya sido elaborado por escrito e incorporado a los autos.</p> <p>d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, deberán expresarse en el acta las cantidades que fueran objeto de ella.</p> <p>e) Declaración hecha por el Juez o Tribunal de conclusión de los autos, mandando</p>
--	--	---

		<p>traerlos a la vista para sentencia.</p> <p>5. <u>El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artículo se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. El Secretario judicial resolverá, sin ulterior recurso, cualquier observación que se hiciera sobre el contenido del acta.</u> El acta será firmada por el Juez o Tribunal en unión de las partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firmándola por último el Secretario.</p> <p>6. Del acta del juicio deberá entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren</p>
<p><u>Art. 90 (medios de prueba en general):</u> Modificación del apartado 2: - Ampliación del plazo mínimo par la práctica de prueba</p>	<p>2. Podrán, asimismo, solicitar, al menos con <u>tres días de antelación</u> a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento</p>	<p>2. Podrán asimismo solicitar, al menos con <u>diez días de antelación</u> a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento</p>
<p><u>Art. 91 (Confesión/interrogatorio de parte):</u> Modificación en su integridad: - Adecuación formal a la LEC - Efectos de la obstaculización de la práctica de dicha prueba</p>	<p>1. Las <u>posiciones para la prueba de confesión</u> se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos. 2. Si el llamado a <u>confesar</u> no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, <u>podrá ser tenido por confeso en la sentencia.</u></p>	<p>1. Las <u>preguntas para la prueba de interrogatorio de parte</u> se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos. 2. Si el llamado <u>al interrogatorio</u> no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, <u>podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el</u></p>

	<p>3. La <u>confesión</u> de las personas jurídicas privadas se practicará por quien legalmente las represente y tenga facultades para <u>absolver posiciones</u>.</p> <p>4. En caso de que <u>la confesión</u> no se refiera a hechos personales, se admitirá la <u>absolución de posiciones</u> por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración</p>	<p><u>interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.</u></p> <p>3. <u>El interrogatorio</u> de las personas jurídicas privadas se practicará por quien legalmente las represente y tenga facultades para <u>responder a tal interrogatorio</u>.</p> <p>4. En caso de que <u>el interrogatorio</u> no se refiera a hechos personales, se admitirá su <u>respuesta</u> por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración</p>
<p>Art. 92 (prueba testifical): Modificación del apartado 1: - Adecuación terminológica a la LEC</p>	<p>1. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba <u>testifical</u>. Cuando el número de testigos fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente</p>	<p>1. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba de <u>interrogatorio de testigos</u>. Cuando el número de testigos fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente</p>
<p>Art. 93.1 (prueba pericial): Modificación del apartado 1: - Adecuación a la LEC</p>	<p>1. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación de Peritos</p>	<p>1. La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando los peritos su informe y ratificándolo</p>
<p>Art. 95 (dictámenes para mejor proveer/ diligencias finales): Modificación de los apartados 1 y 3: - Adecuación terminológica a la LEC - Ampliación de posibles dictámenes públicos a otros supuestos de discriminación, además del sexo</p>	<p>1. Podrá el Juez o Tribunal, si lo estima procedente, oír el dictamen de una o varias personas expertas en la cuestión objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, terminado éste, para <u>mejor proveer</u>. (...)</p> <p>3. Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de sexo, el Juez o Tribunal podrá recabar el dictamen de los Organismos públicos competentes</p>	<p>1. Podrá el Juez o Tribunal, si lo estima procedente, oír el dictamen de una o varias personas expertas en la cuestión objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, terminado éste, <u>como diligencia final</u>. (...)</p> <p>3. Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de sexo, <u>origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual</u>, el Juez o Tribunal podrá recabar el</p>

		dictamen de los organismos públicos competentes
Art. 97 (Sentencia): Modificación del apartado 3: - Sustitución de pesetas por euros en las multas por temeridad	3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con notoria temeridad una sanción pecuniaria cuya cuantía máxima, en la instancia, no excederá de <u>cien mil pesetas</u> . En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario deberá abonar también los honorarios de los abogados	3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con notoria temeridad una sanción pecuniaria cuya cuantía máxima, en la instancia, no excederá de <u>seiscientos euros</u> . En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados
Art. 100 (Notificación de sentencias): Modificación en su integridad: - Adecuación terminológica	<u>Al notificarse la sentencia a las partes</u> , se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarios y forma de efectuarlos	<u>En el texto de la sentencia se indicará</u> si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarios y forma de efectuarlos
Art. 101 (Salario correspondiente al día del juicio): Modificación en su integridad: - Referencia a la conciliación ante el Secretario/a judicial	Si la sentencia fuese condenatoria para el empresario, éste vendrá obligado a abonar al demandante que personalmente hubiese comparecido, el importe de los salarios correspondientes a los días en que se hubiesen celebrado los actos de conciliación y juicio ante el Juzgado o Tribunal y en su caso, la conciliación previa ante el órgano correspondiente	Si la sentencia fuese condenatoria para el empresario, este vendrá obligado a abonar al demandante que personalmente hubiese comparecido el importe de los salarios correspondientes a los días en que se hubiesen celebrado los actos de conciliación y juicio ante el <u>Secretario judicial</u> , Juez o Tribunal y, en su caso, la conciliación previa ante el órgano correspondiente
Art. 110 (despido improcedente): Modificación del apartado 3: - Ejercicio de la opción ante la oficina judicial y no ante Secretario/a	3. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante <u>la Secretaría del Juzgado de lo Social</u> , dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia	3. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante <u>la Oficina del Juzgado de lo Social</u> , dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia
Art. 118 (aspectos	1. Admitida la demanda, se	1. Admitida la demanda, el

<p><u>procesales de la modalidad procesal de reclamación al Estado de salarios de tramitación):</u> Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>señalará día para el juicio en los cinco siguientes, citando al efecto al trabajador, al empresario y al Abogado del Estado, sin que se suspenda el procedimiento para que éste pueda elevar consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado</p>	<p><u>Secretario judicial</u> señalará día para el juicio en los cinco siguientes, citando al efecto al trabajador, al empresario y al Abogado del Estado, sin que se suspenda el procedimiento para que éste pueda elevar consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado</p>
<p><u>Art. 133 (Nulidad del despido objetivo):</u> Modificación del apartado 2: - Reestructuración con integración de todos los supuestos</p>	<p>2. La decisión extintiva será nula cuando: a) No se hubieren cumplido las formalidades legales de la comunicación escrita, con mención de causa. b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador la indemnización correspondiente, salvo en aquellos supuestos en los que tal requisito no viniera legalmente exigido. c) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. d) Se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. <u>Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:</u> a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 de artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el</p>	<p>2. La decisión extintiva será nula cuando: a) No se hubieren cumplido las formalidades legales de la comunicación escrita, con mención de causa. b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador la indemnización correspondiente, salvo en aquellos supuestos en los que tal requisito no viniera legalmente exigido. c) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. d) Se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. e) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,</p>

	<p>notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.</p> <p>b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra <u>a)</u>, y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.</p> <p>c) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo. Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no</p>	<p>o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.</p> <p>f) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra <u>e)</u>, y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.</p> <p>g) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.</p> <p>Lo establecido en las letras <u>e)</u>, <u>f)</u> y <u>g)</u> será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos</p>
--	---	--

	relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias señalados	no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias señalados
<u>Modificación de la rúbrica del Capítulo V del Título II del Libro II</u>	Vacaciones, materia electoral, <u>clasificaciones profesionales</u> , movilidad geográfica, modificaciones substanciales de condiciones de trabajo, <u>permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos familiares</u>	Vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y <u>derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente</u>
<u>Art. 126 (procedimiento de vacaciones):</u> Modificación íntegra: - Competencias del Secretario/a judicial	El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que no tendrá recurso, deberá ser dictada en el plazo de tres días	El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse <u>por el Secretario judicial</u> dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que no tendrá recurso, deberá ser dictada en el plazo de tres días
<u>Art. 130 (audiencia por litisconsorcio pasivo necesario en impugnación de laudos electorales):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial	Si examinada la demanda el Juez estima que puede no haber sido dirigida contra todos los afectados, citará a las partes para que comparezcan, dentro del día siguiente, a una audiencia preliminar en la que, oyendo a las partes sobre la posible situación de litisconsorcio pasivo necesario, resolverá sobre la misma en el acto	Si examinada la demanda <u>el Secretario judicial</u> estima que puede no haber sido dirigida contra todos los afectados, citará a las partes para que comparezcan ante el órgano judicial, dentro del día siguiente, a una audiencia preliminar en la que éste, oyendo a las partes sobre la posible situación de litisconsorcio pasivo necesario, resolverá sobre la misma en el acto
<u>Art. 132 (Dinámica procesal de la modalidad procesal de elecciones sindicales/ impugnación de laudos):</u> Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial	1. Este proceso se tramitará con urgencia y tendrá las siguientes especialidades: a) Al admitir la demanda, <u>el Juez recabará</u> de la oficina pública texto del laudo arbitral, así como copia del expediente administrativo relativo al proceso electoral. La documentación referida deberá ser enviada por el requerido dentro del día siguiente. b) El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la	1. Este proceso se tramitará con urgencia y tendrá las siguientes especialidades: a) Al admitir la demanda, <u>se acordará recabar</u> de la oficina pública texto del laudo arbitral, así como copia del expediente administrativo relativo al proceso electoral. La documentación referida deberá ser enviada por el requerido dentro del día siguiente. b) El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda. La sentencia, contra la que no cabe recurso,

	<p>admisión de la demanda. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habrá de dictarse en el plazo de tres días, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública.</p> <p>c) La sustanciación de este proceso no suspenderá el desarrollo del procedimiento electoral, salvo que se acuerde motivadamente por el Juez, a petición de parte, caso de concurrir causa justificativa</p>	<p>habrá de dictarse en el plazo de tres días, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública.</p> <p>c) La sustanciación de este proceso no suspenderá el desarrollo del procedimiento electoral, salvo que se acuerde motivadamente por el Juez, a petición de parte, caso de concurrir causa justificativa</p>
<p><u>Art. 135 (procedimiento aplicable a los procedimientos relativos a la denegación de inscripción de acta electoral):</u> Modificación del apartado 1: - Competencia del Secretario/a judicial</p>	<p>1. Este proceso se tramitará con urgencia. <u>Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la admisión de la demanda, el Juez</u> requerirá a la oficina pública competente el envío del expediente administrativo, que habrá de ser remitido en el plazo de dos días</p>	<p>1. Este proceso se tramitará con urgencia. En la resolución por la que se admita la demanda se requerirá a la oficina pública competente el envío del expediente administrativo, que habrá de ser remitido en el plazo de dos días</p>
<p><u>Art. 137 (demanda en materia de clasificación profesional):</u> Modificación del apartado 2: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>2. En la <u>providencia</u> en que se tenga por presentada la demanda, <u>el Juez ordenará</u> recabar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre los hechos invocados y circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor y deberá emitirse en el plazo de quince días</p>	<p>2. En la <u>resolución</u> por la que se admita la demanda, se recabará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre los hechos invocados y circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor y deberá emitirse en el plazo de quince días</p>
<p><u>Art. 138 (modalidad procesal de impugnación de los arts. 40 y 41 ET):</u> Modificación del apartado 4: - Posibilidad de recurso en el caso de afectación general - Reducción del plazo para dictar la sentencia</p>	<p>4. El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que no tendrá recurso y será inmediatamente ejecutiva, deberá ser dictada en el plazo de <u>diez días</u></p>	<p>4. El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda.</p> <p>La sentencia, que no tendrá recurso <u>salvo en el supuesto y con los requisitos contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo</u></p>

		<u>189</u> , y que será inmediatamente ejecutiva, deberá ser dictada en el plazo de <u>cinco días</u>
Modificación de la rúbrica de la Sección 5.ª del Capítulo V del Título II del Libro II	Sección 5ª. Permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos familiares	Sección 5.ª Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente
<u>Art. 138 bis (modalidad procesal de conciliación de la vida laboral y familiar):</u> Modificación en su integridad: - Adaptación terminológica	El procedimiento para <u>la concreción horaria y la determinación del período de disfrute en los permisos por lactancia y por reducción de jornada por motivos familiares</u> se regirán por las siguientes reglas: a) El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de que el empresario le comunique su disconformidad con la concreción horaria y el período de disfrute propuesto por aquél, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social. b) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que será firme, deberá ser dictada en el plazo de tres días	El procedimiento para <u>el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente</u> se regirá por las siguientes reglas: a) El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de que el empresario le comunique su disconformidad con la concreción horaria y el período de disfrute propuesto por aquél, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social. b) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que será firme, deberá ser dictada en el plazo de tres días
<u>Art. 139 (reclamación previa en la modalidad procesal de Seguridad Social):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Efectos de la no subsanación	En las demandas formuladas en materia de Seguridad Social contra las Entidades gestoras o servicios comunes, incluidas aquellas en las que se invoque la lesión de un derecho fundamental, se acreditará haber cumplido el trámite de la reclamación previa regulado en el artículo 71 de esta Ley. En caso de omitirse, <u>el Juez</u> dispondrá que se subsane el defecto en el plazo de cuatro días y transcurrido	En las demandas formuladas en materia de Seguridad Social contra las entidades gestoras o servicios comunes, incluidas aquellas en las que se invoque la lesión de un derecho fundamental, se acreditará haber cumplido el trámite de la reclamación previa regulado en el artículo 71 de esta Ley. En caso de omitirse, <u>el Secretario judicial</u> dispondrá que se subsane el defecto en el plazo de cuatro días. <u>Realizada la subsanación, se admitirá la</u>

	<p>éste sin hacerlo, ordenará el archivo de la demanda sin más trámite</p>	<p><u>demanda. En otro caso, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda</u></p>
<p><u>Art. 141 (Modalidad procesal de SS: AT):</u> Modificación en la totalidad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la Entidad Gestora o, en su caso, de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, <u>el Juez</u>, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no lo presentara, vistas las circunstancias que concurran y oyendo a la Tesorería General de la Seguridad Social, acordará el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio.</p> <p>2. En los procesos por accidentes de trabajo, <u>el Juez</u>, antes de la celebración del juicio, deberá interesar de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no figurase ya en los autos, informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente, trabajo que realizaba el accidentado, salario que percibía y base de cotización, que será expedido necesariamente en el plazo máximo de diez días</p>	<p>1. Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, <u>el Secretario judicial</u>, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no lo presentara, vistas las circunstancias que concurran y oyendo a la Tesorería General de la Seguridad Social, <u>el Juez</u> acordará el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio.</p> <p>2. En los procesos por accidentes de trabajo, <u>en la resolución por la que se admita la demanda a trámite se deberá interesar</u> de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no figurase ya en los autos, informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente, trabajo que realizaba el accidentado, salario que percibía y base de cotización, que será expedido necesariamente en el plazo máximo de diez días. <u>Antes de la celebración del juicio, el Secretario judicial deberá reiterar la presentación de dicho informe si éste no hubiere tenido todavía entrada en los autos</u></p>
<p><u>Art. 142 (admisión demanda en materia</u></p>	<p>1. Al admitir a trámite la demanda <u>el Juez</u> reclamará</p>	<p>1. Al admitirse a trámite la demanda <u>se reclamará</u> a la</p>

<p>de SS): Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>de oficio a la Entidad Gestora o servicio común la remisión del expediente original o copia del mismo o de las actuaciones y, en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en plazo de diez días. Si se remitiera el expediente original, será devuelto a la Entidad de procedencia, firme que sea la sentencia, dejándose en los autos nota de ello</p>	<p>entidad gestora o servicio común la remisión del expediente original o copia del mismo o de las actuaciones y, en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en plazo de diez días. Si se remitiera el expediente original, el <u>Secretario judicial</u> lo devolverá a la entidad de procedencia, firme que sea la sentencia, dejando en los autos nota de ello</p>
<p><u>Art. 144 (Efectos de la no remisión del expediente administrativo en SS):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>La falta de remisión del expediente se notificará al Director de la Entidad gestora o del servicio común, a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad disciplinaria al funcionario</p>	<p>La falta de remisión del expediente se notificará <u>por el Secretario judicial</u> al director de la entidad gestora o del servicio común, a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad disciplinaria al funcionario</p>
<p><u>Art. 145 bis (procedimiento de oficio por fraude empresarial en materia de desempleo):</u> Modificación de los apartados 2 y 3: - Competencias del Secretario/a judicial - Efectos de la subsanación de la demanda</p>	<p>2. <u>El Juez examinará la demanda antes de decretar su admisión</u>, al efecto de comprobar si reúne todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la Entidad Gestora, en su caso, los defectos u omisiones de que adolezca, a fin de que sean subsanados en el término de diez días.</p> <p>3. Admitida a trámite la demanda, continuará el procedimiento con arreglo a las normas generales de la presente Ley, con las especialidades siguientes: a) El empresario y el trabajador que hubieran celebrado los reiterados contratos temporales tendrán la consideración de parte en el proceso, si bien no podrán solicitar la suspensión del proceso ni el trabajador desistir. Aun sin su asistencia, el procedimiento se seguirá</p>	<p>2. El <u>Secretario judicial</u> examinará la demanda, al efecto de comprobar si reúne todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la entidad gestora, en su caso, los defectos u omisiones de carácter formal de que adolezca, a fin de que sean subsanados en el término de diez días. <u>Realizada la subsanación, se admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.</u></p> <p>3. Admitida a trámite la demanda, continuará el procedimiento con arreglo a las normas generales de la presente Ley, con las especialidades siguientes: a) El empresario y el trabajador que hubieran celebrado los reiterados contratos temporales tendrán la consideración de parte en el proceso, si bien no podrán solicitar la suspensión del proceso ni el trabajador desistir. Aun sin su asistencia,</p>

	<p>de oficio.</p> <p>b) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la comunicación base del proceso harán fe, salvo prueba en contrario, incumbiendo la carga de la prueba al empresario demandado</p>	<p>el procedimiento se seguirá de oficio.</p> <p>b) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la comunicación base del proceso harán fe, salvo prueba en contrario, incumbiendo la carga de la prueba al empresario demandado</p>
<p>Art. 147 (inicio de procedimiento de oficio): Modificación del apartado 2:</p> <p>- Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>2. Siempre que las expresadas demandas afecten a más de diez trabajadores, <u>el órgano judicial</u> les requerirá para que designen representantes en la forma prevista en el artículo 19 de esta Ley</p>	<p>2. Siempre que las expresadas demandas afecten a más de diez trabajadores, <u>el Secretario judicial</u> les requerirá para que designen representantes en la forma prevista en el artículo 19 de esta ley</p>
<p>Art. 148 (Normas procesales del procedimiento de oficio): Modificación íntegra:</p> <p>- Competencias del Secretario/a judicial</p> <p>- Efectos de la subsanación y la no subsanación</p>	<p>1. <u>El Juez</u> examinará la demanda antes de decretar su admisión, al efecto de comprobar si reúne todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la autoridad laboral, en su caso, los defectos u omisiones de que adolezca a fin de que sean subsanados en el término de diez días.</p> <p>2. Admitida a trámite la demanda, continuará el procedimiento con arreglo a las normas generales del presente texto, con las especialidades siguientes:</p> <p>a) El procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asistencia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la consideración de parte, si bien no podrán desistir ni solicitar la suspensión del proceso.</p> <p>b) La conciliación tan sólo podrá autorizarse <u>por el órgano judicial</u> cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios causados por</p>	<p>1. <u>El Secretario judicial</u> examinará la demanda, al efecto de comprobar si reúne todos los requisitos formales exigidos, advirtiendo a la autoridad laboral, en su caso, los defectos u omisiones de que adolezca a fin de que sean subsanados en el término de diez días. <u>Realizada la subsanación, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.</u></p> <p>2. Admitida a trámite la demanda, continuará el procedimiento con arreglo a las normas generales del presente texto, con las especialidades siguientes:</p> <p>a) El procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asistencia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la consideración de parte, si bien no podrán desistir ni solicitar la suspensión del proceso.</p> <p>b) La conciliación tan sólo podrá autorizarse <u>por el Secretario judicial</u> cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios causados por la</p>

	<p>la infracción.</p> <p>c) Los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores al acta de infracción tan sólo tendrán eficacia en el supuesto de que hayan sido celebrados a presencia del Inspector de Trabajo que levantó el acta, o de la autoridad laboral.</p> <p>d) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la resolución o comunicación base del proceso harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada.</p> <p>e) Las sentencias que se dicten en estos procesos habrán de ejecutarse siempre de oficio</p>	<p>infracción.</p> <p>c) Los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores al acta de infracción tan sólo tendrán eficacia en el supuesto de que hayan sido celebrados a presencia del Inspector de trabajo que levantó el acta, o de la autoridad laboral.</p> <p>d) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la resolución o comunicación base del proceso harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada.</p> <p>e) Las sentencias que se dicten en estos procesos habrán de ejecutarse siempre de oficio</p>
<p><u>Art. 156 (Conflicto colectivo iniciado a instancias de la autoridad laboral):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>El proceso podrá iniciarse también mediante comunicación de la autoridad laboral, a instancia de las representaciones referidas en el artículo 152. En dicha comunicación se contendrán idénticos requisitos a los exigidos para la demanda en el artículo anterior. <u>El Juez o la Sala, en su caso,</u> advertirá a la autoridad laboral de los defectos, omisiones <u>o imprecisiones</u> que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsane en el plazo de diez días</p>	<p>El proceso podrá iniciarse también mediante comunicación de la autoridad laboral, a instancia de las representaciones referidas en el artículo 152. En dicha comunicación se contendrán idénticos requisitos a los exigidos para la demanda en el artículo anterior. <u>El Secretario judicial</u> advertirá a la autoridad laboral de los defectos u omisiones de carácter formal que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsanen en el plazo de diez días</p>
<p><u>Art. 157 (principio de urgencia y preferencia de los conflictos colectivos):</u> Modificación en su integridad ¿? –No se aprecian cambios-</p>	<p>Este proceso tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales</p>	<p>Este proceso tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales</p>
<p><u>Art. 158 (Dinámica</u></p>	<p>1. Una vez recibida la</p>	<p>1. Una vez admitida la</p>

<p><u>procesal de los procedimientos de conflictos colectivos):</u> Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>demanda o la comunicación de la autoridad laboral, <u>el Juez o la Sala</u> citará a las partes para la celebración del acto del juicio, que deberá tener lugar, en única convocatoria, dentro de los cinco días siguientes al de la admisión a trámite de la demanda</p>	<p>demanda o la comunicación de la autoridad laboral, <u>el Secretario judicial</u> citará a las partes para la celebración del acto del juicio, que deberá tener lugar, en única convocatoria, dentro de los cinco días siguientes al de la admisión a trámite de la demanda</p>
<p><u>Art. 159 (irrecurribilidad de los trámites intermedios en materia de conflictos colectivos):</u> Modificación en su integridad: - Adaptación terminológica</p>	<p>Contra las <u>providencias y autos</u> que se dicten en su tramitación no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia</p>	<p>Contra <u>las resoluciones</u> que se dicten en su tramitación no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia</p>
<p><u>Art. 160 (Archivo de actuaciones de conflictos colectivos):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>De recibirse en el Juzgado o Tribunal comunicación de las partes de haber quedado solventado el conflicto, se procederá sin más al archivo de las actuaciones cualquiera que sea el estado de su tramitación anterior a la sentencia</p>	<p>De recibirse en el Juzgado o Tribunal comunicación de las partes de haber quedado solventado el conflicto, se procederá <u>por el Secretario judicial</u> sin más al archivo de las actuaciones, cualquiera que sea el estado de su tramitación anterior a la sentencia</p>
<p><u>Art. 162 (requisitos de la comunicación de oficio en materia de impugnación de convenios):</u> Modificación del apartado 3: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>3. <u>El Secretario judicial</u> advertirá a la autoridad laboral de los defectos u omisiones de carácter formal que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsanen en el plazo de diez días</p>	<p>3. <u>El Juez o la Sala</u> advertirá a la autoridad laboral de los defectos, omisiones o imprecisiones que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsane en el plazo de diez días</p>
<p><u>Art. 164 (Procedimiento de la impugnación de conflictos colectivos):</u> Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. <u>Recibida la</u> comunicación de oficio o la demanda, <u>el Juez o la Sala</u> señalará para juicio, con citación del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las partes a las que se refiere el apartado 4 del artículo 162 de esta Ley. En su comparecencia a juicio, dichas partes alegarán en primer término la postura procesal que adopten, de conformidad u oposición, respecto de la pretensión interpuesta</p>	<p>1. <u>Admitida a trámite la</u> comunicación de oficio o la demanda, <u>el Secretario judicial</u> señalará para juicio, con citación del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las partes a las que se refiere el apartado 4 del artículo 162 de esta Ley. En su comparecencia a juicio, dichas partes alegarán en primer término la postura procesal que adopten, de conformidad u oposición, respecto de la pretensión interpuesta</p>

<p><u>Art. 168 (Modalidad procesal de impugnación de estatutos sindicales: requerimiento de expediente):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>Dentro del siguiente día hábil a la admisión de la demanda, <u>el Juez o Sala</u> requerirá de la oficina pública competente el envío del expediente, que habrá de ser remitido en el plazo de cinco días</p>	<p>Dentro del siguiente día hábil a la admisión de la demanda, <u>el Secretario judicial</u> requerirá de la oficina pública competente el envío del expediente, que habrá de ser remitido en el plazo de cinco días</p>
<p><u>Art. 172 (impugnación de estatutos: remisión del expediente):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>Admitida la demanda, el <u>Secretario judicial</u> requerirá a la oficina pública correspondiente la remisión de la copia autorizada del expediente, debiendo dicha oficina enviarla en el plazo de cinco días</p>	<p>Admitida la demanda, el <u>órgano judicial</u> requerirá a la oficina pública correspondiente la remisión de la copia autorizada del expediente debiendo dicha oficina enviarla en el plazo de cinco días</p>
<p>Modificación de la rúbrica del Capítulo XI del Título II del Libro II</p>	<p>De la tutela de los derechos de libertad sindical</p>	<p>De la tutela de los derechos fundamentales</p>
<p><u>Art. 178 (procedimiento de tutela de DF):</u> Modificación del apartado 2: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>2. Dentro del día siguiente a la admisión de la demanda, <u>el Juzgado o Tribunal</u> citará a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el día y hora que se señale dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, comparezcan a una audiencia preliminar, en la que sólo se admitirán alegaciones y pruebas sobre la suspensión solicitada</p>	<p>2. Dentro del día siguiente a la admisión de la demanda, el <u>Secretario judicial</u> citará a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el día y hora que se señale dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, comparezcan a una audiencia preliminar, en la que sólo se admitirán alegaciones y pruebas sobre la suspensión solicitada</p>
<p><u>Art. 179 (Desarrollo del juicio de tutela de DF):</u> Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. Admitida a trámite la demanda, <u>el Juez o Tribunal</u> citará a las partes para los actos de conciliación y juicio, que habrán de tener lugar dentro del plazo improrrogable de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. En todo caso, habrá de mediar un mínimo de dos días entre la citación y la efectiva celebración de aquellos actos</p>	<p>1. Admitida a trámite la demanda, <u>el Secretario judicial</u> citará a las partes para los actos de conciliación y juicio, que habrán de tener lugar dentro del plazo improrrogable de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. En todo caso, habrá de mediar un mínimo de dos días entre la citación y la efectiva celebración de aquellos actos</p>
<p><u>Art. 182 (conurrencia de proceso de tutela de DF con otras acciones):</u> Modificación en su</p>	<p>No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de</p>	<p>No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de</p>

<p>integridad: - Ampliación de la remisión a la modalidad procesal correspondiente: movilidad geográfica y 138 bis LPL</p>	<p>trabajo, <u>las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo</u>, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, <u>las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 138 bis</u> y las de impugnación de convenios colectivos en que se invoque lesión de la libertad sindical u otro derecho fundamental se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente</p>	<p>disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de Estatutos de los Sindicatos o de su modificación y las de impugnación de convenios colectivos en que se invoque lesión de la libertad sindical u otro derecho fundamental se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente</p>
<p>Modificación de la rúbrica del Capítulo I del Libro III</p>	<p>De los recursos contra providencias y autos</p>	<p>De los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y <u>decretos</u></p>
<p><u>Art. 184 (Recurso de reposición):</u> Modificación en su integridad: - Adaptación terminológica e inclusión de los decretos</p>	<p>1. <u>Contra las providencias y autos que dicten los Jueces de lo Social</u> podrá interponerse recurso de reposición, <u>sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada.</u> 2. <u>Contra el auto resolutorio del recurso de reposición no se dará nuevo recurso, salvo en los supuestos expresamente establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil que en su caso proceda.</u> 3. No habrá lugar al recurso de reposición contra las providencias y autos que se dicten en los procesos de conflictos colectivos y en los de impugnación de convenios colectivos</p>	<p>1. <u>Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos</u> cabrá recurso de reposición <u>ante el Secretario judicial que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la Ley prevea recurso directo de revisión.</u> 2. <u>Contra todas las providencias y autos</u> cabrá recurso de reposición <u>ante el mismo Juez o Tribunal que dictó la resolución recurrida.</u> 3. <u>La interposición del recurso de reposición no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida.</u> 4. No habrá lugar al recurso de reposición contra las providencias, autos, <u>diligencias de ordenación y decretos</u> que se dicten en los procesos de conflictos colectivos y en los de impugnación de convenios colectivos</p>
<p><u>Art. 185: Modificación en su integridad:</u> - Desaparece el</p>	<p>1. <u>Contra las providencias que no sean de mera tramitación y los autos que</u></p>	<p>1. <u>El recurso de reposición deberá interponerse en el plazo de cinco días,</u></p>

<p>recurso de súplica, en los términos previstos en la LEC - Desarrollo autónomo del recurso de reposición en el ámbito laboral - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p><u>dicten las Salas de lo Social podrá interponerse recurso de súplica ante la misma Sala, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada.</u> <u>2. Contra el auto resolutorio del recurso de súplica no se dará nuevo recurso, salvo en los supuestos expresamente establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil que en su caso proceda.</u> <u>3. No habrá lugar al recurso de súplica contra las providencias y autos que se dicten en los procesos de conflictos colectivos y en los de impugnación de convenios</u></p>	<p><u>expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente.</u> <u>2. Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el apartado anterior, se inadmitirá, mediante providencia no susceptible de recurso, la reposición interpuesta frente a providencias y autos, y mediante decreto directamente recurrible en revisión la formulada contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos.</u> <u>3. Admitido a trámite el recurso de reposición, por el Secretario judicial se concederá a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente.</u> <u>4. Transcurrido el plazo de impugnación, háyanse o no presentado escritos, el Juez o Tribunal si se tratara de reposición interpuesta frente a providencias o autos, o el Secretario judicial si hubiera sido formulada frente a diligencias de ordenación o decretos, resolverán sin más trámites mediante auto o decreto, respectivamente, en un plazo de cinco días.</u> <u>5. Contra el auto resolutorio del recurso de reposición no se dará nuevo recurso, salvo en los supuestos expresamente establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil que en su caso proceda</u></p>
<p>Art. 186: Modificación en su integridad: - Se sustituye la remisión a la LEC hasta ahora contenida por la regulación del revisión de reposición y los</p>	<p>Los recursos de reposición y de súplica se sustanciarán de conformidad con lo prevenido para el recurso de reposición en la Ley de Enjuiciamiento Civil</p>	<p>1. Contra el decreto resolutorio de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. Cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al</p>

<p>efectos de los decretos de los Secretarios/as judiciales</p>		<p>procedimiento o impidan su continuación. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.</p> <p>2. El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso, concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo si lo estiman conveniente. Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Juez o Tribunal lo inadmitirá mediante providencia. Transcurrido el plazo para impugnación, háyanse presentado o no escritos, el Juez o Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto, en un plazo de cinco días. Contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno.</p> <p>3. Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión únicamente cabrá recurso de suplicación o de casación cuando así expresamente se prevea en esta Ley</p>
<p>Art. 187 (recurso de queja): Modificación en su integridad: - Adaptación a la LEC</p>	<p>Los recursos de queja que conozcan las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, según los casos, se tramitarán</p>	<p>Los recursos de queja de que conozcan las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, según los casos, se tramitarán siempre de</p>

	siempre de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para recurrir en queja <u>ante el Tribunal Supremo</u>	conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para recurrir en queja
<p>Art. 189 (recurrir en casación): Modificación del número 1 en su párrafo primero y en la letra c) y el apartado 2: - Adaptación terminológica de la irrecurrir de la modalidad del 138 bis LPL - Adaptación a euros - Eliminación de la palabra “permanente” en relación a la invalidez y la recurrir del grado (¿?) - Inclusión de la impugnación de los recursos de revisión contra los decretos del Secretario/a judicial</p>	<p>1. Las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo las que recaigan en los procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones, <u>concreción horaria y determinación del período de disfrute en permisos por lactancia y reducción de la jornada por motivos familiares</u>, en los de materia electoral, en los de clasificación profesional, en los de impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente, y las dictadas en reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 300.000 pesetas. Procederá en todo caso la suplicación: (...) c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las de desempleo, así como sobre el grado de incapacidad <u>permanente</u> aplicable. (...)</p> <p>2. Los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que en ejecución de sentencia dicten los Juzgados de lo Social siempre que la sentencia ejecutoria hubiere sido recurrible en suplicación, cuando resuelvan puntos</p>	<p>1. Las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo las que recaigan en los procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones, concreción horaria y <u>determinación del período de disfrute en permisos por los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 138 bis</u>, en los de materia electoral, en los de clasificación profesional, en los de impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente, y las dictadas en reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de mil ochocientos euros. Procederá en todo caso la suplicación: (...)</p> <p>c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las de desempleo, así como sobre el grado de invalidez aplicable</p> <p>(...)</p> <p>2. Los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que en ejecución de sentencia dicten los Juzgados de lo Social y <u>el recurso de revisión interpuesto contra los decretos del Secretario judicial</u> siempre que la sentencia ejecutoria hubiere sido</p>

	sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado	recurrible en suplicación, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado
<u>Art. 192 (tramitación del recurso de suplicación):</u> Modificación de los apartados 2, 3 y 4: - Referencia a la Oficina judicial - Competencias del Secretario/a judicial	<p>2. En las sentencias dictadas en materia de Seguridad Social que reconozcan al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestación será necesario que haya ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente el capital importe de la prestación declarada en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciación del recurso, <u>presentando en el Juzgado</u> el oportuno resguardo que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del Secretario.</p> <p>3. En el supuesto referido en el número anterior y una vez anunciado el recurso, <u>el Juez dictará providencia</u> ordenando que se dé traslado a la Entidad gestora o Servicio común para que se fije el capital importe de la pensión a percibir. Recibida esta comunicación, la notificará al recurrente para que en el plazo de cinco días efectúe la consignación requerida en la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se pondrá fin al trámite del recurso.</p> <p>4. Si en la sentencia se condenara a la Entidad gestora, ésta quedará exenta del ingreso prevenido en el número 2, pero deberá presentar <u>ante</u></p>	<p>2. En las sentencias dictadas en materia de Seguridad Social que reconozcan al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestación será necesario que haya ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente el capital importe de la prestación declarada en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciación del recurso, <u>presentando en la Oficina judicial</u> el oportuno resguardo, que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del Secretario.</p> <p>3. En el supuesto referido en el número anterior y una vez anunciado el recurso, <u>el Secretario judicial dictará diligencia</u> ordenando que se dé traslado a la entidad gestora o servicio común para que se fije el capital importe de la pensión a percibir. Recibida esta comunicación, la notificará al recurrente para que en el plazo de cinco días efectúe la consignación requerida en la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se pondrá fin al trámite del recurso.</p> <p>4. Si en la sentencia se condenara a la entidad gestora, ésta quedará exenta del ingreso prevenido en el número 2, pero deberá</p>

	<p><u>el Juzgado</u>, al anunciar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación de pago periódico y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del recurso</p>	<p>presentar <u>ante la Oficina judicial</u>, al anunciar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación de pago periódico y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del recurso</p>
<p><u>Art. 193 (Tramitación del recurso de suplicación):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. Si la resolución fuera recurrible en suplicación y la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo y forma y cumplido las demás prevenciones establecidas en esta Ley, <u>el Juez</u> tendrá por anunciado el recurso, y acordará poner los autos a disposición del Letrado designado para que en el plazo de una audiencia se haga cargo de aquéllos e interponga el recurso en el de los diez días siguientes al del vencimiento de dicha audiencia. Este plazo correrá cualquiera que sea el momento en que el Letrado recogiera los autos puestos a su disposición.</p> <p>2. Si la resolución impugnada no fuera recurrible en suplicación; si el recurrente infringiera su deber de consignar o de asegurar la cantidad objeto de condena; o si el recurso no se hubiera anunciado en tiempo, el órgano judicial declarará, mediante auto motivado, tener por no anunciado el recurso. Igual regla se aplicará cuando el recurso verse sobre prestaciones de la Seguridad Social y se omitieran las prevenciones contenidas en el artículo anterior. Contra este auto podrá recurrirse en queja</p>	<p>1. Si la resolución fuera recurrible en suplicación y la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo y forma y cumplido las demás prevenciones establecidas en esta Ley, <u>el Secretario judicial</u> tendrá por anunciado el recurso y acordará poner los autos a disposición del letrado o graduado social colegiado designado para que en el plazo de una audiencia se haga cargo de aquellos e interponga el recurso en el de los diez días siguientes al del vencimiento de dicha audiencia. Este plazo correrá cualquiera que sea el momento en que el letrado o el graduado social colegiado recogiera los autos puestos a su disposición.</p> <p>2. Si la resolución impugnada no fuera recurrible en suplicación, si el recurrente infringiera su deber de consignar o de asegurar la cantidad objeto de condena, o si el recurso no se hubiera anunciado en tiempo, el órgano judicial declarará, mediante auto motivado, tener por no anunciado el recurso. Igual regla se aplicará cuando el recurso verse sobre prestaciones de la Seguridad Social y se omitieran las prevenciones contenidas en el artículo anterior. Contra este auto podrá recurrirse en queja ante la Sala.</p>

	<p>ante la Sala.</p> <p>3. Si el recurrente hubiera incurrido en defectos u omisiones consistentes en la insuficiencia de consignar la condena o de asegurarla, de presentar el resguardo del depósito al que se refiere el artículo 227 de esta Ley, o no se acreditase la representación debida por el que anuncia el recurso, <u>el Juez</u> concederá a la parte el tiempo que considere pertinente para la aportación de los documentos omitidos o para la subsanación de los defectos apreciados, que en ningún caso será superior a cinco días. De no efectuarlo, dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, quedando firme la sentencia impugnada. Contra dicho auto podrá recurrirse en queja ante la Sala</p>	<p>3. Si el recurrente hubiera incurrido en defectos u omisiones consistentes en la insuficiencia de consignar la condena o de asegurarla, o de presentar el resguardo del depósito al que se refiere el artículo 227 de esta Ley, o no se acreditase la representación debida por el que anuncia el recurso, <u>el Secretario judicial</u> concederá a la parte el tiempo que considere pertinente para la aportación de los documentos omitidos o para la subsanación de los defectos apreciados, que en ningún caso será superior a cinco días. De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, quedando firme la sentencia impugnada. Contra dicho auto podrá recurrirse en queja ante la Sala</p>
<p><u>Art. 195 (Tramitación del recurso de suplicación):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>Interpuesto el recurso en tiempo y forma o subsanados sus defectos u omisiones, <u>el Juez</u> proveerá en el plazo de dos días dando traslado del mismo a la parte o partes recurridas por un plazo único de cinco días para todas. Transcurrido este plazo, háyanse presentado o no escritos de impugnación, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, junto con el recurso y con aquellos escritos, dentro de los dos días siguientes</p>	<p>Interpuesto el recurso en tiempo y forma o subsanados sus defectos u omisiones, <u>el Secretario judicial</u> proveerá en el plazo de dos días dando traslado del mismo a la parte o partes recurridas por un plazo único de cinco días para todas. Transcurrido este plazo, háyanse presentado o no escritos de impugnación, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, junto con el recurso y con aquellos escritos, dentro de los dos días siguientes</p>
<p><u>Art. 197 (Subsanación de defectos en suplicación):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p><u>Si la Sala apreciara</u>, recibidos los autos, defectos u omisiones subsanables en el recurso, concederá a la parte el plazo que estime suficiente y en ningún caso superior a</p>	<p>Si, recibidos los autos, <u>el Secretario judicial apreciara</u> defectos u omisiones subsanables en el recurso, concederá a la parte el plazo que estime suficiente y en ningún caso superior a ocho</p>

<p>-Sustitución del recurso de súplica por el de reposición ex LEC</p>	<p>ocho días, para que se aporten los documentos omitidos o se subsanen los defectos apreciados. De no efectuarse, la Sala dictará auto declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida, con devolución del depósito constituido y remisión de las actuaciones al Juzgado de procedencia. Contra dicho auto sólo cabe recurso de <u>súplica</u></p>	<p>días para que se aporten los documentos omitidos o se subsanen los defectos apreciados. De no efectuarse, la Sala dictará auto declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida, con devolución del depósito constituido y remisión de las actuaciones al Juzgado de procedencia. Contra dicho auto sólo cabe recurso de <u>reposición</u></p>
<p><u>Art. 198 (Tramitación de la suplicación el TSJ):</u> Modificación del apartado 3: - Sustitución del recurso de súplica por el de reposición ex LEC</p>	<p>3. La resolución de inadmisión del recurso deberá dictarse motivadamente dentro de los tres días siguientes al transcurso del plazo de audiencia concedido a la parte, háyanse evacuado o no las alegaciones. Contra el auto de inadmisión no cabe recurso de <u>reposición</u> y se notificará a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia</p>	<p>3. La resolución de inadmisión del recurso deberá dictarse motivadamente dentro de los tres días siguientes al transcurso de plazo de audiencia concedido a la parte, háyanse evacuado o no las alegaciones. Contra el auto de inadmisión no cabe recurso de <u>súplica</u> y se notificará a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia</p>
<p><u>Artículo 199 (Tramitación de la suplicación en el TSJ):</u> Modificación del apartado 2: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>2. Firme que sea la sentencia, <u>la Sala</u> devolverá los autos, junto con la certificación de aquélla, al Juzgado de procedencia para su ejecución</p>	<p>2. Firme que sea la sentencia, <u>el Secretario judicial acordará</u> la devolución de los autos, junto con la certificación de aquélla, al Juzgado de procedencia</p>
<p><u>Art. 204 (Resoluciones recurribles en casación):</u> Modificación íntegra: - Sustitución del recurso de súplica por el de reposición ex LEC - Inclusión de los autos que decidan recursos de revisión</p>	<p>Son recurribles en casación: Primeramente. Las sentencias dictadas en única instancia por las Salas a las que se refiere el artículo anterior. Segundo. Los autos que decidan el recurso de <u>súplica</u> interpuesto contra los que en ejecución de sentencia dicten dichas Salas, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado. Tercero. Los autos que resuelvan el recurso de <u>súplica</u> interpuesto contra</p>	<p>Son recurribles en casación: Primero.-Las sentencias dictadas en única instancia por las Salas a las que se refiere el artículo anterior. Segundo.-Los autos que decidan el recurso de <u>reposición</u> interpuesto contra los que en ejecución de sentencia dicten dichas Salas <u>y los autos que decidan el recurso de revisión interpuesto contra los decretos del Secretario judicial</u>, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.</p>

	la resolución en que la Sala, acto seguido a la presentación de la demanda, se declare incompetente por razón de la materia	Tercero.-Los autos que resuelvan el recurso de <u>reposición</u> interpuesto contra la resolución en que la Sala, acto seguido a la presentación de la demanda, se declare incompetente por razón de la materia
<u>Art. 207 (Tramitación del recurso de casación):</u> Modificación de los apartados 1 y 3: - Competencias del Secretario/a judicial	<p>1. Cumplidos los requisitos establecidos para recurrir, <u>la Sala</u> tendrá por preparado el recurso o los recursos de casación y emplazará a las partes para que comparezcan personalmente o por medio de Abogado o representante ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de quince días hábiles, si tuviesen su domicilio en la Península, o de veinte cuando residan fuera de ella, remitiéndose los autos dentro de los cinco días siguientes al del emplazamiento. (...)</p> <p>3. Si el recurrente hubiera incurrido en defectos u omisiones subsanables, <u>la Sala</u> le concederá el tiempo suficiente para que se subsanen los defectos apreciados, que en ningún caso será superior a diez días. De no efectuarlo, la Sala dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, quedando firme la sentencia impugnada. Contra dicho auto podrá recurrirse en queja</p>	<p>1. Cumplidos los requisitos establecidos para recurrir, <u>el Secretario judicial</u> tendrá por preparado el recurso o los recursos de casación. <u>En otro caso, dará cuenta a la Sala, para que resuelva lo que proceda.</u> Preparado el recurso, el Secretario judicial emplazará a las partes para que comparezcan personalmente o por medio de abogado o representante ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de quince días hábiles, si tuviesen su domicilio en la península, o de veinte cuando residan fuera de ella, remitiéndose los autos <u>por el Secretario judicial</u> dentro de los cinco días siguientes al del emplazamiento. (...)</p> <p>3. Si el recurrente hubiera incurrido en defectos u omisiones subsanables, <u>el Secretario judicial</u> le concederá el tiempo suficiente para que se subsanen los defectos apreciados, que en ningún caso será superior a diez días. De no efectuarlo, la Sala dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, quedando firme la sentencia impugnada. Contra dicho auto podrá recurrirse en queja</p>
<u>Art. 208 (Tramitación del recurso de casación):</u> Modificación del apartado 3: - Competencias del Secretario/a judicial	3. Si el recurrente no comprendido en el número anterior dejase transcurrir el tiempo concedido para el emplazamiento sin comparecer ante la Sala de lo Social, <u>ésta declarará desierto el recurso y devolverá las actuaciones a</u>	3. Si el recurrente no comprendido en el número anterior dejase transcurrir el tiempo concedido para el emplazamiento sin comparecer ante la Sala de lo Social, <u>por el Secretario judicial se declarará desierto el recurso y devolverá las</u>

	la Sala de procedencia	actuaciones a la Sala de procedencia
<p><u>Art. 209 (Tramitación del recurso de casación):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Sustitución del recurso de súplica por el de reposición ex LEC</p>	<p>De no haberse presentado los poderes que acrediten la representación de la parte o el resguardo de haber constituido el depósito legalmente exigido, o de apreciarse en ellos algún defecto, <u>la Sala</u> concederá a la parte el plazo que estime pertinente, sin que exceda de diez días, para que se aporten los documentos omitidos o subsane los defectos apreciados. De no efectuarse, la Sala dictará auto declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida, con devolución del depósito constituido y remisión de las actuaciones a la Sala de procedencia. Contra dicho auto sólo cabe recurso de <u>súplica</u></p>	<p>De no haberse presentado los poderes que acrediten la representación de la parte o el resguardo de haber constituido el depósito legalmente exigido, o de apreciarse en ellos algún defecto, <u>el Secretario judicial</u> concederá a la parte el plazo que estime pertinente, sin que exceda de diez días, para que se aporten los documentos omitidos o subsane los defectos apreciados. De no efectuarse, la Sala dictará auto declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida, con devolución del depósito constituido y remisión de las actuaciones a la Sala de procedencia. Contra dicho auto sólo cabe recurso de <u>reposición</u></p>
<p><u>Art. 210 (Tramitación del recurso de casación):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Oficina judicial</p>	<p>Recibidos los autos en la Sala Cuarta, <u>ésta</u> acordará su entrega al Abogado designado por el recurrente o nombrado de oficio para que formalice el recurso en el plazo de veinte días, plazo que empezará a correr, cualquiera que sea el momento en que los retire, a partir de la fecha en que se les notifique que están los autos <u>en la Secretaría de la Sala</u> y a su disposición</p>	<p>Recibidos los autos en la Sala Cuarta, <u>el Secretario judicial</u> acordará su entrega al abogado del recurrente para que formalice el recurso en el plazo de veinte días, plazo que empezará a correr, cualquiera que sea el momento en que los retire, a partir de la fecha en que se le notifique que están los autos a su disposición</p>
<p><u>Art. 211 (Tramitación del recurso de casación):</u> Modificación del apartado 3: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>3. La audiencia sobre la inadmisión del recurso la evacuará la parte dentro de los tres días siguientes a aquel en que le fue notificada la resolución de la Sala; y se conferirá traslado de los autos al Ministerio Fiscal por plazo de ocho días para que informe sobre la inadmisión de todos los motivos del recurso o de alguno de</p>	<p>3. La audiencia sobre la inadmisión del recurso la evacuará la parte dentro de los tres días siguientes a aquel en que le fue notificada la resolución de la Sala, <u>y el Secretario judicial</u> conferirá traslado de los autos al Ministerio Fiscal por plazo de ocho días para que informe sobre la inadmisión de todos los motivos del recurso o de alguno de ellos</p>

	ellos	
<p><u>Art. 212 (Tramitación del recurso de casación):</u> Modificación de los apartados 1 a 3: - Competencias del Secretario/a judicial - Oficina judicial</p>	<p>1. De admitirse parcial o totalmente el recurso, se entregarán los autos por plazo de diez días a la parte o partes recurridas y personadas, para que formalicen escrito de impugnación, plazo que empezará a correr, cualquiera que sea el momento en que se retire, a partir de la fecha en que se les notifique que están los autos en <u>la Secretaría</u> de la Sala y a su disposición.</p> <p>2. Si el Ministerio Fiscal no hubiera sido parte en el pleito, pasarán a él seguidamente los autos para que en el plazo de diez días informe sobre la procedencia o improcedencia de la casación pretendida.</p> <p>3. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal, junto con su informe, la Sala, si lo estima necesario, señalará día y hora para la celebración de la vista o, en otro caso, para votación y fallo, debiendo celebrarse una u otros dentro de los diez días siguientes</p>	<p>1. De admitirse parcial o totalmente el recurso, <u>el Secretario judicial</u> entregará los autos por plazo de diez días a la parte o partes recurridas y personadas, para que formalicen escrito de impugnación, plazo que empezará a correr, cualquiera que sea el momento en que se retiren, a partir de la fecha en que se les notifique que están los autos a su disposición.”</p> <p>2. Si el Ministerio Fiscal no hubiera sido parte en el pleito, <u>el Secretario</u> le pasará seguidamente los autos para que en el plazo de diez días informe sobre la procedencia o improcedencia de la casación pretendida.</p> <p>3. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal, junto con su informe, si la Sala lo estima necesario <u>el Secretario judicial</u> señalará día y hora para la celebración de la vista. En otro caso, el Tribunal señalará día y hora para deliberación, votación y fallo, debiendo celebrarse una u otros dentro de los diez días siguientes</p>
<p><u>Art. 220 (Tramitación del RCUD):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>Cumplidos los requisitos para recurrir, <u>la Sala</u> tendrá por preparado el recurso siguiéndose los trámites establecidos en los artículos 207, 208 y 209 de la presente Ley</p>	<p>Cumplidos los requisitos para recurrir, <u>se tendrá</u> por preparado el recurso siguiéndose los trámites establecidos en los artículos 207, 208 y 209 de la presente ley</p>
<p><u>Art. 221 (Tramitación del RCUD):</u> Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. La parte que hubiera preparado el recurso presentará ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se le hizo el emplazamiento, el escrito de interposición del recurso. De no hacerlo así, <u>la Sala</u> dictará auto</p>	<p>1. La parte que hubiera preparado el recurso presentará ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se le hizo el emplazamiento, el escrito de interposición del recurso. De no hacerlo así, <u>el Secretario judicial</u> dictará decreto poniendo fin al trámite</p>

	poniendo fin al trámite del recurso	del recurso
<u>Art. 222 (Tramitación del RCUD):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial	El escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con aportación certificada de la sentencia o sentencias contrarias y con fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada, así como del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia. La no aportación de la certificación de la sentencia o sentencias contrarias deberá subsanarse en el plazo de diez días, a menos que la parte acredite haberla solicitado en tiempo oportuno y no habersele expedido, en cuyo caso la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la reclamará de oficio	El escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con aportación certificada de la sentencia o sentencias contrarias y con fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada, así como del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia. La no aportación de la certificación de la sentencia o sentencias contrarias deberá subsanarse en el plazo de diez días, a menos que la parte acredite haberla solicitado en tiempo oportuno y no habersele expedido, en cuyo caso <u>el Secretario</u> de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la reclamará de oficio
<u>Art. 223 (Tramitación del RCUD):</u> Modificación del apartado 3: - Conversión a euros	3. Cuando la Sala entendiera que el recurso se interpuso con propósito dilatorio, podrá imponer además al recurrente una sanción pecuniaria que no podrá exceder de 150.000 pesetas	3. Cuando la Sala entendiera que el recurso se interpuso con propósito dilatorio, podrá imponer además al recurrente una sanción pecuniaria que no podrá exceder de <u>novecientos euros</u>
<u>Art. 224 (Tramitación del RCUD):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial	1. De admitirse el recurso, <u>la Sala</u> dará traslado del escrito de interposición a la parte o partes personadas para que formalicen su impugnación dentro del plazo de diez días, que empezará a correr, cualquiera que sea el momento en que se retiren, a partir de la fecha en que se le notifique que están los autos <u>en la Secretaría de la Sala y a su disposición.</u> 2. Si el Ministerio Fiscal no fuera el recurrente, pasarán a él seguidamente los	1. De admitirse el recurso, <u>el Secretario judicial</u> dará traslado del escrito de interposición a la parte o partes personadas para que formalicen su impugnación dentro del plazo de diez días, que empezará a correr, cualquiera que sea el momento en que se retiren, a partir de la fecha en que se le notifique que están los autos a su disposición. 2. Si el Ministerio Fiscal no fuera el recurrente, <u>el</u>

	autos para que en el plazo de diez días informe sobre la procedencia o improcedencia de la casación pretendida	<u>Secretario</u> le pasará seguidamente los autos para que en el plazo de diez días informe sobre la procedencia o improcedencia de la casación pretendida
Art. 227 (Depósitos y consignaciones para recurrir): Modificación de los apartados 1 y 2: - Conversión a euros - Competencias del Secretario/a judicial - Cuenta de depósitos y consignaciones	1. Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social intente interponer recurso de suplicación o casación, consignará como depósito: a) <u>25.000 pesetas</u> , si se trata de recurso de suplicación. b) <u>50.000 pesetas</u> , si el recurso fuera el de casación incluido el de casación para la unificación de doctrina. 2. Los depósitos se constituirán en la entidad de crédito correspondiente, debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en la <u>Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el recurso de suplicación, o en la Secretaría de la Sala al tiempo de personarse en ella</u>	1. Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social intente interponer recurso de suplicación o casación, consignará como depósito: a) <u>Ciento cincuenta euros</u> , si se trata de recurso de suplicación. b) <u>Trescientos euros</u> , si el recurso fuera el de casación incluido el de casación para la unificación de doctrina. 2. Los depósitos se constituirán <u>en la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente al órgano que hubiere dictado la resolución recurrida. El Secretario judicial verificará en la cuenta la realización del ingreso, debiendo quedar constancia de dicha actuación en el procedimiento</u>
Art. 228 (Consignaciones para recurrir): Modificación en su integridad: - Oficina judicial	Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación o al preparar el recurso de casación, haber consignado en la oportuna entidad de créditos y en la «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» abierta a nombre <u>del Juzgado o de la Sala de instancia</u> , la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación	Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación o al preparar el recurso de casación, haber consignado en la oportuna entidad de crédito y en la Cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre <u>del órgano jurisdiccional</u> la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante

	<p>en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación en metálico o, en su caso, el documento de aseguramiento quedará bajo custodia del <u>Secretario</u>, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos facilitando el oportuno recibo.</p>	<p>aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. En este último caso, el documento de aseguramiento quedará registrado y depositado en la <u>Oficina judicial</u>. El Secretario expedirá testimonio del mismo para su unión a autos, facilitando el oportuno recibo</p>
<p><u>Art. 229</u> <u>(Nombramiento y designación de Letrado a efectos de recursos):</u> Modificación en su integridad: - LEGITIMACIÓN DE GRADUADOS/AS SOCIALES PARA LA SUPLICACIÓN</p>	<p>1. Si el recurso que se entabla es el de suplicación, el nombramiento de Letrado se hará ante el Juzgado en el momento de anunciarlo. Si el recurso es el de casación, tanto ordinario como para la unificación de doctrina, se realizará ante la Sala de lo Social de procedencia si se verifica dentro del plazo señalado para prepararlo o ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del de emplazamiento.</p> <p>2. La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este caso, y de no acompañarse poder notarial, no habrá necesidad de ratificarse.</p> <p>3. Si no hubiere designación expresa de representante, se entenderá que el Letrado lleva también la representación de su defendido.</p> <p>4. Cuando el recurrente no hiciere designación expresa de Letrado, si es un trabajador o un empresario que goce del beneficio de justicia gratuita, se le nombrará de oficio por el</p>	<p>1. Si el recurso que se entabla es el de suplicación, el nombramiento de letrado <u>o de graduado social colegiado</u> se hará ante el Juzgado en el momento de anunciarlo. Si el recurso es el de casación, tanto ordinario como para la unificación de doctrina, el nombramiento de letrado se realizará ante la Sala de lo Social de procedencia si se verifica dentro del plazo señalado para prepararlo, o ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del de emplazamiento.</p> <p>2. La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este caso, y de no acompañarse poder notarial, no habrá necesidad de ratificarse.</p> <p>3. Si no hubiere designación expresa de representante, se entenderá que el letrado <u>o el graduado social colegiado</u> lleva también la representación de su defendido.</p> <p>4. Cuando el recurrente no hiciere designación expresa de letrado <u>o de graduado social colegiado</u>, si es un trabajador o un empresario que goce del derecho de asistencia jurídica gratuita se le nombrará letrado de oficio por el Juzgado en el día</p>

	Juzgado, en el día siguiente a aquel en que concluya el plazo para anunciar el recurso, o por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, dentro del día siguiente al que venza el tiempo de emplazamiento	siguiente a aquel en que concluya el plazo para anunciar el recurso, o por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dentro del día siguiente al que venza el tiempo de emplazamiento.
Art. 230 (trámites procesales de formalización de los recursos): Modificación de los apartados 2 y 3: - Competencias del Secretario/a judicial	<p>1. Si el Letrado recurrente hubiera sido designado de oficio, se le entregarán los autos con el fin de que interponga el recurso de suplicación o formalice el de casación dentro del plazo de diez o veinte días, respectivamente. Estos plazos empezarán a correr desde la fecha en que se le notifique que están los autos <u>en la Secretaría</u> y a su disposición.</p> <p>2. Si el defensor de oficio estimase improcedente el recurso, lo expondrá por escrito sin razonar su opinión, en el plazo de tres días. En este caso dentro de los dos siguientes, se nombrará nuevo Letrado y si éste opinare como el anterior, lo que expondrá en la forma y en el plazo antes indicado, se hará saber a la parte el resultado habido para que dentro de los tres días siguientes pueda valerse, si así lo deseara, de Abogado de su libre designación que habrá de formalizar dicho recurso dentro del plazo señalado en la Ley. La parte comunicará la designación de Abogado al Juzgado o a la Sala dentro del mismo plazo de tres días acordando éstos la entrega de los autos al designado, en la forma que se dispone en el apartado anterior. En otro caso, se pondrá fin al trámite del recurso</p>	<p>1. Si el letrado recurrente hubiera sido designado de oficio, <u>el Secretario judicial</u> le entregará los autos con el fin de que interponga el recurso de suplicación o formalice el de casación dentro del plazo de diez o veinte días, respectivamente. Estos plazos empezarán a correr desde la fecha en que se le notifique que están los autos a su disposición.</p> <p>2. Si el letrado de oficio estimase improcedente el recurso, lo expondrá por escrito sin razonar su opinión en el plazo de tres días. En este caso, dentro de los dos siguientes se nombrará nuevo letrado, y si éste opinare como el anterior, lo que expondrá en la forma y en el plazo antes indicado, se hará saber a la parte el resultado habido para que dentro de los tres días siguientes pueda valerse, si así lo deseara, de abogado de su libre designación, que habrá de formalizar dicho recurso dentro del plazo señalado en la Ley. La parte comunicará la designación de abogado al Juzgado o a la Sala dentro del mismo plazo de tres días, acordando éstos la entrega de los autos al designado en la forma que se dispone en el apartado anterior. En otro caso, se pondrá fin al trámite del recurso. <u>Si el recurso que se entabla es el de suplicación, la parte también podrá valerse para su representación</u></p>

		<u>técnica de graduado social colegiado de su libre designación</u>
<u>Art. 231 (Aportación de nuevos documentos a efectos de recurso):</u> Modificación del apartado 1: -Adaptación en la LEC en cita de artículo y recurso de reposición –por súplica-	1. La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si el recurrente presentara algún documento de los comprendidos en el artículo <u>506</u> de la Ley de Enjuiciamiento Civil o escrito que contuviese elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto motivado contra el que no cabrá recurso de <u>súplica</u>	1. La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si el recurrente presentara algún documento de los comprendidos en el artículo <u>270</u> de la Ley de Enjuiciamiento Civil o escrito que contuviese elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda mediante auto motivado contra el que no cabrá recurso de <u>reposición</u>
<u>Art. 232 (Procedimiento de acumulación de recursos):</u> Modificación del apartado 1: - Obligación de acumulación de recursos a instancia de parte	1. La Sala podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, antes del señalamiento para votación y fallo o para vista, en su caso, la acumulación de los recursos en trámite en los que exista identidad de objeto y de alguna de las partes. Antes de acordar lo que proceda sobre la acumulación, la Sala oirá, dentro del plazo único y común de cinco días, a las partes comparecidas en los recursos a acumular. La audiencia versará sobre la existencia o no de identidad objetiva	1. La Sala podrá acordar de oficio <u>y deberá decretar si es a</u> instancia de parte, antes del señalamiento para votación y fallo, o para vista en su caso, la acumulación de los recursos en trámite en los que exista identidad de objeto y de alguna de las partes. Antes de acordar lo que proceda sobre la acumulación, la Sala oirá, dentro del plazo único y común de cinco días, a las partes comparecidas en los recursos a acumular. La audiencia versará sobre la existencia o no de identidad objetiva
<u>Art. 233 (Costas recursales):</u> Modificación del apartado 1: - Legimitación de graduados/as sociales - Adaptación al euro	1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita. Las costas incluirán los honorarios del Abogado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso, sin que dichos honorarios	1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita. Las costas incluirán los honorarios del <u>abogado o del graduado social colegiado</u> de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso, sin que dichos honorarios puedan superar la cantidad de

	<p> puedan superar la cantidad de <u>100.000 pesetas</u>, en recursos de suplicación, y de <u>150.000</u> en recursos de casación</p>	<p><u>seiscientos euros</u> en recurso de suplicación, y de <u>novecientos euros</u> en recurso de casación</p>
<p>Modificación de la rúbrica del Capítulo VI del Libro III</p>	<p>Del recurso de revisión</p>	<p>De la revisión de sentencias</p>
<p><u>Art. 234 (antiguo recurso de revisión, ahora revisión de sentencias):</u> Modificación en su integridad: - Adaptación terminológica</p>	<p>Contra cualquier sentencia dictada por los órganos del orden jurisdiccional social procederá <u>el recurso de revisión</u> previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurso se interpondrá ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que habrá de resolverlo con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley de Enjuiciamiento, si bien el depósito para recurrir tendrá la cuantía que en la presente Ley se señala para los recursos de casación</p>	<p>Contra cualquier sentencia dictada por los órganos del orden jurisdiccional social procederá la revisión prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se solicitará a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y habrá de ser resuelta con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley de Enjuiciamiento, si bien el depósito para recurrir tendrá la cuantía que en la presente Ley se señala para los recursos de casación</p>
<p><u>Art. 236 (incidente de ejecución):</u> Modificación en su integridad - Competencias del Secretario/a judicial - Registro videográfico de comparecencias</p>	<p>Las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecución se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo de cinco días, a las partes que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto que habrá de dictarse en el plazo de tres días</p>	<p>Las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecución se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo de cinco días, a las partes, que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto o, <u>en su caso, por decreto</u> que habrán de dictarse en el plazo de tres días. <u>Cuando la comparecencia se celebre ante el Magistrado, se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen conforme a lo previsto en el artículo 89</u></p>
<p><u>Art. 237 (Impulso procesal de la ejecución):</u> Modificación del apartado 2: - Adaptación terminológica</p>	<p>2. Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y <u>diligencias</u> necesarias</p>	<p>2. Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias</p>
<p>Art. 239 (Efectos generales de la</p>	<p>1. La ejecución se llevará a efecto en los propios</p>	<p>1. La ejecución se llevará a efecto en los propios términos</p>

<p>ejecución): Modificación de los apartados 1 y 2: - Adaptaciones terminológicas - Competencias del Secretario/a judicial - Fijación de la cuantía máxima de multas coercitivas</p>	<p>términos establecidos en la sentencia. 2. Frente a la parte que, requerida al efecto dejare transcurrir, injustificadamente, el plazo concedido sin efectuar lo ordenado y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específico, el Juzgado o Tribunal, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación que ejecute, podrá, tras audiencia de las partes, imponer apremios pecuniarios, cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolución judicial. Para fijar la cuantía de dichos apremios se tendrá en cuenta su finalidad, la resistencia al cumplimiento y la capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto, atendidas la ulterior conducta y la justificación que sobre aquellos extremos pudiera efectuar el apremiado. La cantidad fijada, que se ingresará en el Tesoro, no podrá exceder, por cada día de atraso en el cumplimiento <u>de la cuantía máxima prevista para las multas en el Código Penal como pena correspondiente a las faltas</u></p>	<p>establecidos <u>en el título que se ejecuta.</u> 2. Frente a la parte que, requerida al efecto, dejare transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específico, <u>el Secretario judicial</u>, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación que ejecute, podrá tras audiencia de las partes imponer apremios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolución judicial. Para fijar la cuantía de dichos apremios se tendrá en cuenta su finalidad, la resistencia al cumplimiento y la capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto, atendidas la ulterior conducta y la justificación que sobre aquellos extremos pudiera efectuar el apremiado. La cantidad fijada, que se ingresará en el Tesoro Público, no podrá exceder, por cada día de atraso en el cumplimiento, <u>de la suma de trescientos euros</u></p>
<p><u>Art. 242 (Plazos para la instancia de le ejecución):</u> Modificación del apartado 2: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>2. Suspendido o paralizado el proceso a petición o por causa imputable al ejecutante y transcurrido un mes sin que haya instado su continuación, <u>el órgano judicial</u> requerirá a éste a fin de que manifieste, en el término de cinco días, si la ejecución ha de seguir</p>	<p>2. Suspendido o paralizado el proceso a petición o por causa imputable al ejecutante y transcurrido un mes sin que haya instado su continuación, <u>el Secretario judicial</u> requerirá a éste a fin de que manifieste, en el término de cinco días, si la ejecución ha de seguir adelante y solicite lo que a su</p>

	adelante y solicite lo que a su derecho convenga, con la advertencia de que transcurrido este último plazo se archivarán provisionalmente las actuaciones	derecho convenga, con la advertencia de que transcurrido este último plazo se archivarán provisionalmente las actuaciones.”
Art. 243 (Aplazamiento de pago): Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial - Instrumento procesal	1. Si el cumplimiento inmediato de la obligación que se ejecuta pudiera ocasionar a trabajadores dependientes del ejecutado perjuicios desproporcionados en relación a los que al ejecutante se derivarían del no cumplimiento exacto, por poner en peligro cierto la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora, <u>el órgano judicial ejecutor</u> podrá, previa audiencia de los interesados y en las condiciones que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo imprescindible	1. Si el cumplimiento inmediato de la obligación que se ejecuta pudiera ocasionar a trabajadores dependientes del ejecutado perjuicios desproporcionados en relación a los que al ejecutante se derivarían del no cumplimiento exacto, por poner en peligro cierto la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora, <u>el Secretario judicial, mediante decreto recurrible directamente en revisión,</u> podrá, previa audiencia de los interesados y en las condiciones que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo imprescindible
Art. 247 (Declaración de bienes del ejecutado): Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial	1. El ejecutado está obligado a efectuar, <u>a requerimiento del órgano judicial,</u> manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución	1. El ejecutado está obligado a efectuar, <u>a requerimiento del Secretario judicial,</u> manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución
Art. 248 (Indagación de bienes del ejecutado): Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial	1. Si no se tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, <u>el órgano judicial</u> deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o	1. Si no se tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, <u>el Secretario judicial</u> deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los

	<p>derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles.</p> <p>2. También podrá <u>el órgano judicial</u>, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, dirigirse o recabar la información precisa, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo</p>	<p>que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles.</p> <p>2. También podrá <u>el Secretario judicial</u>, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo</p>
<p><u>Art. 250</u> <u>(Notificaciones a los representantes de los trabajadores):</u> Modificación en su integridad: - Modificaciones terminológicas</p>	<p>Atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en que se despache la ejecución <u>o demás resoluciones</u> en que se decreten embargos, se notificarán a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso</p>	<p>Atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en que se despache la ejecución <u>y las resoluciones</u> en que se decreten embargos se notificarán a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso</p>
<p><u>Art. 251 (Depósito, administración, intervención y peritación de bienes):</u> Modificación de los apartados 1 y 3: - Competencias del Secretario/a judicial - Instrumento procesal</p>	<p>1. El Fondo de Garantía Salarial y las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social, cuando estén legitimados para intervenir en el proceso, quedan obligados a asumir el depósito, la administración, intervención o peritación de los bienes embargados, designando a tal fin persona idónea, desde que se les requiera <u>judicialmente</u>. De tal obligación podrán liberarse con autorización judicial, si justifican la imposibilidad de</p>	<p>1. El Fondo de Garantía Salarial y las Entidades gestoras o servicios comunes de la Seguridad Social, cuando estén legitimados para intervenir en el proceso, quedan obligados a asumir el depósito, la administración, intervención o peritación de los bienes embargados, designando a tal fin persona idónea, desde que se les requiera <u>por el Secretario judicial mediante decreto</u>. De tal obligación podrán liberarse si justifican ante el Secretario la imposibilidad de cumplirla o su desproporcionada</p>

	<p>cumplirla o su desproporcionada gravosidad. (...) 3. Las actuaciones materiales relativas al depósito, conservación, transporte, administración y publicidad para su venta de los bienes judicialmente embargados podrá encomendarse a entidades autorizadas administrativamente con tal fin, si así lo acordara <u>el órgano judicial</u></p>	<p>gravosidad. (...) 3. Las actuaciones materiales relativas al depósito, conservación, transporte, administración y publicidad para su venta de los bienes judicialmente embargados podrá encomendarse a entidades autorizadas administrativamente con tal fin o a las entidades previstas a este fin en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si así lo acordara <u>el Secretario judicial</u></p>
<p><u>Art. 253 (Bienes públicamente registrados):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Oficina judicial</p>	<p>1. Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros inscribibles en registros públicos, <u>el órgano judicial</u> ordenará de oficio que se libre y remita directamente al Registrador mandamiento para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes. 2. El Registrador deberá comunicar al <u>órgano judicial</u> la existencia de ulteriores asientos que pudieren afectar al embargo anotado</p>	<p>1. Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros inscribibles en registros públicos, <u>el Secretario judicial</u> ordenará de oficio que se libre y remita directamente al Registrador mandamiento para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes. 2. El Registrador deberá comunicar a la <u>Oficina judicial</u> la existencia de ulteriores asientos que pudieren afectar al embargo anotado</p>
<p><u>Art. 254 (Administración judicial):</u> Modificación de los apartados 2 y 3 y adición de un nuevo apartado 4: - Competencias del Secretario/a judicial - Instrumento procesal - Método de nombramiento de administrador</p>	<p>2. Con tal fin, <u>el órgano judicial</u> citará de comparecencia a las partes para que lleguen a un acuerdo o, en su caso, efectúen las alegaciones y pruebas que estimen oportunas sobre la necesidad o no de nombramiento de administrador o interventor, persona que deba desempeñar tal cargo, exigencia o no de fianza, forma de actuación, rendición de cuentas y</p>	<p>2. Con tal fin, <u>el Secretario judicial</u> citará de comparecencia <u>ante sí mismo</u> a las partes para que lleguen a un acuerdo y, <u>una vez alcanzado en su caso, establecerá mediante decreto los términos de la administración judicial en consonancia con el acuerdo.</u> 3. <u>Para el supuesto que no se alcance acuerdo, el Secretario les convocará a comparecencia ante el Juez o Magistrado que dictó la orden general de ejecución, a fin de</u></p>

	<p>retribución procedente.</p> <p>3. El administrador o, en su caso, el interventor nombrado deberá rendir cuenta final de su gestión</p>	<p><u>que efectúen las alegaciones y pruebas que estimen oportunas sobre la necesidad o no de nombramiento de administrador o interventor, persona que deba desempeñar tal cargo, exigencia o no de fianza, forma de actuación, rendición de cuentas y retribución procedente, resolviéndose mediante auto lo que proceda.</u></p> <p>4. El administrador o, en su caso, el interventor nombrado deberá rendir cuenta final de su gestión</p>
<p><u>Art. 255</u> <u>(Nombramiento de depositario):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>Puede ser designado depositario el ejecutante o el ejecutado, salvo oposición justificada de la parte contraria. También podrá el <u>órgano judicial</u> aprobar la designación como depositario de un tercero, de existir común acuerdo de las partes o a propuesta de una de ellas, sin oposición justificada de la contraria</p>	<p>Puede ser designado depositario el ejecutante o el ejecutado, salvo oposición justificada de la parte contraria. También podrá <u>el Secretario judicial</u> aprobar la designación como depositario de un tercero, de existir común acuerdo de las partes o a propuesta de una de ellas, sin oposición justificada de la contraria</p>
<p><u>Art. 256 (Reembargo):</u> Modificación de los apartados 1 y 2: - Competencias del Secretario/a judicial - Oficina judicial</p>	<p>1. De estar previamente embargados los bienes, <u>el órgano judicial reembargante</u> adoptará las medidas oportunas para su efectividad.</p> <p>2. <u>El órgano judicial</u> o administrativo al que se comunique el reembolso acordará lo procedente para garantizarlo y, en el plazo máximo de diez días, informará al reembargante sobre las circunstancias y valor de los bienes, cantidad objeto de apremio de la que respondan y estado de sus actuaciones</p>	<p>1. De estar previamente embargados los bienes, <u>el Secretario judicial que haya acordado el reembolso</u> adoptará las medidas oportunas para su efectividad.</p> <p>2. <u>La Oficina judicial</u> o administrativa a la que se comunique el reembolso acordará lo procedente para garantizarlo y, en el plazo máximo de diez días, informará al reembargante sobre las circunstancias y valor de los bienes, cantidad objeto de apremio de la que respondan y estado de sus actuaciones</p>
<p><u>Art. 257</u> <u>(Aseguramiento de bienes embargados):</u> Modificación del apartado : - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. <u>El órgano judicial</u>, tras la dación de cuenta de la diligencia de embargo positiva ratificará o modificará lo efectuado por la Comisión Ejecutiva, acordando, en su caso, la adopción de las garantías</p>	<p>1. <u>El Secretario judicial</u>, tras la dación de cuenta por el gestor procesal y administrativo de la diligencia de embargo positiva ratificará o modificará lo efectuado por la comisión ejecutiva, acordando, en su caso, la adopción de las</p>

	necesarias para asegurar la traba según la naturaleza de los bienes embargados	garantías necesarias para asegurar la traba según la naturaleza de los bienes embargados
Art. 258 (Tercerías): Modificación del apartado 3: - Competencias del Secretario/a judicial	3. Admitida la solicitud, se seguirá el trámite incidental regulado en esta Ley. <u>El órgano judicial sólo</u> suspenderá las actuaciones relativas a la liquidación de los bienes discutidos hasta la resolución del incidente	3. Admitida la solicitud, se seguirá el trámite incidental regulado en esta Ley. <u>El Secretario judicial suspenderá</u> las actuaciones relativas a la liquidación de los bienes discutidos hasta la resolución del incidente
Art. 259 (Tasación): Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial	1. Cuando fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su realización, <u>el órgano judicial</u> designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administración de Justicia, y además o en su defecto, podrá requerir la designación de persona idónea a las entidades obligadas legalmente a asumir la peritación	1. Cuando fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su realización, <u>el Secretario judicial</u> designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administración de Justicia, y además o en su defecto podrá requerir la designación de persona idónea a las entidades obligadas legalmente a asumir la peritación
Art. 261 (Procedimientos de liquidación): Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial - Remisión a la LEC	1. Para la liquidación de los bienes embargados, podrán emplearse estos procedimientos: a) Por venta en entidad autorizada administrativamente con tal fin, si así lo acordara el órgano judicial, cualquiera que fuere el valor de los bienes. b) Por subasta ante fedatario público en los términos que se establezcan reglamentariamente. c) Mediante subasta judicial, en los casos en que no se empleen los procedimientos anteriores	1. Para la liquidación de los bienes embargados, podrán emplearse estos procedimientos: a) Por venta en entidad autorizada administrativamente <u>o en las entidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con tal fin, si así lo acordara el Secretario judicial</u> , cualquiera que fuere el valor de los bienes. b) Por subasta ante fedatario público en los términos que se establezcan reglamentariamente. c) Mediante subasta judicial, en los casos en que no se empleen los procedimientos anteriores
Art. 262 (Realización de bienes embargados): Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial	Artículo 262. La realización de los bienes embargados <u>mediante subasta judicial</u> se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil, con las modalidades	La realización de los bienes embargados se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil, <u>con la única excepción de que para el caso de resultar desierta la subasta tendrán los ejecutantes o, en</u>

<p>- Remisión a la LEC - Incremento al 30 por ciento del avalúo para adjudicación de bienes por el ejecutante - Desaparición del sistema de tres subastas</p>	<p>siguientes: a) <u>En la tercera subasta no se admitirán posturas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se aprobará el remate.</u> b) De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse uso de este derecho, se alzaré el embargo</p>	<p>su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los bienes <u>por el 30 por ciento del avalúo</u>, dándoseles, a tal fin, el plazo común de diez días. De no hacerse uso de este derecho, se alzaré el embargo</p>
<p>Art. 265 (Título de ejecución): Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Instrumento procesal</p>	<p>1. No será preceptivo documentar en escritura pública el <u>auto de adjudicación</u>. 2. Será título bastante para la inscripción del <u>auto de adjudicación el testimonio expedido por el Secretario del Juzgado o Tribunal, comprensivo del referido auto y de las circunstancias necesarias para verificar aquélla</u></p>	<p>1. No será preceptivo documentar en escritura pública el <u>decreto de adjudicación</u>. 2. Será título bastante para la inscripción el testimonio del <u>decreto de adjudicación, expedido por el Secretario judicial</u></p>
<p>Art. 266 (Criterios de pago): Modificación del apartado 2: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>2. Si lo hubiere aprobado previamente <u>el órgano judicial</u>, podrá anticiparse al pago del principal el abono de los gastos que necesariamente hubiere requerido la propia ejecución y el de los acreditados por terceros obligados a prestar la colaboración judicialmente requerida</p>	<p>2. Si lo hubiere aprobado previamente <u>el Juez, el Secretario judicial</u> podrá anticipar al pago del principal el abono de los gastos que necesariamente hubiere requerido la propia ejecución y el de los acreditados por terceros obligados a prestar la colaboración judicialmente requerida</p>
<p>Art. 269 (Criterios de pago en caso de acreedores concurrentes): Modificación de los apartados 2 y 3: - Competencias del Secretario/a judicial - Instrumento judicial</p>	<p>2. Si las cantidades obtenidas no son suficientes para cubrir la totalidad de los créditos, se procederá del siguiente modo: a) Si ninguno de los acreedores concurrentes alegare preferencia para el</p>	<p>2. Si las cantidades obtenidas no son suficientes para cubrir la totalidad de los créditos, se procederá del siguiente modo: a) Si ninguno de los acreedores concurrentes alegare preferencia para el cobro, <u>el Secretario judicial</u> dispondrá la distribución</p>

	<p>cobro, <u>el órgano judicial</u> dispondrá la distribución proporcional de cantidades conforme se vayan obteniendo.</p> <p>b) Si alguno de ellos alega preferencia podrán presentar los acreedores o requerírseles para que lo hagan, en el plazo que se les fije, una propuesta común de distribución.</p> <p>3. No presentándose o no coincidiendo las propuestas formuladas, <u>el órgano judicial</u>, en el plazo de cinco días, <u>dictará providencia</u> estableciendo provisionalmente los criterios de distribución y <u>ordenando al Secretario que practique, conforme a ellos, diligencia de distribución</u> concretando las cantidades correspondientes a cada acreedor</p>	<p>proporcional de cantidades conforme se vayan obteniendo.</p> <p>b) Si alguno de ellos alega preferencia, podrán presentar los acreedores o requerírseles <u>por el Secretario judicial</u> para que lo hagan, en el plazo que se les fije, una propuesta común de distribución.</p> <p>3. No presentándose o no coincidiendo las propuestas formuladas, <u>el Secretario judicial</u>, en el plazo de cinco días, <u>dictará decreto</u> estableciendo provisionalmente los criterios de distribución y concretando las cantidades correspondientes a cada acreedor conforme a aquellos</p>
<p><u>Art. 270 (Propuesta común):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. De la propuesta común o de la <u>formulada por el Juzgado o Tribunal</u>, se dará traslado en su caso, a los acreedores no proponentes, al ejecutado y al Fondo de Garantía Salarial, para que manifiesten su conformidad o disconformidad en el plazo de tres días.</p> <p>2. Si no se formulara oposición, <u>el órgano judicial</u> deberá aprobar la propuesta común presentada o se entenderá definitiva la diligencia de distribución practicada. De formularse aquélla, se convocará a todos los interesados a una comparecencia, dándose traslado de los escritos presentados</p>	<p>1. De la propuesta común o de la <u>formulada por el Secretario judicial</u>, se dará traslado en su caso, a los acreedores no proponentes, al ejecutado y al Fondo de Garantía Salarial, para que manifiesten su conformidad o disconformidad en el plazo de tres días.</p> <p>2. Si no se formulara oposición, <u>el Secretario judicial</u> deberá aprobar la propuesta común presentada o se entenderá definitiva la distribución por él practicada. De formularse aquélla, se convocará a todos los interesados a una comparecencia, dándose traslado de los escritos presentados</p>
<p><u>Art. 271 (Acuerdo de distribución):</u> Modificación en su integridad:</p>	<p>1. Si en la comparecencia se lograre un acuerdo de distribución, podrá aprobarse en el mismo</p>	<p>1. Si en la comparecencia se lograre un acuerdo de distribución, podrá aprobarse en el mismo acto <u>por el</u></p>

<p>- Competencias del Secretario/a judicial - Trámite ante el Juez, caso de desacuerdo</p>	<p>acto. A los interesados que no comparezcan injustificadamente se les tendrá por conformes con lo acordado por los comparecientes. 2. De no lograrse acuerdo, continuará el incidente, efectuándose las alegaciones y pruebas relativas, en su caso, a la existencia o subsistencia de las preferencias invocadas. Se resolverán, mediante auto, las cuestiones planteadas y se establecerá la forma de distribución</p>	<p><u>Secretario judicial</u>. A los interesados que no comparezcan injustificadamente se les tendrá por conformes con lo acordado por los comparecientes. 2. De no lograrse acuerdo, <u>el Secretario citará a los interesados a una comparecencia ante el Juez o Tribunal, quien continuará el incidente</u>, efectuándose las alegaciones y pruebas relativas, en su caso, a la existencia o subsistencia de las preferencias invocadas. Se resolverán, mediante auto, las cuestiones planteadas y se establecerá la forma de distribución</p>
<p><u>Art. 274 (Insolvencia empresarial):</u> Modificación de los apartados 1 a 4: - Competencias del Secretario/a judicial - Instrumento procesal</p>	<p>1. Previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, se le dará audiencia, por un plazo máximo de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal que le consten. 2. Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas por el Fondo de Garantía Salarial, <u>el órgano judicial dictará auto declarando</u>, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados. 3. Declarada judicialmente la insolvencia de una</p>	<p>1. Previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, <u>el Secretario judicial le dará audiencia</u>, por un plazo máximo de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe bienes del deudor principal que le consten. 2. Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas por el Fondo de Garantía Salarial, <u>el Secretario judicial dictará decreto declarando</u>, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados. 3. Declarada la insolvencia de una empresa, ello constituirá base suficiente para estimar</p>

	<p>empresa, ello constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el <u>auto de insolvencia</u> sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en el artículo 248 de esta Ley, si bien en todo caso se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.</p> <p>4. De estar determinadas en la sentencia que se ejecute las cantidades legalmente a cargo del Fondo de Garantía Salarial, firme la declaración de insolvencia, se le requerirá en su caso de abono, en el plazo de diez días y, de no efectuarlo, continuará la ejecución contra el mismo</p>	<p>su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar <u>el decreto de insolvencia</u> sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en el artículo 248 de esta Ley, si bien en todo caso se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.</p> <p>4. De estar determinadas en la sentencia que se ejecute las cantidades legalmente a cargo del Fondo de Garantía Salarial, firme la declaración de insolvencia, <u>el Secretario judicial</u> le requerirá en su caso de abono, en el plazo de diez días y, de no efectuarlo, continuará la ejecución contra el mismo</p>
<p><u>Art. 278 (Vistilla en ejecución de despido):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>Instada la ejecución del fallo, el Juez citará de comparecencia a las partes dentro de los cuatro días siguientes. El día de la comparecencia, si los interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o su representante, se celebrará el acto sin su presencia</p>	<p>Instada la ejecución del fallo, <u>por el Juez competente se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma.</u> Seguidamente, el Secretario citará de comparecencia a las partes ante el Juez dentro de los cuatro días siguientes. El día de la comparecencia, si los interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o su representante, se celebrará el acto sin su presencia</p>
<p><u>Art. 280 (Ejecución en sus propios términos de las sentencias de despido):</u> Modificación del apartado 2: - Contenido del auto de readmisión</p>	<p>2. A tal fin, en cualesquiera de los supuestos mencionados en el número anterior, el Juez, una vez solicitada la readmisión, requerirá al empresario para que reponga al trabajador en su puesto en</p>	<p>2. A tal fin, en cualquiera de los supuestos mencionados en el número anterior, una vez solicitada la readmisión, el Juez <u>competente dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma, y acordará requerir</u></p>

	el plazo de tres días, sin perjuicio de que adopte, a instancia de parte, las medidas que dispone el artículo 282	al empresario para que reponga al trabajador en su puesto en el plazo de tres días, sin perjuicio de que adopte, a instancia de parte, las medidas que dispone el artículo 282
Art. 281 (Consecuencias de la no readmisión forzosa): Modificación del apartado 1: - Cuestiones terminológicas	1. En los supuestos a que se refiere el artículo anterior, si el empresario no procediera a la readmisión o lo hiciera en condiciones distintas a las que regían antes de producirse el despido, el trabajador podrá acudir ante el Juzgado de lo Social, solicitando la ejecución del fallo, dentro de los veinte días siguientes al tercero que, como plazo máximo para la reincorporación, dispone el artículo precedente	1. En los supuestos a que se refiere el artículo anterior, si el empresario no procediera a la readmisión o lo hiciera en condiciones distintas a las que regían antes de producirse el despido, el trabajador podrá acudir ante el Juzgado de lo Social, solicitando la ejecución <u>regular</u> del fallo, dentro de los veinte días siguientes al tercero que, como plazo máximo para la reincorporación, dispone el artículo precedente
Art. 282 (Medidas coercitivas caso de no readmisión): Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial	Cuando el empresario no diese cumplimiento a la orden de reposición a que se refiere el artículo anterior, <u>el Juez</u> acordará las medidas siguientes: a) Que el trabajador continúe percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuantía que la declarada en la sentencia, con los incrementos que por vía de Convenio Colectivo o mediante norma estatal se produzcan hasta la fecha de la readmisión en debida forma. A tal fin, <u>el Juez despachará ejecución</u> , en tantas ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a seis meses de salario, haciéndose efectivas al trabajador con cargo a la misma las retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la readmisión en forma regular, acuerde la devolución al empresario	Cuando el empresario no diese cumplimiento a la orden de reposición a que se refiere el artículo anterior, <u>el Secretario judicial</u> acordará las medidas siguientes: a) Que el trabajador continúe percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuantía que la declarada en la sentencia, con los incrementos que por vía de convenio colectivo o mediante norma estatal se produzcan hasta la fecha de la readmisión en debida forma. A tal fin, <u>cumplimentará la autorización contenida en el auto despachando ejecución</u> en tantas ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a seis meses de salario, haciéndose efectivas al trabajador con cargo a la misma las retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la readmisión en forma regular, acuerde la devolución al empresario del saldo existente en esa fecha.

	<p>del saldo existente en esa fecha.</p> <p>b) Que el trabajador continúe en alta y con cotización en la Seguridad Social, lo que pondrá en conocimiento de la Entidad Gestora a los efectos procedentes.</p> <p>c) Que el Delegado de personal, miembro del Comité de Empresa o Delegado sindical continúe desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir u oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad laboral a los efectos de sancionar su conducta de acuerdo con lo que dispone <u>el artículo 97 del texto refundido</u> de la Ley del Estatuto de los Trabajadores</p>	<p>b) Que el trabajador continúe en alta y con cotización en la Seguridad Social, lo que pondrá en conocimiento de la entidad gestora o servicio común a los efectos procedentes.</p> <p>c) Que el delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical continúe desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir u oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad laboral a los efectos de sancionar su conducta de acuerdo con lo que dispone la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social</p>
<p><u>Art. 283 (Extinción del contrato y derecho a la vivienda):</u> Modificación del apartado 1: - Competencias del Secretario/a judicial</p>	<p>1. Cuando recaiga resolución firme en que se declara la extinción del contrato de trabajo, si el trabajador ocupare vivienda por razón del mismo deberá abandonarla en el plazo de un mes. <u>El órgano judicial</u>, si existe motivo fundado, podrá prorrogar dicho plazo por dos meses más</p>	<p>1. Cuando recaiga resolución firme en que se declare la extinción del contrato de trabajo, si el trabajador ocupare vivienda por razón del mismo deberá abandonarla en el plazo de un mes. <u>El Secretario judicial</u>, si existe motivo fundado, podrá prorrogar dicho plazo por dos meses más</p>
<p><u>Art. 286 (Ejecución de sentencias en materia de SS):</u> Modificación en su integridad: - Competencias del Secretario/a judicial - Oficina judicial</p>	<p>1. En los procesos seguidos por prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social, una vez sea firme la sentencia condenatoria a la constitución de capital, se remitirá <u>por el Juzgado</u> copia certificada a la Entidad Gestora o Servicio Común competente.</p> <p>2. El indicado Organismo deberá, en el plazo máximo de diez días, comunicar <u>al</u></p>	<p>1. En los procesos seguidos por prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social, una vez sea firme la sentencia condenatoria a la constitución de capital, se remitirá <u>por el Secretario judicial</u> copia certificada a la entidad gestora o servicio común competente.</p> <p>2. El indicado organismo deberá, en el plazo máximo de diez días, comunicar <u>a la</u></p>

	<p><u>Juzgado</u> el importe del capital a ingresar, lo que se notificará a las partes, requiriendo a la condenada para que lo ingrese en el plazo de diez días</p>	<p><u>Oficina judicial</u> el importe del capital a ingresar, lo que se notificará a las partes, requiriendo <u>el Secretario</u> a la condenada para que lo ingrese en el plazo de diez días</p>
<p><u>Art. 288 (Ejecución provisional y anticipos):</u> Modificación de los apartados 2 y 3: - Competencias del Secretario/a judicial - Regulación del anticipo en supuestos de avales bancarios o medios alternativos</p>	<p>2. Si para recurrir la sentencia que provisionalmente se ejecute se hubiere efectuado consignación, el órgano judicial dispondrá el anticipo con cargo a ella, garantizándose por el Estado la devolución, al empresario, en su caso, de las cantidades que se abonen al trabajador.</p> <p>3. De no haber sido preceptivo consignar para recurrir, el anticipo se abonará al trabajador directamente por el Estado. En este supuesto, <u>el órgano judicial</u> remitirá al organismo gestor testimonio suficiente de lo actuado y le requerirá para que en el plazo de diez días, efectúe el abono al</p>	<p>2. Si para recurrir la sentencia que provisionalmente se ejecute se hubiere efectuado consignación <u>en metálico, mediante aval o por cualquier otro medio admitido, el Secretario judicial</u> dispondrá el anticipo con cargo a aquélla, garantizándose por el Estado la devolución al empresario, en su caso, de las cantidades que se abonen al trabajador. <u>Si el importe de la condena se hubiera garantizado mediante aval o por cualquier otro medio admitido, el Secretario judicial, antes de disponer el anticipo prevenido en el párrafo anterior, requerirá a la empresa para que, en el plazo de cuatro días, proceda a consignar en metálico la cantidad a anticipar, disponiendo, luego de acreditada la consignación, la devolución del aval o del correspondiente medio de garantía inicialmente constituido, contra entrega simultánea del nuevo aval o medio de garantía por la menor cuantía relicta. En este supuesto regirá igualmente la garantía por el Estado en los términos establecidos en el párrafo anterior.</u></p> <p>3. De no haber sido preceptivo consignar para recurrir, el anticipo se abonará al trabajador directamente por el Estado. En este supuesto, <u>el Secretario judicial</u> remitirá al organismo gestor testimonio suficiente de lo actuado y le requerirá para que en el plazo de diez días, efectúe el abono al trabajador</p>

	trabajador	
<u>Art. 291 (Reintegro de anticipos indebidos):</u> Modificación del apartado 1: - Cuestiones terminológicas	1. Si se incumple la obligación de reintegro, será título bastante para iniciar la ejecución destinada a hacerla efectiva la resolución firme en que se acordaba la ejecución provisional junto con la certificación, librada por el Secretario <u>del Juzgado</u> o por el organismo gestor, en la que se determinaran las cantidades abonadas	1. Si se incumple la obligación de reintegro, será título bastante para iniciar la ejecución destinada a hacerla efectiva la resolución firme en que se acordaba la ejecución provisional junto con la certificación, librada por el Secretario <u>judicial</u> o por el organismo gestor, en la que se determinaran las cantidades abonadas
<u>Art. 301 (Carácter ejecutable de las sentencias no firmes recaídas en determinadas modalidades procesales):</u> Modificación en su integridad: - Cuestiones terminológicas	Las sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos, en los de impugnación de los Convenios Colectivos y en los de tutela de los derechos <u>de libertad sindical</u> y demás derechos fundamentales, serán ejecutivas desde que se dicten, según la naturaleza de la pretensión reconocida, no obstante, el recurso que contra ellas pudiera interponerse	Las sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos, en los de impugnación de los convenios colectivos y en los de tutela de la libertad sindical y <u>demás derechos fundamentales</u> , serán ejecutivas desde que se dicten, según la naturaleza de la pretensión reconocida, no obstante el recurso que contra ellas pudiera interponerse
<u>Art. 302 (Recurribilidad de la ejecución provisional):</u> Modificación en su integridad: - Desaparición del recurso de suplica - Regulación del recurso de reposición frente a las resoluciones del Secretario/a	Frente a las resoluciones dictadas en ejecución provisional sólo procederán, en su caso los recursos de reposición o <u>súplica</u>	Frente a las resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal en ejecución provisional, sólo procederá el recurso de reposición. <u>Frente a las resoluciones dictadas por el Secretario judicial en ejecución provisional procederá recurso de reposición, salvo que fueren directamente recurribles en revisión</u>
<u>DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA (Modificación reglamentaria de honorarios y multas):</u> Modificación del apartado 2: - Inclusión de honorarios de graduados/as sociales	2. Igualmente, y tras los informes mencionados, podrá modificar las cantidades que se establecen en esta Ley respecto de los honorarios a que tienen derecho los Letrados de las partes recurridas, de las sanciones pecuniarias y multas y de la cuantía de los depósitos para recurrir	2. Igualmente, y tras los informes mencionados, podrá modificar las cantidades que se establecen en esta Ley respecto de los honorarios a que tienen derecho los letrados y <u>graduados sociales colegiados</u> de las partes recurridas, de las sanciones pecuniarias y multas, y de la cuantía de los depósitos para recurrir en suplicación,

	en suplicación, casación y revisión	casación y revisión
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA: <u>SUPRESIÓN</u>	El proceso ordinario regulado en la presente Ley será de aplicación supletoria en la tramitación de las cuestiones contenciosas a las que se refiere el artículo 125 de la Ley 3/1987, de 2 de abril , General de Sociedades Cooperativas, en los términos establecidos en el artículo 126 de esta misma Ley	- - - -